

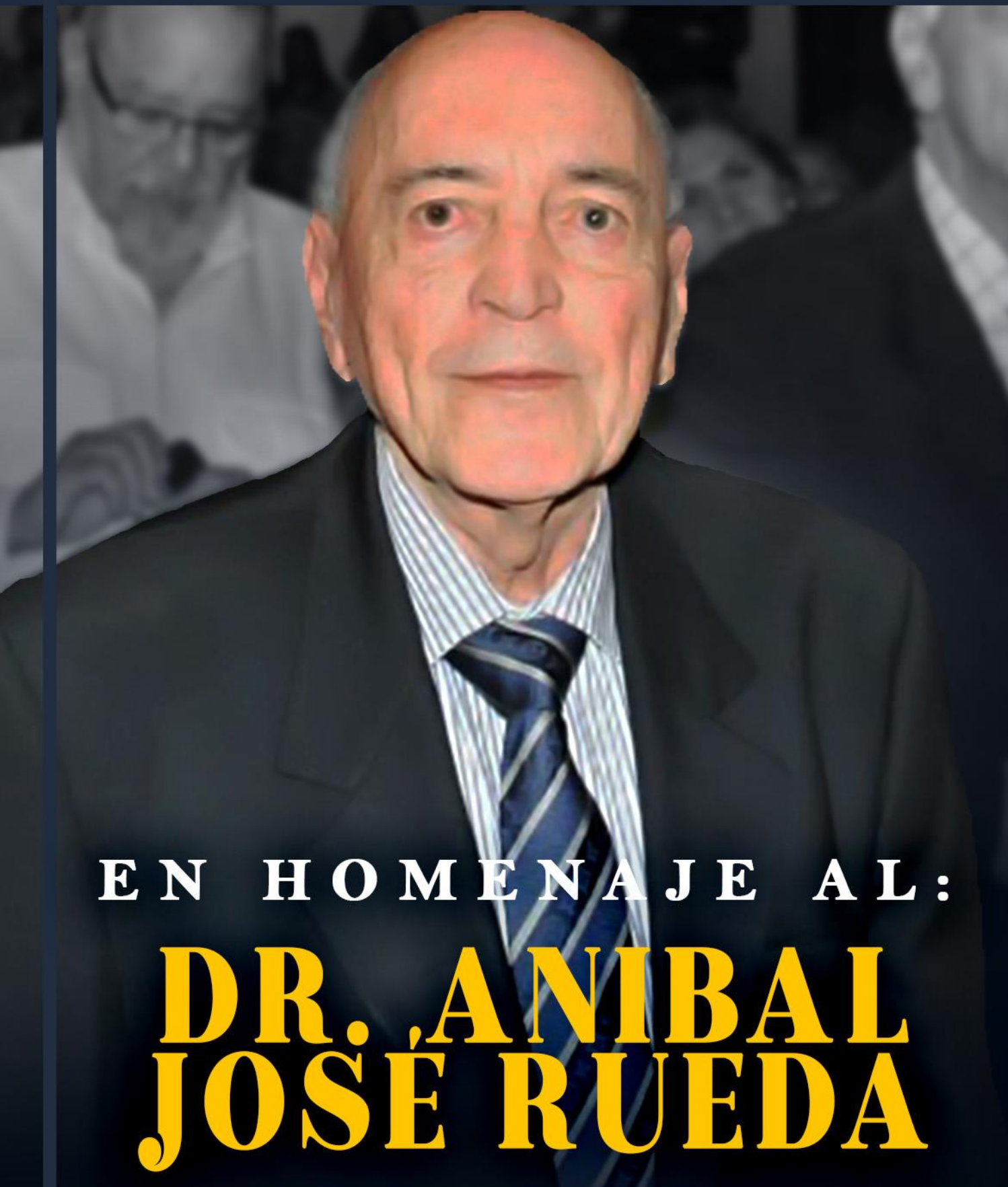


REVISTA JURÍDICA

LEXITUM

LO NUESTRO ES LA ACADEMIA

VENEZUELA - EDICIÓN 47. AÑO 05. ENERO 2024



EN HOMENAJE AL:

**DR. ANIBAL
JOSÉ RUEDA**

LEXITUM

Director General

Dr. Leonardo Pereira Meléndez



Director Académico

Asesor editorial

Jefe de Redacción

Diagramación y Diseño

Abog. Esp. Jocsan Maita Solano

Abog. David López Espinoza/Abg. Maiker González

Lic. Giovanni Pineda Leal Lic. Comunicación Social - CNP 15.275

Maryelin Jhoseimar Tablera Castillo

Consejo Consultivo

Dra. Gisel Milagros Vaderna Martínez

Dr. Jesús Enrique Rincón Rincón

Dr. Nelson David Mujica Pérez

Dra. María Alejandra Mancebo

Dra. Carmen Zuleta de Merchan

Dr. Marco Antonio Medina Salas

Dr. José Ernesto Ivkovic

Dr. Rubén Pacheco Inclan

Dr. Rafael Ángel Salih Castellanos

Directora de
Relaciones Institucionales

Abog. MSc. Mariela Alejandra Molero Pino

LO NUESTRO ES LA ACADEMIA

✉ lexitumrevistajuridica@gmail.com

📷 @lexitumrevista

📍 Revista Jurídica Lexitum

Revista gratuita de distribución mensual, hecha en Venezuela por abogados venezolanos, con la colaboración de abogados y profesionales afines extranjeros, en calidad de invitados. Derechos en proceso de reserva, no obstante, la reproducción total o parcial de esta revista está prohibida y puede generar acciones legales. Los artículos y opiniones que se publican en este documento son responsabilidad exclusiva de sus autores.

ESTA REVISTA ES EL PRODUCTO DEL TRABAJO CONJUNTO DE UN EQUIPO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, QUIENES DE MANERA INCANSABLE FOMENTAN LA EDUCACIÓN, LA EXCELENCIA DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE ABOGADOS, LA ACADEMIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

EDITORIAL



DRA. MARÍA ALEJANDRA MANCEBO*

“No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía.

Mire no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea...”

(Segunda Parte de "El ingenioso hidalgo Don Quijote" Capítulo LXXIV)

Cuando el Dr. Leonardo Pereira me pide que escriba la editorial de tan prestigiosa revista para este mes, sentí una gran satisfacción y compromiso, pues además de la tarea encomendada, es la primera del año 2024, de allí que a todos nuestros lectores, escritores y cuerpo académico quiero y oro para cada uno , un año lleno de paz, salud y amor, que todo lo bueno les alcance y que el unión por escribir y hacer cultura jurídica en pro de la excelencia sea nuestro norte, por tanto mi querencia es que todos y todas logren el mayor de sus anhelos y que armonice con el bien colectivo.

Ante lo declarado quiero dedicar esta editorial en el inicio del año a cada seguidor que se mantiene atento a lo nutrido de sapiencia de cada articulista, lo cual me recuerda a la fenomenología del amor, pues cada uno a lo largo de todos estos años, que en cada narrativa se permea no solo en el conocimiento sino en la pasión que el escritor deja en sus letras, y todos saben que el LEXITUM escriben y han escrito grandes profesionales, que este año me permito rendir tributo desde el amor que estos emanan.

***María Alejandra Mancebo** <https://orcid.org/0000-0002-0208-0134>

Instagram: @maria_alejandra_mancebo_2 @catajuridicacontacones **Linkedin: @María Alejandra Mancebo**

Relacionar el amor con la escritura no es tarea fácil, y sin embargo es lo que cada artículo representa, por ello considero que es oportuno detenernos en el amor, pues el hombre muestra desde su realidad biológica, psicológica, espiritual, social distintas fases, potencialidades así como dimensiones que se erigen entre lo racional, emocional en esa línea se precisa que las personas poseen capacidades dentro de la que quiero destacar está el amor que para los fines de esta línea se aborda como una de las dimensiones del ser humano, poniendo énfasis en Scheler (2008) que plantea una perspicacia que procura ir más allá, que busca responder desde la integralidad que el ser humano manifiesta. Antes de *enscogitans* o de *ensvolens* es el hombre un *ens amant* (p. 45)., En el sentir del referido autor el hombre antes de un ser pensante, es un ser de amor.

Es oportuno, comprender esas dimensiones del amor de estos profesionales que mes a mes escriben para ustedes, impacta en la administración de justicia, en la sociedad y el colectivo, por lo que resulta necesario deducir qué es el amor de modo general, qué es en términos filosóficos y qué posición tiene en el hacer humano del escritor, por lo que es propicio desde el inicio hacer mención como el prologuista de *Ordo Amoris*, obra principal de Max Scheler, se refiere al amor como “el núcleo fundamental del ethos de un sujeto” (p. 12), expresión que Scheler (ob.cit) la robustece al inferir que el amor es “lo que nos despierta para conocer y querer; más aún, es la madre del espíritu y de la razón misma” (p.45). Esta revelación sobre el amor desde la esencia del ser humano.

Por otra parte, en concordancia con Sánchez (2011) representa el amor como “una herramienta verdaderamente filosófica... sin amor no cabe una entera comprensión de la persona humana” (p.94). Las abstracciones expuestas se dirigen al amor como elemento esencial del hombre en su interior y en su accionar dado que si basa el ethos del ser humano su orientación filosófica va hacia la motivación del actuar de las personas.

Para entender el alcance de lo que precede el lector debe conocer que la palabra amor en cuanto a su etimología procede del latín amoris, y del verbo latino amare, en la raíz ama, que figura madre, esto desde mi visión deviene de la condición de este que sucede de la necesidad intrínseca del ser humano. Que al contrastarlo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), en una de sus acepciones, entiende que es el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Que bien se complementa con Sánchez (ob.cit) cuando puntea que “el amor es el acto emocional básico, en el que se fundan los actos del preferir y postergar, así como la totalidad de los sentimientos de los que somos sujetos”.

En esa orientación se infiere que el amor incita el hacer del hombre lo que permite hacer mención a González (2005) que deja ver sin duda que el amor es el auténtico sentido de la vida. Al respecto, es pertinente la siguiente meditación el amor como esencia del hombre orienta su accionar y le da sentido al mismo y continúa el filósofo:

El análisis, nos enseña que todos los poderes acumulados en el hombre deben tender a un solo fin y deben reconcentrarse en un solo punto: el amor. El poder vegetativo sería inútil si no estuviera ordenado al poder sensitivo; este a su vez lo sería, si no lo estuviera al intelectivo y este sino se ordenará a la voluntad. El amor constituye, pues, el verdadero sentido de la vida (p.322)

En palabras de Gómez (2018) el amor es un contenido inmenso, en el que se ondea entre la exacerbación o la sensibilidad cuando no desagua en otras dimensiones puesto que este tiene un papel céntrico en las relaciones personales y sociales del hombre y se insiste hasta en la propia filosofía que bien se describe en el Banquete de Platón que bien recuerda Ortega (1996) cuando en los inicios de su filosofía, en la obra en Meditaciones del Quijote, impone al amor como el eje central sobre el que gire el universo, y señala el amor, “es la perfección de lo amado, a diferencia del odio” (p.258).

En otro contexto, pero en armonía con lo escrito Gómez (ob.cit) hace una referencia al amor y la justicia aduciendo como desde Aristóteles a Rawls, la justicia se describe en una medida de dar a cada uno lo que corresponde, principio de vieja data y que para los abogados es la distinguida como criterio de Oro, lentamente impuesta en la historia de la

humanidad vigente. Continúa el autor que tal principio está en las formulaciones que Kant proporcionó del imperativo categórico y que bien se conjuga con en el segundo umbral de la justicia de Rawls (1979) “maximizar la parte mínima, dado que, tras el velo de esta es como imparcialidad política, no metafísica” (p. 220). Por tanto, se comprende que el amor no puede conculcar el deber, así como la lógica de la sobreabundancia debe dejar a un lado el principio de moralidad del principio formalizado en el limen de la justicia, pues el amor está referido a la justicia, ya que ambos casos, el amor sobresale a la justicia.

Conforme lo narrado es menester para relacionar el amor con el escritor que presenta posturas definidas de este, más allá de un concepto ya descrito para que el lector entienda la postura asumida y decida con cual cuerpo teórico apostar, conociendo la intención se comparte la postura de Selles (2013) que presenta al amor en tendencias de interpretación: y que se les dará a conocer de manera intencional según el trabajo de investigación:

- a) La de pensadores que consideran que el amor es una pasión.
- b) La de quienes lo consideran más bien como un sentimiento.
- c) El amor visto como condición biológica y conducta.
- d) La de aquellos otros que lo conciben como un estado., así como otras visiones según este estadio de arte.

En esta línea de interpretación de manera intencional se hará mención Fromm (2000) que en lo atinente al amor lo vislumbra más allá de la libido dado que acepta que las necesidades humanas no son instintivas, más bien son de carácter productivo y social. En relación con lo expuesto para el literato:

El amor es la actividad humana que une a las personas, ya ellas con las demás cosas (amor cósmico), que responde a la necesidad básica humana de evitar la separación: «la solución (al estado de aislamiento) está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona en el amor... es un poder activo en el hombre; un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo que une a los demás (p, 27).

En ese sentir se precisa que el amor no es originario en el hombre, sino que requiere de aprendizaje, como un arte que hay que subyugar de allí

algunas de sus frases “Amar es fundamentalmente dar, no recibir” (p. 31) y “Se ama aquello por lo que se trabaja, y se trabaja por lo que se ama” (p.35). Por tanto, Fromm trata al amor como poder, acto, actitud, carácter, que si bien da lugar a confusión su Hermenéusis es la pasión.

Según esta tendencia Hildebrand (1996) afirman que el amor en lo que él mismo denomino corazón, la cual es la esfera humana a la que razonó como voluntad de allí que expreso:

En verdad hallamos en la persona tres centros espirituales, a saber, la trilogía del entendimiento, la voluntad y el corazón... Debemos reconocer el lugar que el corazón ocupa en la persona humana, un lugar de igual categoría que el de la voluntad y el entendimiento” (p. 20)

Se considera que según esta visión el corazón pese a que en algunos momentos la define como facultad y otras como acto considero de manera particular que al analizar su discurso y su intención se refiere como acto de ser personal humano.

Otra interpretación del amor que se complementa con la visión arriba descrita es la de Maturana (1998.) donde el amor lo representa como un fenómeno biológico relacional básico, y será la emoción la que erija la existencia social. En esa línea el maestro es enfático en cuanto a que no se trata de una cualidad sino de una conducta que permite la coexistencia con los demás, por tanto, se trata de aceptar al otro pese a no estar de acuerdo fundado en la comprensión que estamos de pasos, por ello es claro al exponer que la vida, la naturaleza, toda la existencia es, un adeudo de todos y de allí que su realidad depende cada uno.

En otra postura se presenta a Laín (1983) quien es conocido en la literatura y filosofía por su obra Teoría y realidad del otro donde expresa: “el amor personal al otro suele recibir dos nombres distintos: amor strictu sensu y amistad” (p 589). Se destaca por su estudio de los modos no sexuales de la relación interpersonal entre estos el amor paterno filial, el fraterno y la amistad.

De la amistad el ensayista discurre que es el ingrediente común de toda relación interpersonal y la define como “una afección amorosa por otra persona, determinada por la convivencia real o ideal de ella” (p 594.).

Para ello se soporta en Santo Tomas de Aquino que la veía como amor de benevolencia en lo que permite comprender desde mi osadía intelectual que el amor es tanto idea como sentimiento y voluntad.

De lo narrado se considera que la noción de amor ya descrita por varios autores se complementan con el bien común fundado en la ética que se apoya en la reciprocidad pues el amor visto de esa forma es la más plena relación ética, como relación intersubjetiva, que expone a las personas en lo que son, tanto sentimental como racionalmente, y no sólo ante sí mismas sino, además, ante un otro. Todos ellos consideran al amor como una realidad humana principal que de acuerdo con la investigación se orienta en el amor como principio ético sustentada en la concepción de Maturana que pueden ser tras polarizados a cada artículo de esta revista.

Especulación que se ajusta a lo narrado pues pretendo hacerles ver el amor del escritor como un sentimiento y voluntad de que sientan con pasión sus conocimientos y de ello cada línea comprendo que el hacer de estos es desde el amor en un interés colectivo, lo interpreto desde el lugar de donde emergen la realidad que son vistos desde el hacer y la cualidades y como desde el amor impacta al colectivo fundándose en los valores de este (servicio y confianza), dos miradas que desde distintos ángulos convergen en que el escritor, si es el amor tienen que ver con la persona, sus cualidades y su hacer y sentir de manera integral.

Esto puede ser apoyado con lo mencionado por Maturana (ob. cit.) cuando hace alusión al compartimento de las personas y sus consecuencias a saber las “Relaciones humanas que no están fundadas en el amor, no son relaciones sociales.” (p. 27). Considero que, para el maestro siendo el resultado de las relaciones con el otro bajo el respeto e integración, esta vibración es la esencia del actuar en pro del colectivo.

De lo descrito, se enfatiza en el rol del escritor hombre o mujer como eje, donde el ser y hacer se armonizan acorde a su esencia, ya que esto conlleva a la afirmación del hombre como intérprete de la vida implantado en los valores y principios en la indagación de quien es, pero en pro del colectivo siendo el hombre ese punto central; en este caso, lo señalado por Vélez (1989) sobre el tema es relevante en cuanto que:

el concepto que se tenga del ser humano depende de nuestra cosmovisión, es decir, de la percepción de nuestro yo y del mundo que nos rodea. Dicha percepción, es el resultado de la ciencia, la filosofía y las creencias adquiridas por cada uno de nosotros (p 42).

Del discurso se permea y así lo comprendo desde esta editorial que tal amor por lo que se hace versa sobre el compromiso del conocimiento; es trabajar con vocación, estando convencidos del servicio con efusión, está cargado de voluntades y de inspiración en lo ecuánime para compensar las parquedades del otro.

Siendo así, el amor es esencia del escritor en LEXITUM, reconociendo que ahí acaece de las relaciones humanas que se fundan en lazos, por tanto, cada escritor bajo una visión, exige ser responsable, por lo cual se pretende enamorarse de las virtudes para que elevan con estos y los artículos que siguen la condición humana.

En Lexitum se trabaja con Amor, un bendecido año 2024.



*Abogado
Jocsan Maita*

**TODOS LOS SÁBADOS
HORA 3:00PM**



WWW.CIRCUITODINAMICA.COM



@JOCSANMAITA



@TUUNIVERSOJURIDICO.OFICIAL



@CASTILLO.MAITASOLANOYASOCIADOS



TU UNIVERSO JURÍDICO





Universidad Gran Mariscal de Ayacucho Núcleo Anaco

invita al

FORO DERECHO PENAL ADJETIVO



Prof. Angel Zerpa Aponte

Disparidades jurisprudenciales del sobreseimiento penal

Abogado UCV, Magister Universidad de Glasgow, Reino Unido. Fue Juez Titular en la Corte de Apelaciones Penal de Caracas. Profesor de Pre y PostGrado en la UCV, ULA, UNIMAR y otras universidades. Conferencista, autor. Disertante en su canal Youtube Angel Zerpa Aponte sobre temas penales.



Dr. Leonardo Pereira Melendez

La nulidad del juicio por deficiencia de la Defensa Técnica

Abogado, Especialista en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y en Literatura Latinoamericana; Magister en Ciencias Penales y Criminológicas; Doctor en Jurisprudencia. PostDoctor en Seguridad Ciudadana y Paz. Candidato a Doctor en Seguridad Ciudadana (UNES - Caracas); Candidato a Doctor en Ciencias Jurídicas (LUZ - Maracaibo); Profesor de postgrado y doctorado. Autor de 25 libros de derecho procesal penal, literatura y poesía.

03 Feb
8:00_{am} | Salón Elegant
Decord.
Calle Apure, Anaco



**ENTRADA
GRATUITA**

ENTREGA DE CERTIFICADADOS OPCIONAL

INSCRIPCIÓN  0412 510 0139 - 0412 499 9787

NOTA JURÍDICA

REVISTA JURÍDICA LEXITUM

POR EL: DR. ARCADIO SALVADOR ACOSTA

El acto de violencia que un sujeto ejecuta contra otro causándole consecuencias, de donde se origine constituye la comisión de un hecho punible. El acto de violencia que un sujeto ejecuta contra otro causándole consecuencias, de donde se origine constituye la comisión de un hecho punible.

En nuestro País, cuando un hombre ejerce violencia de cualquier tipo contra una mujer, el termino que se emplea para describir tal acción delictiva es: "Violencia de Genero".

Esa acción ejercida por el varón contra la hembra desde todo punto de vista es, ilícita, antijurídica y por supuesto reprochable por la justicia y la sociedad, mereciendo la imposición de sanciones y penas por parte del estado contra el sujeto.

Sin embargo, como Abogado, soy del criterio, que debemos ser cuidadosos al emplear dicho termino, porque en el ejercicio de la investigación criminal el concepto: "Violencia de Genero" como que activa ensañamiento por parte de los funcionarios contra el imputado, a



***Abogado, Universidad Santa María, Núcleo Oriente, estado Anzoátegui, 1995 – 2000. Especialista en materia Penal, Universidad Santa María Núcleo Oriente 2006 – 2010.**

Instagram: @asalvadoracostarivas @Salvador_militapsuv. Correo: 0414-8534519 Correo:

asalvadoracosta@gmail.com

mi modo de ver las cosas se extralimitan en la aplicación de las sanciones por el solo hecho de que el procesado es varón y debe caer sobre él todo el peso de la ley.

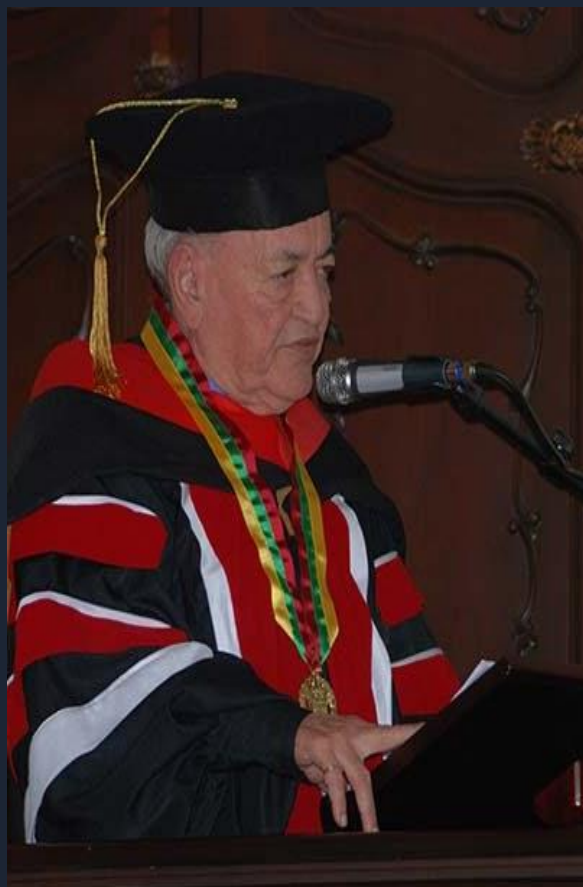
Este error procedimental, genera una franca violación de lo contemplado en el artículo 21 ordinal 1 de nuestra Carta Magna que establece: "TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY".

Ante la errada aplicación e interpretación subjetiva de la disposición legal en comento por parte de los funcionarios, veo con preocupación que retrocedimos al procedimiento inquisitivo, lo que pensamos quedo atrás permanece vigente, se esta aplicando erróneamente el contenido de la "Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", en lo que respecta a no tomar en cuenta los alegatos de defensa y argumentos de los implicados y sus abogados.

Así tenemos, que los (Órganos de Investigación, Tribunales y Fiscalía) en estos casos actúan al margen de Garantías como: "El Debido Proceso en relación a la Presunción de Inocencia", significa que todo el que se investiga debe considerarse inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero, a priori, el imputado es tratado como culpable al someterlo a un calvario procesal, solo por ser hombre, obviando que nuestro Proceso Penal Acusatorio tiene carácter Garantista, la recepción de denuncia no debe tomarse como verdad absoluta de entrada, sino que, mas allá de la denuncia se debe investigar la primacía de la verdad, que realmente ocurrió, en términos coloquiales, seria comprobar que el denunciado si cometió el hecho y no como ocurre cotidianamente en algunos casos, no todos, donde mujeres interponen denuncias con contenido falso y temerario, simulando ser victima de un hecho delictivo, para llevar a prisión o despojar de la posesión de sus bienes a presuntos imputados.

SEMBLANZA DEL DR. ANÍBAL JOSÉ RUEDA

Aníbal José Rueda, reconocido jurista venezolano, fallecido el 3 de enero de 2024, a la edad de noventa años de edad, nació el 20 de marzo de 1933, en Valencia, estado Carabobo, a finales de la dictadura del General en Jefe Juan Vicente Gómez; sus estudios del bachillerato (1948-1952), de igual forma en un gobierno regido por un militar, el del General de División, Marcos Pérez Jiménez, los efectuó en el Liceo Pedro Gual de Valencia; y sus estudios universitarios (1952-1958), en la carrera de ciencias jurídicas, a la par en tiempos de absolutismo e inicio del ensayo democrático, los hizo, parte en la ciudad de Valencia, en la Escuela de Derecho Miguel José Sanz, adscrita en aquel tiempo a la Universidad Central de Venezuela (UCV), parte en la ciudad de Caracas, albergando en su haber el título de Abogado, de la mencionada Casa de Estudios, el 30 de agosto de 1958, a escasos siete meses de haber caído el gobierno del General de División, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, integrando la Promoción de Abogados “Libertad”.



El Doctor Aníbal José Rueda, escribió números artículos científicos, ensayos y varias obras sobre casación civil. Insigne gremialista, se desempeñó como presidente del Colegio de Abogados del estado Carabobo. Excelso educador, su labor como maestro de escuela en el Colegio La Salle en la ciudad de Valencia, estado Carabobo quedó plasmada en heterogéneas descendencias de venezolanos. Magno jurista, su criterio jurisprudencial como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (Hoy en día; Tribunal Supremo de Justicia) ha servido de luces a numerosas generaciones de abogados, estudiosos de la casación civil y del derecho civil en general.



Ilustre académico: la docencia universitaria fue su apostolado, amó tanto la Universidad de Carabobo que llegó a convertirse en su rector. La Universidad de Carabobo le confirió la máxima borla académica: el Doctorado Honoris Causa por sus sobrados méritos y ejemplar ciudadano. Miembro de la Academia de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Venezuela.

En la política sobresalió por su honestidad. Jamás fue objeto de alguna acusación o señalamiento. Fue Gobernador del estado Aragua (1977 - 1979). Fue elegido como Síndico Procurador del Concejo Municipal de Montalbán y Consultor Jurídico del Concejo Municipal de Guacara y Consultor Jurídico del Instituto Agrario Nacional.

Estuvo casado con la distinguida dama Doña Carmen Coronel, procreando cuatro hijos, todos profesionales. Director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Carabobo, Vicerrector Académico y Rector de la ilustre e ilustrada Universidad de Carabobo.

Hoy, en la primera edición del año 2024, desde esta tribuna jurídica, honramos la memoria del ilustre jurista Dr. Aníbal José Ruedas. Honramos a un hombre no por su comprobada sapiencia; no por la honradez confirmada y auténtica del funcionario público: no lo honramos por el signo inequívoco del jurisconsulto que formó en las aulas eruditos hombres de leyes; sino que, decidimos rendir un merecido homenaje a la intachable trayectoria de un hombre cuya característica principal fue su humildad.



POR: JOCSAN MAITA SOLANO
Director Académico de la Revista Jurídica LEXITUM



ENTRE CARDONES Y FLORES: MAMÁ TERESA

*Leonardo Pereira Meléndez**
Venezuela



La edad de mamá es todo un misterio, hecho que no es extraño porque nació en un lar mágico: en su partida de nacimiento se advierte que nació en el caserío de San Cristóbal, Parroquia Chiquinquirá, Distrito (hoy Municipio) Torres del estado Lara.

Pero la verdad es que nació en Chipororo, en una enorme casona de bahareque que aún existe, que queda vía a Cerro Verde, donde viven familiares cercanos de mamá.

En esa enorme casa ancestral en una semana parieron tres hermanas: María Teresa (la mamá de mama Goya); Blanca del Carmen (la matrona de los "Chimoítos") y Rosa María (la abuela de Javier "El Pana" Meléndez).

Hay unos que afirman que fue en un mes de octubre, y no en junio.

Sulpicia Meléndez (hermana de Chú Meléndez, el papá de mama Goya) murió en 1962. Era la madre de Teodora Pereira y de Gabriela Pereira (mamá de Chilo Crespo, el esposo de mi tía Dolores, hermana de mama Goya). Gabriela Pereira era madrina de bautizo de mamá y murió a los 105 años de edad.

Teodora Pereira –hija de mi tía abuela materna Sulpicia Meléndez– parió de tres hermanos: Ramón Crisanto (papá de Lucrecia); Adelfin Pereira (papá de Paula Pereira, que parió de Álcido Meléndez) y Felix Pereira (papá de Juan Pereira).

***Director General de la Revista Jurídica LEXITUM. Coordinador Académico del Postdoctorado en Investigaciones Penales de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY).**

Yo no tengo que leer ni Pedro Páramo ni Cien años de soledad para conversar con los muertos.

Me basta ir a San Cristóbal de Aregue y subir la cuestecita, el cerrito donde descansan mis ancestros.

Por ahí tengo anotado en una agenda una serie de hechos y vivencias contadas, narradas por veteranos habitantes de esos pueblos. Un día de estos, tal vez escriba "Chipororo", novela que tengo escrita en mi mente, pero que no he hipostasiado todavía en el papel.

Guardo una pequeñita piedra que tomé del lugar exacto donde mis abuelos papa Chú y mama Teresa, tuvieron una pequeña casa, situada más abajo de Chipororo. Guardo un pedazo de alambre oxidado, y una minúscula escultura parecida a la imagen del Dr. José Gregorio Hernández, que perteneció a mis abuelos maternos. Las guardo para no olvidar mis orígenes.

No tienen valor sino para mí.

Una medalla encontrada enterrada en esas ruinas (ya no queda sino eso: ruinas ...) la tenía y se la di prestada a Raquelita.

Mi tía Cándida murió el año pasado (2023) de 93 años (quizá tenía más edad) y ella decía siempre: I

– Goyita viene después de mi hermana Débora que era la mayor, cuando Goyita se casó yo estaba muy muchachita, vaciééé, Goyita me lleva a mí como nueve o diez años.

En otras palabras: mama Goya pasa los cien años de edad, dos primos suyos pasan de cien años y ambos están aún en este plano terrenal: Domingo Pereira, hijo de Cándida Meléndez (hermana de mi abuelo papa Chú y quien enterró a siete maridos) y Antonio Pereira (el pasado año 2023 le celebraron los 101 años de edad), estos últimos eran (son) hermano de Miguel Pereira, quien murió de 102 años de edad.

No me sorprenden cuando hablan de realismo fantástico.

Papa Chú no sabía leer ni escribir y era un diablo en las matemáticas.

Jamás se equivocó sacando cuentas. Mama Teresa (la mamá de mi mamá) tampoco sabía leer ni escribir, pero tenía una memoria prodigiosa. No pocas veces, de tarde en tarde, estando yo en su inmemorial casa solariega, sacaba una silla de madera, fabricada con cuero de chivo, y me sentaba en las afueras de la casa, al lado de la puerta de madera, y mama Teresa se me arribaba, se colocaba cerca de mí, ponía su mano derecha en mi cabellera y comenzaba a declamar bellas poesías aprendidas de memoria.

A mamá la enseñó a medio leer mama Minga (su amada tía preferida), y, luego, aprendió por voluntad propia.

En estos meses y sobre todo en diciembre me percaté cómo el cuerpo de mama Goya había envejecido en demasía. Claro que hubo varios factores externos que influyeron en su senectud.

En esta ocasión no haré alusión a ello.

En todo caso, los hijos de mama Goya, esperamos que ella "cumpla" sus cien años en junio, cuando en realidad, ya la hija del viejo Chú Meléndez, hace rato cumplió –muy probablemente– un siglo de existencia.

Nota Bene: un 15 de enero de 1990 falleció mama Teresa, y el 24 de enero de 1990, se llevó a cabo su novenario. Ese día (en la última noche de mi amada abuela materna) una linda joven me cautivó con su sonrisa y su picaresca mirada. Un año después se convertiría en mi esposa. A ella, y a mi sobrino nieto, Liam Daniel, dedico esta crónica.



DICOTOMÍA DIGITAL PROBATORIA: DESAFIANDO AL SISTEMA DE JUSTICIA EN LA ERA DIGITAL

José L. Tamayo R.*
Venezuela



La dicotomía es un concepto que se refiere a la división o separación de algo en dos partes que son opuestas, mutuamente excluyentes o contradictorias. Este término se utiliza en diversos campos del conocimiento, como la filosofía, la lógica, la biología y la lingüística, para denotar una clasificación en dos categorías que no se superponen y que son fundamentalmente diferentes o contrarias entre sí.



Por ejemplo, la dicotomía entre día y noche. En este caso, el tiempo se divide en dos períodos claramente diferenciados: el día, caracterizado por la presencia de luz solar, y la noche, definida por la ausencia de esta luz. Estos dos estados son exclusivos entre sí; un momento dado no puede ser simultáneamente día y noche.

En el ámbito del Derecho, la dicotomía se utiliza para referirse a la división de un concepto o principio en dos partes opuestas o incompatibles. Por ejemplo, la dicotomía entre la libertad individual y el orden social. Aquella se refiere al derecho de las personas a tomar sus propias decisiones y a actuar de acuerdo con sus propias creencias. El orden social se refiere a la estabilidad y la seguridad de la sociedad.

***Abogado digital | Especialista en obtención, preservación y promoción de pruebas electrónicas | Analista Jurídico de Dictámenes Periciales Informáticos | Doctor en Derecho | Profesor universitario | Conferencista**

Estos dos valores a menudo se consideran opuestos, ya que la libertad individual puede conducir al caos y el desorden, mientras que el orden social puede restringir la libertad individual. Sin embargo, también se pueden considerar complementarios, ya que la libertad individual necesita un cierto grado de orden social para prosperar, y el orden social necesita una cierta medida de libertad individual para ser legítimo.

Es importante aclarar que no se trata de una separación absoluta. La libertad individual y el orden social pueden coexistir de forma armoniosa. Por ejemplo, una sociedad puede tener leyes que protejan la libertad individual, pero también puede tener leyes que mantengan el orden social.

En síntesis, la dicotomía entre dos conceptos opuestos, como el día y la noche o la libertad individual y el orden social, puede entenderse como una tensión entre dos realidades complementarias, que pueden coexistir de forma armoniosa, pero que también pueden entrar en conflicto.

En Venezuela, el distinguido autor cubano-venezolano Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, dedicó uno de sus obras al tema de “La dicotomía de la prueba en el proceso penal acusatorio: el problema del valor de los actos de investigación en el juicio oral”, desarrollando una novedosa e interesante tesis acerca del comportamiento dual de la prueba en el proceso penal acusatorio, que, particularmente, he adversado.

Ahora bien, cuando hablamos de dicotomía digital probatoria queremos significar la división fundamental entre dos tipos de pruebas en el ámbito judicial: las pruebas electrónicas (digitales) y las pruebas tradicionales (físicas), enfocándose en cómo esta división afecta su recolección, manejo, examen, promoción, admisión y valoración en los procesos judiciales.

Esta dicotomía se debe a las diferencias fundamentales entre estos dos tipos de pruebas. Las pruebas electrónicas son intangibles, lo que significa que no se pueden tocar ni sentir. Además, son fácilmente manipulables, ya que pueden ser modificadas o eliminadas sin dejar rastro.

Las pruebas tradicionales, por su parte, son tangibles, lo que significa que se pueden tocar y sentir. Además, son más difíciles de manipular, ya que es más difícil modificar o eliminar un documento impreso.

En síntesis, los medios probatorios electrónicos, tienen una naturaleza digital que los hace más difíciles de gestionar, verificar y autenticar; en tanto que los medios probatorios tradicionales tienen una naturaleza física que los hace relativamente fáciles de gestionar, verificar y autenticar.

De manera que la dicotomía digital probatoria refleja la realidad actual de los tribunales y del ejercicio profesional en materia probatoria, donde las pruebas ya no se limitan a elementos tangibles y visibles, sino que también abarcan --y de manera mayoritaria-- elementos intangibles y digitales. Esta dicotomía representa desafíos únicos, como:

- 1. Autenticación y admisibilidad: Las pruebas electrónicas requieren métodos de autenticación diferentes a los de las pruebas físicas, lo que plantea cierta problemática sobre su admisibilidad por parte del juez.**
- 2. Preservación y manipulación: Mientras que las pruebas físicas tienen una cadena de custodia bien establecida, las pruebas electrónicas enfrentan desafíos distintos en términos de obtención, preservación y riesgo de alteración, intencional o no.**
- 3. Interpretación y comprensión: Las pruebas electrónicas a menudo requieren conocimientos técnicos especializados para su interpretación, a diferencia de las pruebas físicas que suelen ser más intuitivas.**
- 4. Acceso y equidad: La dicotomía también resalta cuestiones de acceso y equidad, ya que no todos los participantes en un proceso judicial pueden tener la misma facilidad para acceder o comprender las pruebas electrónicas.**

Para abordar estos desafíos, es necesario implementar legalmente, en primer lugar, el uso de técnicas adecuadas para verificar la autenticidad e integridad de la prueba electrónica, es decir, su fiabilidad.

Estas técnicas pueden incluir el uso de funciones hash para obtener el valor hash o código hash de los documentos electrónicos y evidencias digitales, sellos digitales, firmas electrónicas avanzadas o digitales, que dotan a los documentos electrónicos y los mensajes de datos de presunción legal de autenticidad e integridad, y otras tecnologías de seguridad.

En segundo lugar, es menester legislar en profundidad sobre aspectos primordiales de la prueba electrónica, consignando normas claras y precisas atinentes a la presentación, promoción, admisibilidad, oposición, impugnación, admisión y valoración de la prueba electrónica en los procesos judiciales. También deben establecerse normas sobre la seguridad de la información y la protección de la privacidad de los datos digitales.

En tal sentido, el novísimo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) de México de junio de 2023, marca un avance significativo y de vanguardia sobre el particular, al establecer en su artículo 308 (Sección Quinta “De la prueba documental física o electrónica”, del Capítulo II, “De las Pruebas”, Título Segundo), que: “Las pruebas documentales, físicas o electrónicas recibirán el mismo trato, atendiendo los principios de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica. En todo caso, atendiendo a su naturaleza, se estará a las reglas generales y especiales, en lo relativo a su objeción, impugnación o fiabilidad”.

El principio de equivalencia funcional entre el documento físico y el documento electrónico, es, a no dudar, un paso importante para abordar la dicotomía digital probatoria, al reconocer que los documentos electrónicos son una forma válida de prueba, y, por tanto, los jueces no le pueden negar sus efectos jurídicos, validez o eficacia probatoria.

Este principio, a nuestro modo de ver, obliga a los jueces a ser más cuidadosos a la hora de pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba electrónica, lo que contribuirá a corregir, en gran medida, la “ligereza” actual de muchos jurisdicente de declarar inadmisibles, sin mayores fundamentos, las pruebas electrónicas promovidas por las partes por el

solo hecho de ser tales y no resultarles confiables.

A decir verdad, subyace allí la problemática actual de la falta de capacitación y formación del juez (generalmente extensiva a las partes) respecto a la naturaleza, contenido y alcance de las pruebas electrónicas y las evidencias digitales.

Del mismo modo, otro paso no menos importante lo encontramos en la Fracción I del artículo 936 del CNPCF, contenido en el Título Octavo, “De la Justicia Digital”, el cual dispone que: “La autoridad jurisdiccional no negará efectos jurídicos, validez o eficacia probatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un documento electrónico o en un mensaje de datos”.

De allí que los documentos electrónicos deberán ser valorados de la misma manera que los documentos físicos; y ello, obviamente, en tanto en cuanto sea demostrada debidamente la autenticidad e integridad (fiabilidad) del documento electrónico, al igual que su lícita obtención, lo que aplica igualmente para los documentos físicos.

Por lo que concierne a las normas sobre la seguridad de la información y la protección de la privacidad de los datos digitales, el artículo 968 del mismo Código, contenido también en el Título Octavo, señala que la seguridad de la información es: *“.... el principio consistente en que todo procedimiento en línea, promoción electrónica, audiencia virtual, diligencia virtual, videoconferencia, y en general, toda actuación y documentación que forme parte de procedimientos en línea, se lleve a cabo protegiendo la información y los sistemas de información contra el acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados a fin de proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad, mientras dichos atributos no se contrapongan con la naturaleza o características de determinado procedimiento, audiencia o actuación judicial”*.

Por su parte, el artículo 969 pauta que: *“Las autoridades jurisdiccionales tienen la principal responsabilidad de proteger la información, los documentos y las comunicaciones que se lleven a través*

de medios electrónicos, así como los sistemas que contengan dicha información, incluyendo las audiencias y diligencias virtuales”.

Ahora bien, aun cuando la anterior normativa del CNPCF constituye un significativo avance en el reconocimiento y manejo de las pruebas electrónicas, no resuelve por completo los desafíos que plantea la dicotomía digital probatoria, porque, por ejemplo, no aborda, la problemática que encierra la falsificación o alteración de los documentos electrónicos, los cuales, por su propia naturaleza, son volátiles y fácilmente modificables.

Para enfrentarla, es necesario legislar también acerca de las técnicas de verificación y autenticación de la prueba electrónica y la evidencia digital, como las citadas supra, en aras de garantizar la fiabilidad de la prueba electrónica, así como su admisión y subsiguiente valoración en juicio.

Es igualmente imprescindible que los profesionales del derecho, en el rol que les toque desempeñar en los estrados judiciales como jueces, fiscales, defensores, consultores, abogados litigantes, etc., se formen y capaciten debidamente.

Esta formación debe incluir aspectos como la autenticación de la prueba electrónica, su promoción, valoración y las normas éticas y jurídicas aplicables, al igual que aquellos relacionados con las normas internacionales estandarizadas (Normas ISO) y los principios, leyes y regulaciones en materia de evidencias digitales y pericias informáticas. Esto ayudará a garantizar que estas sean tratadas de manera adecuada, justa y equitativa en los tribunales.

En conclusión, la dicotomía digital probatoria no solo plantea retos significativos al sistema de justicia en la era digital sino que también ofrece una ventana excepcional para la innovación y la mejora procesal.

La bifurcación entre pruebas electrónicas y pruebas tradicionales exige una revisión profunda y un rediseño de los marcos legales, las prácticas judiciales y las estrategias de manejo de evidencias digitales a para garantizar la integridad y la validez de las pruebas electrónicas dentro del proceso judicial.

Al mismo tiempo, se presenta como un catalizador para la creación y la implementación de tecnologías avanzadas y soluciones forenses digitales, las cuales tienen el potencial de incrementar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en la administración de justicia.

Esta dualidad probatoria, por tanto, no solo debe ser entendida como un desafío contemporáneo sino también como un estímulo para la evolución hacia un sistema de justicia más ágil y eficiente, capaz de satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más inmersa en el ciberespacio.



LA ORALIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA FAMILIAR

*Carlos A. Pascual C.**
México



El objeto de estudio del presente ensayo lo constituye la oralidad en el nuevo sistema de justicia familiar en México. El objetivo es identificar y analizar la naturaleza jurídica de la oralidad, partiendo de la Constitución Federal y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (en lo sucesivo: CNPCyF).

Lo anterior debido a la problemática desarrollada en torno a la ubicación de la oralidad en el campo del sistema de justicia familiar, dado que, derivado de la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado su ubicación ha sido mal comprendida.

A tal grado de interpretarse como: a) forma de comunicación y deliberación. b) principio rector. c) principio procesal. d) herramienta. e) sistema predominante. f) metodología. g) valor. h) derecho fundamental, etc.

A grandes rasgos y en lo que aquí interesa, podría decirse que en la exposición de motivos del nuevo CNPCyF existen errores como el que se observa en el II.2., que a la letra enuncian lo siguiente:: “Se describe un procedimiento de carácter adversarial, democrático y oral, sustentado en una redistribución de los roles de sus principales personas operadoras, juzgadoras y litigantes, conforme a los principios de oralidad, inmediación, publicidad, igualdad, contradicción, continuidad y concentración [...]

***Abogado. Egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Maestro en Derecho Penal y Juicios Orales, Profesor de la Facultad de Derecho en el Centro Universitario México, Asociado a la firma legal “Linares & Asociados” y ex miembro del comité de medios en el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C., ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6797-9685>**

Los principios del juicio oral, como valores y metodologías de trabajo en la dinámica del proceso oral, intencionalmente no se definen en la propuesta legal, precisamente para que estos puedan desarrollarse y potencializarse durante el procedimiento atendiendo al caso en concreto, pero sobre una base objetiva que permita a las personas juzgadoras como a las postulantes, ejercer sus habilidades y destrezas, garantizando el cumplimiento sustancial, funcional y práctico de estos en la tramitación de la controversia. De esta forma, la oralidad podrá llevarse más allá de simple proceso de comunicación entre los operadores en la audiencia.”. (Las letras en cursivas y en negritas no forman parte del texto original).

EL NUEVO SISTEMA PROCESAL FAMILIAR MEXICANO.

En principio, derivado de lo mencionado en líneas anteriores, es necesario partir de las siguientes interrogantes, ¿de dónde viene la oralidad? ¿Por qué siempre queremos compararnos con el sistema sajón y agregar a todo adversarial como si fuera una moda?

Muchas dudas surgen y es necesario recordar por dónde entra la oralidad a nuestro país: “Artículo 2022 (del TLCAN): Medios Alternativos Para la Solución de Controversias Comerciales. “En la mayor medida posible, cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona de libre comercio”.

Eduardo Cevallos de Labra sostiene: “Los juicios [...] en nuestra República Mexicana tardan en promedio años en ser resueltos, por ende cobra vigencia la tilde: “Justicia que no es pronta ni expedita, no es justicia”; de ahí que en el artículo 2022 del citado Tratado le fuera impuesto a nuestro país el Juicio Oral Mercantil, y por ahí se fueron a las demás áreas del Derecho”.

Cierto, dio inicio en materia mercantil (Cfr. Diario Oficial de la Federación: 27 de enero de 2011), pero la oralidad no es sinónimo de adversarialidad, “Adversarial System”, como erróneamente se hace notar en la exposición de motivos, ni mucho menos un principio rector de un determinado modelo procesal como el que se pretende imponer ahora en materia familiar.

Luego, entonces, Juan-Luis Gómez Colomer ilustra: “La tendencia clara hoy es fijarse en el modelo acusatorio que representa el proceso penal norteamericano... Así pues, volver los ojos hacia los Estados Unidos de Norteamérica [...] en cuyo seno se desarrolla un proceso acusatorio con juicio oral y público de manera muy auténtica o pura, parece hoy inevitable, y por esto mismo lo debería ser el fijarnos, yendo más lejos, en los países que en Europa han aceptado ese modelo con mayor o menor profundidad [...] o en América Latina, lo cual no quiere decir que ello por sí solo justifique la copia del sistema, eso nunca. En este sentido, creo que previamente, para tomar una decisión acertada sobre si debemos tomar el modelo norteamericano o no, y si decidimos adoptarlo, si lo vamos hacer por completo o, por el contrario, sólo las instituciones validas del mismo”.

Esto último nos parece trascendental, por ende, se debe señalar que diversas figuras jurídicas que emanan del sistema adversarial norteamericano no se armonizan con el sistema procesal familiar regulado en el nuevo CNPCyF. Dos ejemplos: 1. La Teoría del Caso (Cfr. art. 278) y 2. La exclusión de los medios de prueba (art. 673, IV). Nótese como son dos instituciones que han sido una mala copia y cuyo desacierto atiende a una mala técnica legislativa.

Es por ello que el ilustre iuscivilista Don Ernesto Gutiérrez y González advirtió: “Es un fenómeno psicológico y fácil de apreciar, el que el ser humano, imprima a los objetos de su mundo exterior, atributos y elementos semejantes a los que él encuentra en su propia naturaleza”.

Todo esto, permite mostrar un aspecto importante. Debemos entender que los sistemas procesales, tanto el mercantil, penal, laboral, y hoy el civil y familiar, son sistemas que se guían por principio rector de alternatividad (Cfr. art. 17 de la Constitución Federal).

En esa tesitura, el artículo 3° del nuevo CNPCyF prevé: “En el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales, serán aplicables las reglas y principios del juicio oral en lo que resulte compatible; asimismo, serán considerados los beneficios de la justicia

alternativa o procedimientos convencionales que pacten las partes.”. (Cfr. 584 y 585 del mismo ordenamiento).

En efecto, lo verdaderamente paradigmático es el cambio hacia una justicia alternativa, y restaurativa. Para entender el nuevo paradigma de los mal llamados “juicios orales familiares” se debe comprender el cambio de la justicia familiar tradicional a una justicia alternativa, y restaurativa.

Es pues el principio de alternatividad el único principio rector. Dicho principio tiene como propósito servir de puente para la construcción de una nueva justicia familiar restaurativa, y atender a la teleología de ésta: la justicia cotidiana en su dimensión de justicia para la protección de la Familia.

Derivado de lo anterior, ¿qué es el sistema procesal familiar? Para nosotros corresponde a un conjunto de reglas, principios, valores y agencias atinentes a la protección efectiva, organización, desarrollo de las familias, y resolución de conflictos familiares (familias en conflicto). Dichos elementos operan de manera racional y se enlazados entre sí para dar cumplimiento al deber jurídico establecido en el primer párrafo del artículo 4° de la CPEUM.

Al respecto, es interesante la postura jurisprudencial: “En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.”. (Cfr. Registro digital: 162604).

En suma, el único principio rector en el nuevo sistema procesal familiar mexicano es el de alternatividad. Por tanto, no es un modelo de corte adversarial, sí lo es un “Sistema de Justicia Familiar Alternativo” cuya génesis se encuentra en los postulados de la justicia cotidiana.

LA ORALIDAD EN EL SISTEMA FAMILIAR MEXICANO

Ahora bien, es momento de centrarnos en los aspectos legales y doctrinales de la oralidad. Para empezar, debemos traer a colación la CPEUM y el CNPCyF. En cuanto a la oralidad, desde la CPEUM, Cevallos de Labra opina: “La génesis de este artículo 20 primer párrafo constitucional; de donde se colige que dichas instituciones son aplicables al juicio oral en general.”.

No compartimos la opinión de Cevallos de Labra, se nos hace un crassus errare creer que los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación se pueden homologar al sistema familiar, toda vez que en la exposición de motivos (II.1.) se advierte: “La justicia cotidiana está justamente encaminada a resolver los conflictos del día a día, atender los problemas más frecuentes de las personas y, en general, hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana”, y, como lo hemos dejado plasmado en líneas anteriores el único principio rector del sistema familiar mexicano es el de alternatividad.

De allí que, en el articulado del CNPCyF y su exposición de motivos (II.2) podemos observar algunos atisbos interpretativos (respecto a la naturaleza jurídica de la oralidad). Por ejemplo:

- 1. Como valor y metodología de trabajo en la dinámica del proceso oral, intencionalmente no se define en el CNPCyF.**
- 2. La oralidad podrá llevarse más allá de simple proceso de comunicación entre los operadores en la audiencia.**
- 3. El proceso se desarrollará en audiencias orales (art. 7, XIII y 140, I).**
- 4. Las resoluciones judiciales pronunciadas oralmente o por escrito en las audiencias, según el tipo de juicio (140, XI).**
- 5. La autoridad jurisdiccional, en la audiencia preliminar al admitir las pruebas ofrecidas, procederá a señalar fecha y hora para audiencia de juicio en la que se recibirán oralmente las pruebas, para dichos**

efectos tomará en consideración el tiempo para su preparación. (277, p.p.).

6. Tanto el interrogatorio formulado para el desahogo de la prueba de declaración voluntaria de parte propia y de parte contraria las preguntas se formularán de manera oral, libre y directa sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser comprendidas con facilidad por quien ha de declarar. (287, I, Cfr. 291, Oralidad en la declaración de testigos).
7. Se tramitarán en la vía oral familiar, todas las controversias que no tengan tramitación especial.

CONCLUSIÓN

Sea como fuere, la naturaleza jurídica de la oralidad en el sistema familiar mexicano radica en servir como una técnica procesal de litigio, esto es un conjunto de procedimientos y recursos auxiliares de que se sirve al método o gestión del caso familiar (estrategia procesal) para que los operadores jurídicos puedan desarrollarse y potencializarse durante el procedimiento.

De esta forma, la oralidad podrá llevarse más allá de un simple proceso de comunicación entre los operadores en la audiencia. La oralidad no es un valor ni mucho menos una metodología, dado que la metodología del sistema procesal familiar radica en atender las fases o etapas (etapa de litis, escrita o postulatoria, audiencia preliminar y audiencia de juicio oral) reguladas en el CNPCyF para la solución de litigios familiares.

De igual forma, la oralidad se ubica en el campo jurídico del sistema familiar como un principio procesal general, pero no como un principio rector. Como principio marca una pauta (un punto de partida) o directriz de la norma adjetiva (CNPCyF) de manera rápida y efectiva.

Por último, puede usted lector no estar de acuerdo, pero no olvide que la “constitucionalización del Derecho de Familia exige que la interpretación de derechos no se limite al ámbito individual o personal del litigante, sino que además se interprete dichos derechos en un ámbito social y familiar”, a esa redefinición del derecho debe abonar, en un futuro, la oralidad desde la praxis; sin duda.

REFERENCIAS.

- BERMÚDEZ TAPIA, Manuel. "Redefiniendo el derecho de familia en la tutela del vínculo familiar en la jurisprudencia peruana." (2011). [file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-RedefiniendoElDerechoDeFamiliaEnLaTutelaDelVinculo-3869104%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-RedefiniendoElDerechoDeFamiliaEnLaTutelaDelVinculo-3869104%20(2).pdf)
- CEVALLOS DE LABRA, Eduardo, Exégesis al Código Nacional de Procedimientos Penales, Éxito editores, México, 2017.
- CEVALLOS DE LABRA, Eduardo, Código de Comercio concordado en el juicio oral mercantil, Éxito editores, México, 2014.
- GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis (coord.), Introducción al Proceso Penal Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, Tirant to Blanch, Valencia, 2013.
- PASCUAL CRUZ, Carlos Alberto, "Introducción al nuevo sistema procesal familiar mexicano", Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, núm. 4, Diciembre 2023, Disponible en: <https://aidca.org/wp-content/uploads/2023/12/RIDCA4-familia-PASCUAL-CRUZ-INTRODUCCION-AL-NUEVO-SISTEMA-PROCESAL-FAMILIAR-MEXICANO.pdf>> .
Fecha de acceso: 19 ene. 2024.



REGULACIÓN JURÍDICA DE LA CIUDADANÍA EN CUBA. PRINCIPALES NORMAS

Manuel A. Báez R.*
Cuba



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

En la Constitución de la Republica aprobada en Referendo el 24 de febrero del 2019 y proclamada el 10 de abril el tema de la ciudadanía es regulado en los artículos 33-39 que conforman el Titulo IV. De modo que se regulan 2 modos de adquisición de la ciudadanía: por nacimiento y por naturalización. En el primer caso están comprendidos: los nacidos en el territorio nacional a excepción de los hijos de funcionarios diplomáticos extranjeros o al servicio de sus gobiernos, los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos en cumplimiento de misiones oficiales, los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos y los hijos de padre o madre cubanos que perdieren su ciudadanía y hayan nacido fuera del país, todos estos casos en la forma y bajo las condiciones establecidas en la Ley. En tanto que en el segundo caso se hallan los extranjeros que la adquieran o las personas a las que se les otorgue por el Presidente de la República. En esta Carta Magna marca un antes y un después el hecho de que se admita la pluralidad de ciudadanías si bien dentro del territorio nacional solo es posible atenerse a la cubana en cumplimiento y con apego al principio de ciudadanía efectiva.

La Constitución de 1976 con las reformas de 1992 y 2002 reguló en términos parecidos la temática de la ciudadanía en sus artículos 28-33 pero además de no contemplar la posibilidad de pluralidad de ciudadanías también se diferenció por contener en los supuestos de ciudadanía por nacimiento y por naturalización situaciones que hoy ya no son contempladas. Concretamente se refería entre los casos de ciudadanía cubana por nacimiento a los extranjeros que por méritos

***Licenciado en Derecho por la Universidad de Granma, República de Cuba (2022). Ha participado en muchos eventos presenciales y virtuales, principalmente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Universidad de Granma. Diplomado en Impartición de Justicia (2023). Juez Profesional Suplente. Tribunal Provincial Popular de Granma. Bayamo. Cuba. mbaezrodriguez21@gmail.com**

DECRETO NO. 358 DEL 4 DE FEBRERO DE 1944. REGLAMENTO DE CIUDADANÍA

Este estableció como documentos acreditativos de la ciudadanía el Certificado de Nacionalidad para el caso de los cubanos por nacimiento y la Carta de Ciudadanía para los cubanos por naturalización.

Dicho Decreto contenía las formas de adquisición de la ciudadanía que conocemos hoy: por nacimiento y por naturalización comprendiendo dentro de la primera a los nacidos en Cuba excepto los hijos de extranjeros al servicio de su gobierno, los nacidos en territorio extranjero de padre o madre cubanos por el solo hecho de avecindarse en Cuba (requisito que en la actual Constitución no existe) los nacidos fuera de Cuba como hijos de padres que hubieran perdido la ciudadanía y la reclamaran y los extranjeros que hubieren servido durante un año o más en las filas del Ejército Libertador. En el segundo caso se hallaban los extranjeros que obtuvieran la carta de ciudadanía después de 5 años de residencia y al menos uno de haberla solicitado, el extranjero que contrajera matrimonio con cubana o viceversa siempre que hubieran tenido descendencia o residieran durante 2 años en el país, los extranjeros pertenecientes al Ejército Libertador que reclamaron la ciudadanía dentro de los 6 meses siguientes a la Constitución de 1901, los extranjeros que hubieren permanecido en Cuba antes del 1ro de enero de 1899, debiendo haber conservado su domicilio y haber reclamado la ciudadanía dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la Constitución de 1901 o desde que alcanzaran la mayoría de edad si fueren menores en ese entonces, los españoles residentes en Cuba el 11 de abril de 1899 que no se inscribieron en el Registro hasta el 11 de abril de 1900, los africanos que hubieran sido esclavos y los emancipados conforme al artículo 13 del Tratado entre España e Inglaterra del 28 de junio de 1835 y los hijos de padres nacidos en el extranjero que durante su minoría de edad se hubieran naturalizado como cubanos.

Correspondía al Ministerio de Estado otorgar o denegar los documentos e instruir el Expediente relativo a la pérdida de ciudadanía en caso de adquisición de la ciudadanía de otro Estado o del naturalizado que tuviera doble ciudadanía así como lo referente a la recuperación de la misma. A

tales efectos existía un órgano conocido como la Dirección de Ciudadanía del Ministerio de Estado encargada de los trámites referentes a la concesión de la Carta de Ciudadanía que debería firmar el Ministro de Estado. Los que desearan solicitarla deberían acompañar con la Solicitud entre otros documentos un Informe del Alcalde Municipal en el caso de los domiciliados fuera de La Habana y en el caso de los domiciliados en La Habana el Informe sería rendido por el Capitán de la Policía de la demarcación. Otros documentos requeridos eran: la certificación del derecho a la ciudadanía practicada en el Registro Civil, la certificación de matrimonio, la justificación de la ciudadanía cubana del cónyuge, mediante certificación y la certificación de nacimiento de alguno de los hijos de no haber residido durante 2 años.

DECRETO-LEY NO. 352 DEL 2017 SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA CUBANA POR NACIMIENTO DE LOS NACIDOS EN EL EXTRANJERO DE PADRE O MADRE CUBANOS

Este fue aprobado por el Consejo de Estado el 30 de diciembre del 2017 y entró en vigor el 1ro de enero del 2018. Conforme a este es responsabilidad de los Ministerios del Interior (MININT) y de Relaciones Exteriores (MINREX) la realización de los trámites vinculados a este fin por lo que en cierta medida sustituye y suple al ya obsoleto Decreto No. 358 de 1944. A tales efectos existe un órgano especializado en el Ministerio del Interior denominado la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería. De modo que toda vez que el solicitante, sus progenitores o representantes legales se hallen fuera del país se presenta la solicitud ante el consulado cubano en tanto que cuando se halle en el territorio nacional deberá realizar dicho trámite ante la Oficina de Trámites del MININT. En el caso de los menores o incapacitados corresponde a sus padres o representantes legales autorizar la solicitud, debiendo hacerse constar, en caso de no concurrencia de ambos padres, la autorización del que no asista a través de documento ante Notario o Cónsul. Igualmente deben acreditarse las circunstancias referentes a personas declaradas incapacitadas, suspensión de la patria potestad o fallecimiento de alguno de los progenitores.

Como parte del trámite de solicitud se hace necesario incorporar una serie de documentos que comprenden: la Declaración expresa del interesado en adquirir la ciudadanía, la Certificación de Nacimiento expedida por el Registro de Actos y Hechos de Cubanos en el Exterior toda vez que la solicitud se realice fuera de Cuba, la Certificación del Nacimiento del padre o la madre de origen cubano expedida por el Registro del Estado Civil y el documento expedido ante Notario donde se exprese la autorización del titular de un inmueble para que el interesado se domicilie en su vivienda, válida toda vez que el interés del solicitante sea residir en el país.

Así las cosas los Consulados y Oficinas de Trámites cuentan con un plazo de 20 días para remitir los expedientes al Jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT el cual puede admitir, denegar o devolver, supuesto en el cual cuenta con un plazo de 7 días para hacerlo, toda vez que se advierta que no constan los documentos necesarios o cuando los que aparecen no reúnen los requisitos. Además tiene un plazo de 30 días para decidir mediante Resolución si admite o deniega, debiendo remitir la Solicitud en un plazo de 5 días a la Oficina de Trámites o al Consulado notificándose la decisión al interesado en un plazo de 90 días. Ante la inconformidad procede Recurso de Reforma en el plazo de 7 días, que debe resolverse en un plazo de 20 días contra lo cual solo procede una solicitud de revisión ante el Ministro del Interior en el plazo de 10 días para ser resuelta en un plazo de 30 remitiéndose al Jefe de la mentada Dirección en un plazo de 7 días y notificándose al interesado en el plazo de 30. Igualmente existe la posibilidad de revisión toda vez que haya nuevos elementos no procediendo en ningún caso recurso ante lo administrativo o lo judicial. Todos los términos se cuentan en días hábiles, o sea, laborables.

Con anterioridad a lo regulado actualmente existía el trámite de avecindamiento.

OTRAS NORMAS JURÍDICAS QUE REPERCUTEN EN EL TEMA

Particular repercusión tienen la Ley del Registro del Estado Civil y su Reglamento. En tal sentido la Ley No. 51 del 15 de julio de 1985 Ley del

Registro del Estado Civil establece la obligatoriedad de inscribir entre otras cosas los actos referentes a la adquisición, pérdida o recuperación de la ciudadanía lo cual debe efectuarse en el Registro del domicilio de la persona o en su defecto en el Registro Especial del Estado Civil, debiendo consignarse en la inscripción una serie de datos referentes al acto, a la persona implicada, al registro en que se efectúa y al registrador y al margen deben hacerse constar otros particulares referentes a pérdida o recuperación de la ciudadanía, errores, nulidades, el estado civil de la persona, etcétera . A tales efectos una de las 4 secciones en que debe estar estructurado el Registro es la de ciudadanía. Del mismo modo se especifica que la renuncia a la ciudadanía de origen y la adquisición de la cubana por los extranjeros debe llevarse a cabo en el Registro de su domicilio en Cuba.

Por su parte la Resolución No. 249 de 1ro de diciembre del 2015 que constituye el Reglamento actual de la Ley del Registro del Estado Civil y que deroga a su antecesor contenido en la Resolución No. 157 de 1985 establece que los libros duplicados de ciudadanía se conforman a partir de los documentos remitidos por las autoridades competentes. Para adquirir la ciudadanía cubana se requiere una solicitud al registrador con los datos exigidos en el Reglamento. En base a ello se conforma un expediente con los documentos que dicha norma especifica, el que se archiva en la oficina registral. En estos casos se remite de oficio certificación a la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería.

Asimismo, a raíz de la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 352 del 2017 fue dispuesta por la Dirección de Notarías del Ministerio de Justicia la Indicación Metodológica No. 1 del 3 de enero del 2018 que entre otras cosas se refiere a las autorizaciones de los progenitores a los menores para trámites de ciudadanía y residencia en inmueble mediante escritura notarial.

¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE UNA LEY DE CIUDADANÍA EN CUBA?

- 1. Obsolescencia del Decreto No. 358 del 4 de febrero de 1944 por cuanto hace alusión a organismos y documentos desaparecidos, no correspondientes o no aplicados siendo el caso del Ministerio de**

Estado y su correspondiente Dirección de Ciudadanía, los Alcaldes Municipales, el Registro de Españoles, los Certificados de Nacionalidad, las Cartas de Ciudadanía y los Capitanes de Policía municipales (funciones suplidas en cierta medida por los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Justicia) lo que lo hace casi inaplicable.

- 2. Regulación en dicha norma de casos que hoy por hoy no son viables, como los africanos que fueron esclavos, los ex miembros del Ejército Libertador o los españoles residentes en tiempos de la colonia.**
- 3. Admisión por la actual Constitución de la pluralidad de ciudadanías aun con la obligación de registrarse por la cubana mientras se esté en territorio nacional.**
- 4. Inexistencia del requisito de avecindamiento en la Constitución para el caso de los padres cubanos de hijos nacidos en el extranjero.**
- 5. Necesidad de una Ley de Ciudadanía a la luz de la existencia de una Reserva de Ley en la Constitución por cuanto se alude en sus artículos sobre la ciudadanía a la necesidad de regulación legal de su adquisición, pérdida, privación o recuperación. Téngase en cuenta que el Ordenamiento Jurídico adoleció de esta falencia en tiempos de la Constitución derogada (1976-2019).**
- 6. Se hace necesario acabar con la dispersión legislativa en dicho aspecto.**
- 7. Necesidad de regular la posibilidad que ofrece la Constitución de adquirir la ciudadanía cubana por otorgamiento del Presidente de la República.**
- 8. Se requiere llenar el vacío normativo existente sobre el procedimiento para la privación de la ciudadanía o la renuncia a esta así como su recuperación.**
- 9. Al amparo de las garantías de acceso a la justicia, al debido proceso y de reclamación ante daños ocasionados por funcionarios y directivos de los órganos y organismos del Estado contenidas en los artículos 92, 94, 95, 98 y 99 del texto constitucional sería idóneo regular la posibilidad de acceso a la vía judicial en caso de inconformidad con las decisiones que afecten la ciudadanía.**

Pudiera decirse que cuando más cerca estuvo Cuba de contar con tan necesario cuerpo normativo fue en 1994 cuando se elaboró un Anteproyecto de Ley de Ciudadanía, que no llegó a ser aprobado, a lo que se han referido algunos autores. A raíz del mandato de la actual Carta Magna la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Acuerdo No. IX-49 del 21 de diciembre del 2019, primer Cronograma Legislativo adoptado luego de esta, previó su aprobación en abril del 2022, correspondiendo al Ministerio del Interior la Ponencia, lo cual quedó postergado al no hacerse alusión a ello en los reajustes efectuados en los Acuerdos IX-76 del 17 de diciembre del 2020 y IX-115 del 22 de diciembre del 2021, lo cual se retoma tras la apertura de una nueva legislatura y la aprobación del Acuerdo No. X-12 el 25 de mayo del 2023 que sitúa la misma para julio del 2024.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Acuerdo del Consejo de Estado del 19 de mayo del 2004 (2004) Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 49, Ordinaria del 26 de agosto del 2004**
- **Acuerdo No. IX-49 del 2019 (2020) Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 2, Ordinaria del 13 de enero del 2020**
- **Acuerdo No. IX-76 del 2020 (2021) Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 6, Extraordinaria del 27 de enero del 2021**
- **Acuerdo No. IX-115 del 2021 (2022) Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 5, Extraordinaria del 12 de enero del 2022**
- **Acuerdo No. X-12 del 2023 (2023) Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 43, Extraordinaria del 13 de junio del 2023**
- **Constitución de la República de 1976 (2009) Editorial Pueblo y Educación**
- **Constitución de la República del 2019 (2019) Editora Política**
- **Decreto No. 358 de 1944 (1944) Gaceta Oficial, Tomo Quincenal Número V, Número Anual 112, del 3 de marzo de 1944**
- **Decreto-Ley No. 352 del 2017 (2017) Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 63, Ordinaria del 30 de diciembre del 2017**
- **Ley No. 51 de 1985. Ley del Registro del Estado Civil (2018) Ediciones ONBC**
- **Martínez Pérez, Odette (2010) El régimen jurídico de los extranjeros en Cuba. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, Año XLIII, número 129, septiembre-diciembre del 2010, pp. 1233-1259**
- **Pérez Díaz, Olga Lidia (2018) Compilación de Disposiciones de la Dirección de Notarías, Ministerio de Justicia**

- Piorno Garcel, Marien y Jorge Luis Fernández Íñiguez (2015) Cuba, Constitución y Ley de ciudadanía. Revista Caribeña de Ciencias Sociales (abril 2015). En línea: <https://www.eumed.net/rev/caribe/2015/04/ley-ciudadania.html>
- Piorno Garcell, Marien (2015) Cuba, ciudadanía múltiple y estatuto personal. Perspectiva de cambio. Revista Pensamiento Jurídico, No. 42, julio-diciembre, Bogotá 2015, pp. 71-102
- Piorno Garcell, Marien, Arletys del Toro Cardoza y Juan Carlos Mendoza Pérez (2019) Cuba, constitución y ciudadanía: formas de adquisición y pérdida. Revista Lex de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruanas, No. 24, Año XVII, 2019, II, pp. 365-390
- Prieto Valdés, Martha (2016) La ciudadanía cubana. Mirando alrededor y al pasado para resolver un problema de hoy. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Año XLIX, número 145, enero-abril del 2016, pp. 173-194
- Resolución No. 249 del 2015 del Ministerio de Justicia (2016) Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 38, Extraordinaria del 3 de diciembre del 2015



PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA

*Menfis Del Carmen Álvarez Núñez**
Venezuela



RESUMEN

El presente artículo de investigación tiene como propósito: (a) Analizar las perspectivas del proceso histórico (conquista, colonial y republicano) de los siglos XVI al XXI (1522 - 2019) del Estado venezolano y la función de Seguridad Ciudadana; (b) Caracterizar los diversos enfoques de las Políticas Públicas en las gestiones de los Mandatarios Hugo Chávez (1999-2012) y Nicolás Maduro (2012-2019); (c) Construir categorías temáticas emergentes con base en las políticas públicas de los procesos de Seguridad Ciudadana; y (d) Exponer la experiencia registrada por la Asociación Civil Paz Activa (2018) referida a Seguridad Ciudadana. El estudio es de carácter documental, lo cual significa la revisión y análisis del estado del arte del tema Seguridad Ciudadana en Venezuela, considerando los enfoques e interpretando los conceptos y nociones de autores con experticia en el tópico Seguridad Ciudadana. Finalmente, con este estudio se pretende hacer un aporte conceptual y evidenciar en forma general las serias dificultades y limitaciones que hay entre el Estado y los Ciudadanos afectados por los problemas cotidianos de alta criminalidad en el país y sus devastadores impactos que genera este flagelo nacional en la víctima, su familia y la sociedad. De allí la necesidad de que el Estado asuma desde una nueva perspectiva y retome los asuntos desde unas políticas públicas en Seguridad Ciudadana en sus distintos niveles de gobernabilidad institucional (municipal, regional y nacional), promoviendo la participación de otros actores, atendiendo las lecciones aprendidas de la historia en esta materia y reestructurando

***Dra en: Ciencias de la Educación. Pedagogía Crítica. Derecho Internacional Publico, mención Derecho Internacional Humanitario. Seguridad Ciudadana, Mención Policial. Gestión Para la Creación Intelectual. PHD. Ciencias Jurídicas y Políticas. Derecho Constitucional. Ciencias de La Seguridad Ciudadana.**

sus líneas de acción para la labor del Estado- Instituciones-Sociedad organizada) para minimizar la criminalidad nacional e incrementar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Descriptores: Proceso Histórico-Político, Seguridad Ciudadana, Políticas Públicas.

INTRODUCCIÓN

Partiendo del concepto de Política Públicas de Kelly (2003) quien planteó el supuesto básico de que el Estado existe para satisfacer los intereses de la colectividad, siendo una tarea difícil y que nunca se cumple a beneplácito de todos.

Para esta autora existen dos escuelas de pensamiento acerca de las políticas públicas a saber la institucionalista y de elección pública. Por una parte, las políticas públicas de la escuela institucionalista enfatiza la importancia del diseño de las instituciones para el logro de los objetivos colectivos. Y por la otra, según esta escuela, la clave es la manera de estructurar la importancia de las reglas para el comportamiento de las personas y los grupos, es decir, el diseño institucional crea incentivos que generan resultados específicos. Ibidm

La escuela de elección pública es otra óptica para entender el funcionamiento del Estado, porque esta escuela parte de la idea de que son los individuos y los grupos quienes influyen en la naturaleza de las instituciones y su desempeño. Para la autora el individuo tiene sus preferencias y actúa en consecuencia, pero también opera dentro del contexto institucional que lo rodea. El análisis y el diseño de las políticas públicas exigen que se comprenda estas dos fuerzas la institucional y la elección pública.

El proceso de análisis del tema Políticas Públicas en Venezuela, en el área de la Seguridad Ciudadana, implica considerar el diseño y ejecución de las políticas del Estado (central, regional y municipal) como un sistema de alta complejidad, bien por el aspecto sociocultural (estilos consuntivos, modas, presunciones materiales, otras) de la ciudadanía del país, así como por el deterioro de las condiciones materiales de la población nacional producto de la crisis económica, política e institucional, debido en parte por la decadencia de los servicios públicos

fundamentales del Estado (ruptura Estado y Ciudadanía), así como por diversas razones de conocimiento como el déficit del financiamiento público por el bloqueo económico de EEUU y otras aparentes como la matriz de opinión que pueden derivarse de los reportes de los diversos medios de comunicación.

Es posible que alguno o varios de los factores criminales objeto de estudio e intervención en los homicidios, estafas, hurtos, robos de vehículos, secuestros entre otros conocidos estén presentes en los procesos de gestión de la seguridad ciudadana que adelanta el Estado, pero para saber su efectividad en contra de los delitos referidos se necesitaría auditar la efectividad práctica administrativa de los planes, proyectos y programas de seguridad ciudadana y sus resultados concretos, es decir, observar si es posible que sean cotejables las ausencias o prácticas de los procesos de autoevaluación, coevaluación y seguimiento autocrítico y efectivo por metas de reducción del crimen por parte de la institución y sus equipos operadores, así como la observación crítica de los procesos de liderazgos y formación de líderes de dirección de las áreas y tareas que abordan los funcionarios y expertos del área de Seguridad Ciudadana.

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LOS PERÍODOS CONQUISTA, COLONIA Y REPUBLICANO EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (1522 - 1958)

Antes de esbozar la experiencia cronológica de los sucesivos procesos de la historiografía nacional en los tres (3) períodos históricos de conquista, colonia y república es conveniente hacer una exégesis general de los tres lapsos referidos, a modo de contextualizar, puesto que desde el año 1522 a 1821 fueron casi 300 años del dominio político-militar-territorial español sobre Venezuela. Aunque desde la perspectiva histórica del año 1522 al 2019 son 497 años de presencia del Estado monárquico y republicano como entidad político-jurídica sobre un territorio, un gobierno y una población, ejerciendo acciones desde el comienzo, pero con incipiente objetivación en los procesos de la Seguridad Ciudadana en la época de la España imperial que abarcó dos dinastías reales.

Las dos casas o coronas españolas fundadoras fueron las siguientes: la primera de la conquista territorial, provino de la Casa de Austria entre los siglos XVI al XVII y la segunda casa real colonizadora fue la Borbónica (Fisiocratismo-agricultura) entre los siglos XVIII al XIX, ambas coronas monárquicas hicieron actos de Estado y Gobierno en materia de Seguridad Ciudadana en el territorio de la que sería la Capitanía General de Venezuela, hoy la nación de Venezuela. Luego siguió y aún pervive un proceso histórico republicano entre 1821 a 2019 (siglos XIX al XXI) con sus alcances y matices singulares dentro del entramado institucional del proceso de la Seguridad Ciudadana como materia de orden público estatal, con la anuencia de la vigésima sexta Constitución de la República Bolivariana de (1999), donde se privilegió dicha institución del Estado.

En el siguiente Cuadro 1 se relacionan los elementos clave del proceso de la Seguridad Ciudadana en los siglos XVI al XX, entre los años 1522 hasta 1935:

Cuadro 1: Elementos clave del proceso de la Seguridad Ciudadana en los siglos XVI al XX: Entre los años 1522 hasta 1935:

Autoridad Año	Acción Pública del Estado: Seguridad Ciudadana
Reino de España rige 1522	Territorio venezolano conquistado, resistencia de los indígenas y la Seguridad Ciudadana se rigió por órdenes reales y designios de la corona del Reino de España
Junta Suprema de Caracas: 1810	La Junta Suprema de los Derechos de Fernando VII en Caracas recomienda crear un cuerpo armado para la salva y custodia del Congreso del 9 de marzo de 1811, al crearse una compañía denominada Guardia Nacional
Junta Suprema de Caracas: 1811	Creación del Servicio Rural para la protección de propietarios de tierras, contra robos y crímenes en 1811. Se instituyó la Policía Rural, fue centenaria (1811-1911), cuerpo armado con esquema militar y con funciones represivas
I Congreso de la República 1era. República 1811- 1812	Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela del Reino de España, instituido en la Constitución Nacional de 1811 Se buscó establecer el orden y que los habitantes de ese período histórico, tomaran conciencia del proceso de ciudadanía y reconocieran la nueva República de 1812 emergente en tierras de América, donde la Guardia Nacional fue dejada sin efecto por carencia de recursos fiscales. Desarrollo de un largo período de guerras entre el Reino de España y la naciente República de Venezuela liderada por Simón Bolívar y militares, mantuanos, negros, esclavos, pardos, mestizos y pueblo
II Congreso de Venezuela 1821- 1830	La Batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821 logra la Libertad Política de Venezuela. Se instituyó la República Federal de la Gran Colombia integrada por tres (3) naciones suramericanas: Colombia, Ecuador y Venezuela Venezuela ganó la independencia completa como un país separado de la Gran Colombia en 1830 y se dio la disolución de la Gran Colombia, con lo cual el país quedó en autonomía jurídica para legislar en distintas materias.
General José Antonio Páez 1830/ 1839-1841	Para 1839, se establecen políticas criminales, eliminándose la primera Guardia Nacional. Se creó la Guardia Nacional de Policía con énfasis represivo, sus funciones fueron la seguridad y el orden en el medio rural, evitar crímenes, protección de la vida de las personas y sus bienes, y la vigilancia y custodia de los presos. Debido a la carencia de recursos económicos para su mantenimiento ésta desaparece por medio de la derogación de la Ley que la creó en el año 1847.

General Juan Vicente Gómez 1908 1935	En 1908 al 1935, bajo la política dictatorial del Gral. Juan Vicente Gómez, se continúa con políticas aún más represivas donde el Estado tiene el control supremo de la seguridad ciudadana, para su ejecución en 1915 se creó un aparato policial conocido como “La Sagrada” una policía secreta, centralizada, politizada, consagrada al mantenimiento y la supervivencia del gobierno gomecista y que escapaba al proceso de burocratización del Estado. A través de la información recaudada por los agentes de “La Sagrada”, se lograba un control más amplio, a través del cual era posible detectar y reprimir a los enemigos políticos que pudieran ser considerados una amenaza evidente en alteración del orden legalmente establecido. Al fallecer Gómez en 1935, desaparece “La Sagrada”, los cuerpos policiales de algunos estados y del Distrito Federal se abocaron al resguardo del orden público.
--	---

La gestión del proceso de Seguridad Ciudadana en los procesos de conquista y colonización están asociados a la formación de la nacionalidad e institucionalidad de la venezolanidad, es decir, desde el siglo XVI (1522) con la conquista de indígenas y territorios vírgenes y luego la colonización Española desde el siglo XVIII, año 1722 hasta el siglo XIX, rigió mediante órdenes reales y designios de la corona del Reino de España que de manera progresiva y sistemática se fueron incorporando un conjunto de instituciones provenientes de la metrópolis española como fueron en el siglo XVIII: la Capitanía General de Venezuela, la Real Audiencia, La Real Intendencia, el Código negrero entre otras, siendo Carlos III un importante monarca reformador.

Cuadro 2

Elementos clave del proceso de la Seguridad Ciudadana en el Siglo XX: 1936 hasta 1998:

Autoridad Año	Acción Pública del Estado: Seguridad Ciudadana
General Eleazar López Contreras 1936-1941	Para 1938, la Seguridad Ciudadana, continúa con políticas netamente represivas ahora más militarizadas. Se crea como órgano rector de las políticas de Estado en materia de Seguridad Ciudadanía, la Dirección de Seguridad Nacional (DSN), como antiguo organismo de inteligencia policial venezolano establecido durante el Gobierno de Eleazar López Contreras.
General Marcos Pérez Jiménez 1952-1958	La (DSN) como aparato policial se distinguirá aún más por su estructura piramidal, altos niveles de burocratización y escasa flexibilidad y permeabilidad ante las exigencias sociales. En este estado es importante destacar la doble dimensión de las políticas ejecutadas, mediante la función policial, donde se protegerían importantes objetivos para el conjunto social, así como los derechos de las personas establecidos en el Constitución y en el conglomerado de leyes.

En la administración del Gral. Isaías López Contreras 1936-1941, el enfoque y concepto de la Seguridad Ciudadana que regentó el Estado venezolano, fue eminentemente político-represivo y militarista, este gobierno de vocación coactiva y de apertura socarrón medianamente

democrática, era heredero de un sistema de 27 años en el poder absoluto frente al ciudadano (1908-1935 Juan Vicente Gómez) con bases de sustentación represivas (petróleo, carreteras nacionales, cárceles crueles, trabajo forzado, compadrazgo, espionaje y uso sistemático de la violencia pública, entre otros), por lo tanto, era plausible dicha cultura de violación de derechos humanos por razones de Estado.

Mientras que el Gral. Isaías López Contreras (1935-1941) creó en materia de Seguridad Ciudadana la Dirección de Seguridad Nacional como política represiva y militarista. La categoría que se deriva o induce del estudio es Pensamiento único, que no admite la diversidad del pensamiento político y organizacional en una sociedad moderna, la cual debe estar flanqueada por diversas corrientes y organizaciones políticas, para ofrecer a la sociedad opciones variopintas para todos los tipos de ciudadanos que políticamente se organicen.

En el siguiente Cuadro 3 se relacionan los elementos clave del proceso de la Seguridad Ciudadana en el Siglo XX: 1958 hasta 1984. Período de la Democracia Representativa de los Partidos Políticos venezolanos que rigieron entre 1958 hasta 1998.

Cuadro 3
Seguridad Ciudadana en el Siglo XX: 1958 hasta 1984. La Democracia Representativa:

Autoridad	Acción Pública del Estado: Seguridad Ciudadana
Rómulo Betancourt Presidente de la República de Venezuela 1959-1964	En 1958, mediante decreto No. 492 del 30 de diciembre de 1958, se crea la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN), cuya finalidad era: "asesorar al Presidente de la República, al Consejo de Ministros y a los demás centros de decisión del Gobierno, en la formulación e instrumentación de la estrategia de desarrollo económico - social del país, promoviendo para tal efecto los planes, políticas y proyectos nacionales compatibles con esta estrategia, facilitando al mismo tiempo la indispensable coordinación entre las organizaciones relevantes para su ejecución". Apertura en materia de políticas públicas dirigidas a la prevención del delito, en función de la protección de las víctimas.
Rafael Caldera Presidente de la República de Venezuela 1969-1974	En el quinquenio 1970-1975, se gesta el IV Plan de la Nación, considerándose la necesidad de implementar políticas públicas que controlen los índices de criminalidad. Para este período, se crea mediante decreto No. 241 del 11 de febrero de 1970, la hoy conocida Dirección de Prevención del Delito dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia, precursora de la Comisión de Prevención de la Delincuencia, como organismo dependiente del Ministerio de Justicia, organismo encargado de investigar las causas de la criminalidad en el país desde 1951, planificador de la política anti delictiva en el país.

Carlos Andrés Pérez Presidente de la República de Venezuela 1974-1979	Entre 1976 y 1980, el V Plan de la Nación, se amplió la prevención del delito, lo que no fue óbice para el aumento de la criminalidad, sobre todo en ciudades de alta concentración urbana y alta concentración de renta, estando la intervención estatal dirigida primordialmente al incremento del número de los cuerpos policiales en el país, situación que se vio agravada por la escasa formulación de políticas públicas de seguridad, la desarticulación de las instancias que componen el sistema de justicia, el retardo procesal que funciona como un estímulo a la impunidad, la falta de una legislación penal específica de control del delito organizado, entre otros factores. Por lo que el auge de la criminalidad se atribuye a la crisis, al mal funcionamiento de las instituciones y al uso excesivo de la violencia institucional para la resolución de los conflictos sociales y políticos.
Jaime Lusinchi 1984-1989	Para el período 1981-1985, el VI Plan asumiría como prioridades el hacinamiento carcelario y el mal funcionamiento del sistema de justicia. En los planes subsiguientes, salvo los cambios de argumentación y algunas variaciones en cuanto al grado de precisión de las propuestas oficiales al examinar las condiciones favorables al crecimiento del delito, escasos cambios medulares, admite la situación al precisar que el incremento de la violencia, la crisis de la administración de justicia y la inseguridad ciudadana constituyen problemas que están quebrantando el Estado de Derecho, resaltando la relevancia en materia de prevención, discurrida como materia de seguridad y defensa social.

Cuando se inició la era democrática (1958-1998) para el ejercicio del poder político del Estado, mediante el voto popular de sus ciudadanos, se comenzó un ciclo histórico de 40 años con una interesante legitimidad de origen y desempeño práctico de la representación de la soberanía nacional, por parte de toda la ciudadanía venezolana quien es depositaria del derecho y deber de sufragar, es decir, transferir esa voluntad individual a personas idóneas que plantearon temas de interés nacional del país y fueron a su vez, optantes a cargos de alta dirección pública en el territorio del país, en especial la Presidencia de la República. Sin embargo, no se evaluaba con objetividad la designación de personalidades que optaron a altos cargos de representación popular y el sistema entró en una profunda crisis en las décadas de los ochenta y noventa que duró hasta finales de 1998 en modo irreversible.

En la gestión administrativa de Betancourt (1958-1964), la literatura da cuenta de que su mandato inició un proceso de apertura en materia de políticas públicas dirigidas a la prevención del delito, en función de la protección de las víctimas.

De manera que este primer mandato en la era democrática período de 1959 a 1964, centró su esfuerzo de servicio público en cómo se diseñarían e implementarían políticas públicas que generen planes,

proyectos o programas que conduzcan al proceso de prevención del delito y sus diversas acepciones.

Durante la administración pública del Presidente Rafael Caldera (1969-1974) en el lapso de 1970-1975, se gestó el IV Plan de la Nación, el cual tuvo como eje fundamental la necesidad de que el Ejecutivo Nacional diseñe e implemente un conjunto de dispositivos conducentes al ejercicio y prácticas del gobierno como son los diseños e instrumentación de políticas públicas, a saber: programas, planes o proyectos específicos que controlen los índices de criminalidad para el lapso previsto.

Debe significarse que durante la administración del primer gobierno nacional del ex – presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), se diseñó el V Plan de la Nación para el lapso entre en 1976 a 1980, el cual prescribió que el Ejecutivo Nacional amplió el alcance de la agenda incluyendo la prevención del delito que ya traía su histórico tras tres (3) administraciones anteriores (Betancourt, Leoni y Caldera).

De manera que la existencia de dicha política pública con carácter de prevención no lograba completamente paralizar o mitigar el fenómeno del incremento de este flagelo social, en especial en las principales ciudades como Caracas la capital de la república. En este orden de ideas, la acción estatal se centró en incrementar el parque o la oferta del número de unidades policiales, funcionarios y equipos en todo el país, pero no fue posible maximizar la gestión de prevención del delito y afectó severamente la seguridad ciudadana y los derechos de la ciudadanía en la prevención.

Aunada a esa situación estuvo la escasa formulación de políticas públicas en seguridad ciudadana, con efectos negativos, lo cual evidenció las debilidades del sistema de justicia en la época del bipartidismo, mayor impunidad por la inacción policial y judicial, y la omisión parlamentaria de generar un instrumento legal (Ley) que abordara la materia penal frente al hecho punible, por la comisión del delito y su institucionalización orgánica y formal en el aparato estatal. La categoría conceptual que tematiza la referida brecha histórica fue la Omisión de funciones públicas.

La gestión presidencial Jaime Lusinchi (1984-1989), le correspondió para el período 1981-1985, e hizo la formulación del VI Plan de la Nación, en el cual se asumió con carácter de urgencia el tema político, estableciendo un binomio entre los centros penitenciarios y el sistema de justicia, a su vez, lo relativo con el hacinamiento carcelario y el inadecuado funcionamiento del sistema de justicia.

Ahora bien, también se evidencia una crisis de agotamiento parcial del modelo político asumido en 1999, independientemente de todos los esfuerzos que han hecho sus dos líderes fundamentales: Hugo Chávez (1998-2012) y ahora Maduro (2012-2020), partiendo de una nueva Constitución Nacional (1999) que ejecutó modificaciones del aparato estatal y reestructurando instituciones como el CNE, PDVSA y otras, pero en la actualidad se percibe por parte de la ciudadanía su inminente insostenibilidad e infuncionalidad por muchos factores, mención especial los servicios públicos, cuyos efectos sociales y políticos son importantes. En el siguiente Cuadro 4 se relacionan los elementos clave del proceso de la Seguridad Ciudadana de los Siglos XX y XXI: 1999 a 2018.

Cuadro 4
Análisis de los elementos clave del proceso de la Seguridad Ciudadana de los Siglos XX y XXI: 1999 a 2019:

Autoridad	Acción Pública del Estado: Seguridad Ciudadana
Hugo Chávez Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela 1999-2012	<p>Estado Social de Derecho y de justicia 1999-2020. Los cambios sociales evidenciados en el preámbulo de la Constitución con preminencia de los Derechos Humanos.</p> <p>Proceso de reforma del Estado venezolano y redefinición de un sistema tendente a garantizar la seguridad ciudadana, entendida como la preservación de derechos y libertades reconocidas a las personas. Se consagra por primera vez a nivel constitucional la seguridad ciudadana (artículo 55), docta en sentido extenso como la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales.</p> <p>Desde el año 2003, el problema de la inseguridad pasa a ocupar la primera posición, y después en 2006 de graves casos que conmocionaron a la opinión pública, que el Gobierno formula una primera operación política de envergadura en esta materia. Incorporándose la participación de las comunidades en la prevención del delito, según la Asociación Civil PAZ ACTIVA (2018)</p> <p>Plan (2007 – 2013) La Gran Misión a toda Venezuela, pasándose de las acciones militaristas a un Plan como política de Seguridad Ciudadana</p>
Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela 2012-2019	<p>Plan de Seguridad 2014-2017, Mano dura y Represión social. Luego se desechó el plan, a favor de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP),</p> <p>Jaume Curbet (2009), dimensiona la importancia del problema e impacto de la seguridad ciudadana y de la delincuencia organizada en el contexto mundial actual y especialmente en Venezuela, que ha alcanzado en el 2018 la designación de ser el país del mundo con la peor tasa de homicidios.</p> <p>La prensa Efe (2017), afirma que el gobierno venezolano activa un nuevo plan para la “seguridad ciudadana”. Siendo presentado el 18 de enero del 2017, para un periodo 2017-2021, con base en “seis líneas de acción” que son parte de un plan para atender la “seguridad ciudadana” en el país y al que también denominó como “un sistema de protección del pueblo”, en el que trabajarán conjuntamente todas las fuerzas de seguridad del Estado.</p>

ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROCESO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: HUGO CHÁVEZ - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (1999-2012)

El cambio político e institucional llegó a Venezuela desde el año 1998, cuando el candidato presidencial Hugo Chávez Fría, gana la elección nacional para optar a la Presidencia de la República de Venezuela (1998-2003) un quinquenio de ejercicio presidencial, según la ex Constitución Nacional de 1961). Pero la llegada del liderazgo político con Chávez a la cabeza del Estado, tuvo el músculo suficientemente fuerte para impactar e iniciar una etapa de cambio institucional, social, político e ideológico en toda la población.

Debe significarse que la nueva Constitución (1999) contempla en su contenido la preminencia de los Derechos Humanos, es decir, el sujeto ciudadano/a venezolano/a es clave en la construcción, desarrollo histórico y comprensión del actual momento institucional, con su existencia vital y dinámica del dispositivo normativo (CNRBV) que se construyó para sostener la red de instituciones públicas identificadas con la oferta política-jurídica del cambio planificado para impulsar un nuevo ciclo histórico con su propia singularidad y cotidianidad, vale decir, la creación del Estado socialista.

Se redefinió el concepto de Seguridad Ciudadana por parte del nuevo Estado nacional constituido al asumirse como preservación de derechos y libertades plenamente reconocidos a todos los ciudadanos y ciudadanas además, se constitucionalizó la acepción de Seguridad Ciudadana en el Artículo 55 de la CNRBV (1999), es decir, las categorías emergentes de los hechos jurídicos serían las de un Estado Depositario de derechos y una Ciudadanía con libertades y garantías formalmente establecidas, en el Deber Ser constitucional de 1999, pero débil en el hacer efectivo de la cotidianidad, porque los índices de criminalidad en materia de Seguridad Ciudadana en el país, así lo revelan, según algunas organizaciones no gubernamentales.

Para materializar la voluntad política del Presidente Chávez, en cuanto a la prioridad con emergencia nacional del tema número uno de la agenda relativo con el proceso de la criminalidad contra la sociedad venezolana,

el primer mandatario propuso la incorporación de las comunidades organizadas como factor de enlace para procurar sistematizar experiencias y generar programas con la participación activa de los ciudadanos para la prevención del delito, ello implicó democratizar la acción social y política con nuevos actores dentro del diseño e implementación de la política pública, a través de planes, programas y proyectos, con la idea de triangular los entes involucrados (Ejecutivo Nacional, Organismos de Seguridad Ciudadana y Comunidades organizadas de base), para mancomunizar esfuerzos efectivos y directivos de recursos y objetivos de orden público nacional.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROCESO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: NICOLÁS MADURO - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (2012-2020)

La situación de la criminalidad en el país había alcanzado cifras considerables por lo que Jaume Curbet (2009), destaca la importancia del problema e impacto de la seguridad ciudadana y de la delincuencia organizada en el contexto mundial actual y especialmente en Venezuela, que ha alcanzado en el 2018 la designación de ser el país del mundo con la tasa más significativa de homicidios.

Siguiendo en este orden de ideas, el proceso evolutivo de la Seguridad Ciudadana, según la prensa Efe refirió en (2017) que el gobierno venezolano activó un nuevo plan para la “Seguridad Ciudadana”, el cual fue presentado por el Ciudadano Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 18 de enero del 2017 para conocimiento público, correspondiente al periodo 2017-2021, con base en "Seis Líneas de Acción", que son parte de un plan para atender la "Seguridad Ciudadana" en el país y al que también denominó como “Un sistema de Protección del Pueblo”, en el que trabajarán conjuntamente todas las fuerzas de seguridad del Estado.

En síntesis, la iniciativa del primer mandatario nacional se centró fundamentalmente en las siguientes medidas:

- a) Expansión de planes deportivos y axiológicos por la Paz y la Vida**
- b) Colocación en la vía pública toda la fuerza policial y efectividad del patrullaje**

- d) Instalación de los Cuadrantes de Paz.**
- e) Fortalecimiento de la protección popular para la paz SP3 en alianza con patriotas cooperantes y trabajo de inteligencia.**
- f) Fase superior de las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) Creación de las Casa de Justicia para resolución de conflictos entre otras funciones.**

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA POR LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG´S) ASOCIACIÓN CIVIL PAZ ACTIVA (2018)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su modelo abordaje de Seguridad Ciudadana considera que las sociedades con una alta polarización política disminuyen el capital social y generan mayores niveles de violencia interpersonal. De allí la relevancia de promover la construcción del capital social generado convenios y negociaciones que permitan vivir con niveles de conflictos mínimos que no obstruyan el logro de metas sociales comunes.

La Organización no Gubernamental Asociación civil Paz Activa en 2011, para la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reportó en su Informe para la Evaluación Periódica Universal un conjunto de contenidos relativos con los derechos humanos de la ciudadanía venezolana en materia de Seguridad Ciudadana que revelaron datos e información clave, que evidencian la dinámica de ciertos proceso de violación de derechos fundamentales de la sociedad, a cargo de funcionarios del Estado.

El Ministro del Interior y Justicia, en la presentación de su Memoria y Cuenta presentada a la Asamblea Nacional del 2010, reveló por primera vez en varios años la tasa de homicidios que se manejaba desde su despacho que situaba en 48 homicidios por cada cien mil habitantes (PCCMH); esto a razón de que algunos especialistas en la materia y la propia encuesta de victimización realizada por el Estado en el 2009, situaban este indicador sobre los 70 homicidios PCCH.

Estas disparidades son originadas exactamente por la negativa del Estado a difundir abiertamente este tipo de cifras, cuyo acceso permitiría

a la sociedad hacer una contraloría de los avances logrados o no en esta materia. Se recomienda al Estado venezolano poner a disposición de la colectividad, información sobre criminalidad en el país de manera oportuna y periódica.

La seguridad ciudadana en países latinoamericanos ha estado siempre signada por un fuerte componente militar que deviene del error de entrelazar defensa de la nación con la seguridad ciudadana. Por tal motivo, se recomienda la Desmilitarización de la Seguridad Ciudadana.

Estos hechos fueron reconocidos por el Estado Venezolano gracias a los estudios realizados por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) en el año 2006; donde se recomienda que las policías tengan un carácter exclusivamente civilista y que sus mandos sean de origen civil. Estas recomendaciones también se recogen desde organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Acerca de Ejecución de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, el Estado venezolano no ha generado políticas de seguridad ciudadana que logren disminuir los índices de criminalidad en el país de modo efectivo e irreversible. La postura del Estado con respecto a la inseguridad era global y generado por una estructura capitalista que genera pobreza y desigualdad en todo el mundo, es decir, era tratado como un problema estructural de la sociedad de consumo y se avocó a la implementación de un modelo socialista como su tarea principal en detrimento de otros asuntos de primer orden, como lo es la seguridad ciudadana.

La Asociación civil Paz Activa, reconoce otros esfuerzos puntuales del Estado en esta materia, pero debido a la debilidad de sus ejecuciones, han tenido poco o ningún impacto en revertir la situación. El haber asumido algunas de las recomendaciones emanadas de la CONAREPOL como fue el caso de la creación de la Policía Nacional Bolivariana, la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y algunas actuaciones del Consejo General de Policía apuntan hacia objetivos comunes. Se recomienda al Estado desarrollar una política

pública nacional de convivencia y seguridad ciudadana que asuma un enfoque multifactorial del problema y transversal en su aplicación dentro de todas las instituciones del Estado.

Esto significa profundas reformas y mejoras dentro del sistema de justicia para disminuir la impunidad en general, la transformación del sistema penitenciario, el desarme general de la población y el avocamiento de todas las instituciones del Estado en trabajar por alcanzar metas comunes en este tema, bajo una visión estratégica de largo plazo y que involucre a todos los actores nacionales.

CONCLUSIONES

Con relación a las Perspectivas del proceso histórico del Estado venezolano y la función de Seguridad Ciudadana existen factores dentro del tema de la seguridad ciudadana compuestos por una parte, el exponencial crecimiento y desarrollo del perfil de la inteligencia criminal de sujetos y organizaciones con soporte tecnológico y por la otra, de bandas organizadas que cometen delitos indiscriminadamente violando las normas del orden social-jurídico. Simultáneamente se observa un incremento negativo del proceso de la delincuencia organizada que está generando altos percentiles estadísticos deplorables en: homicidios, hurtos, robos a mano armada, secuestros, violaciones, robo de vehículos, robos a hogares y fábricas, así como en estafas personales y electrónicas, entre otros flagelos sociales, según el observatorio de violencia venezolano.

Igualmente, las acciones dispuestas por la corona española permiten a la autora inferir la categoría de Orden Normativo Real, mediante la cual todos los encomenderos provenientes de España hacia el nuevo mundo traían sus encomiendas con los linderos de tierra definidos y bienes otorgados por el Reino, es decir, le prescribían parte de la Seguridad Ciudadana mediante los linderos de las tierras otorgadas por el rey en calidad de propiedad, así como la misión que acometería en la América hispana y católica. A saber: administrar dicha institución para lograr provecho del trabajo indígena, puesto que la entrega de tierras, y grupo de indios a un español era para que éste lo protegiera, educara y evangelizará en la fe cristiana.

Con respecto a las Épocas históricas en el contexto de la Seguridad Ciudadana de 1522 al 23 de enero de 1958 en Venezuela, desde la mirada historiográfica, es necesario acotar que la comprensión del proceso evolutivo referido a la institucionalidad de la Seguridad Ciudadana naturalmente se encuentra flanqueado por los siguientes factores condicionantes:

- a) Naturaleza del régimen del sistema político en el ejercicio del poder.**
- b) Capacidad de respuesta de los gobiernos.**
- c) Marco normativo regulatorio.**
- d) Estructuras de planificación y presupuesto del gasto público.**
- e) Grado de cohesión y movilización de los actores sociales y políticos.**
- f) Recurso humano disponible.**
- g) Herramientas y técnicas en la elaboración de las políticas públicas**
- h) La cultura en los ámbitos de política, prácticas y sesgos en el diseño o instrumentación de la política pública de la Seguridad Ciudadana.**

Cabe destacar que cuando se inició la era democrática (1958-1998) para el ejercicio del poder político del Estado – nación, mediante el voto popular de sus ciudadanos, se comenzó un ciclo histórico de 40 años con una interesante legitimidad de origen y desempeño práctico de la representación de la soberanía nacional en el lapso 1959-1998, cada administración le correspondió realizar el diseño particular de la política pública de la seguridad ciudadana centrada en la ciudadanía para el sistema de protección de las personas miembros de la sociedad venezolana.

Con relación al Proceso de la Seguridad Ciudadana: Hugo Chávez - Presidente de la República de Venezuela de 1999 a 2012, se conceptualizó el concepto de Seguridad Ciudadana con rango constitucional, mediante el artículo 55 de la CNRBV (1999), bajo la administración Hugo Chávez Frías, de allí que la autora infiere la categoría temática de un Estado Depositario de Derechos y una

Ciudadanía con Libertades y garantías formalmente establecidas, en el Deber Ser constitucional de 1999, pero débil en la ejecución, porque los índices de criminalidad en materia de Seguridad Ciudadana en el país así lo revelan.

En síntesis en el Proceso de la Seguridad Ciudadana: Nicolás Maduro - Presidente de la República de Venezuela 2012 a 2020, se ha centrado fundamentalmente en las siguientes medidas:

- a) Expansión de planes deportivos y axiológicos por la Paz y la Vida.**
- b) Colocación en la vía pública toda la fuerza policial y efectividad del patrullaje.**
- c) Instalación de los Cuadrantes de Paz.**
- d) Fortalecimiento de la protección popular para la paz SP3 en alianza con patriotas cooperantes y trabajo de inteligencia**
- e) Fase superior de las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP).**
- f) Creación de las Casa de Justicia para resolución de conflictos entre otras funciones. Se destacan dos puntos positivos clave esbozadas por el expresidente Chávez y materializadas posteriormente, como son la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y la conformación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Policial (CONAREPOL).**

Siguiendo en este orden de ideas, la Organización No Gubernamental (ONG´s) Asociación Civil Paz Activa reconoce la relevancia social de la Política Pública de la Seguridad Ciudadana, en el cual se aboga por una política pública de convivencia y seguridad ciudadana con enfoque multifactorial en su aplicación dentro de todas las instituciones del Estado. Esto significa profundas reformas y mejoras dentro del sistema de justicia para disminuir la impunidad en general, la transformación del sistema penitenciario, el desarme general de la población y el avocamiento de todos los actores nacionales.

El tema del diseño e instrumentación de las políticas públicas del Estado para los asuntos de la Seguridad Ciudadana están relacionados con la naturaleza constitucional del Estado venezolano y con la

legitimidad o consenso alrededor del para asegurar su estabilidad, sin el uso de la fuerza; pero requiere de un soporte social, a través de la colectividad cuya participación es fundamental en la instrumentación de las diversas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, las cuales deben estar orientadas a garantizar los derechos humanos y a la promoción de una mejor calidad de vida de los venezolanos.

REFERENCIAS

- Amnistía Internacional. Informe anual 2016/2017. Situación Derechos Humanos en el mundo. Disponible en: <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017SPANISH.PDF> . Consulta: 2023, agosto 3 .
- Amnistía Internacional. Informe anual 2017/2018. Situación Derechos Humanos en el mundo. Disponible en: <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017SPANISH.PDF> . Consulta: 2023, agosto 3.
- Asociación Civil Paz Activa (2011). Informe para la Evaluación Periódica Universal. Caso: Venezuela. 12va. sesión. Disponible: <http://pazactiva.org.ve/wp-content/uploads/2016/02/Informe-sobre-situaci%C3%B3n-de-Convivencia-y-Seguridad-Ciudadana-en-Venezuela-18-de-Marzo-de-2011.pdf>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. (Estándar).
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial, 36.870, Diciembre 30, 1999.
- EFE. El Gobierno venezolano activa un nuevo plan para la "seguridad ciudadana" <https://www.efe.com/efe/america/politica/el-gobierno-venezolano-activa-un-nuevo-plan-para-la-seguridad-ciudadana/20000035-3151838> Consulta: 2023 agosto 3.
- Kelly, J. (2000). Políticas Públicas en América Latina. Teoría y práctica. Ediciones IESA. Caracas, Venezuela.
- Kymlicka W. y Norman W. (1997). El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente de la teoría de la ciudadanía", en Revista de estudios sobre el Estado y la Sociedad (3). Octubre, 1997.
- Marín, M. (2010). La sociedad civil global, como agente decisorio en política internacional. Revista OASIS. Universidad Externado de Colombia. Documento en Línea. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3986085.pdf> Consulta: 2023, agosto 30.

- **Martinelli, J. (2002). Políticas públicas en el nuevo sexenio; México: Editorial Plaza y Valdez.**
- **Montilva Prieto, H.; Martínez Miranda, G.; Duarte S., B. y Rincón C., D. (2017). Primer Concurso de Ensayo Breve Violencia, seguridad ciudadana y políticas públicas progresistas. UNES: Serie Crítica. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/vrcivsunes/20170105033113/pdf_146.pdf . /Consulta: 2023, julio 15.**
- **Observatorio venezolano de Violencia (2017).Informe anual. Disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2017/> Consulta: 2023, agosto 30.**
- **Observatorio venezolano de Violencia (2018).Informe anual. Disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/ovv-lacso-informe-anual-de-violencia-2018/> . Consulta: 2023, agosto 30.**
- **Ots Capdequí, J. M. (1982). El Estado Español en la Indias. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.**
- **Pacheco, E. (1984). De Castro a López Contreras. Proceso Social de la Venezuela Contemporánea. Editorial Domingo Fuentes y Asociados S.R.L. Caracas – Venezuela**
- **Parra A., E. (2009). La práctica de allanamientos ilegales y sus implicaciones en la garantía de los Derechos Humanos en Venezuela, presentado en la Universidad del Zulia.**
- **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD, 2004) La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Segunda Edición diciembre 2004. Buenos Aires (Argentina).**
- **Rojas, C. (2002), Políticas Sociales y Desarrollo de la Ciudadanía Diferenciada. Tesis para optar al grado de Magíster en Sociología, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Postgrado.**
- **Silva, M. (2016).El “deber de prevenir” violaciones a los derechos humanos y algunas de sus posibles consecuencias. Revista de Derecho Universidad San Sebastián.**
- **Touraine, A (1994), ¿Qué es la Democracia?, Fondo de Cultura Económica, México DF.**
- **Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2010). Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales. 4ª Edición. FEDUPEL. Caracas.**
- **Valenti, G. y Castillo, G. (1997). Interés público y educación superior: Un enfoque de política pública en Alejandro Mungaray y Giovanna Valenti (coords.), Políticas públicas y educación superior. México: ANUIES.**
- **Quillet, A, y Jackson W. (1972). Nueva Enciclopedia Autodidáctica Quillet. Tomo IV Promotora Latinoamericana. México**



EL CÓDIGO QR Y SUS EFECTOS EN EL ÁMBITO DE LA INFORMÁTICA APLICADA AL DERECHO EN VENEZUELA

*Jovanny Sevilla**
Venezuela



INTRODUCCIÓN

La palabra “código” según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia – Edición Tricentenario señala que proviene del latín “codicus”, obtenida popularmente por derivación regresiva bien del latín codiculus o codicillus, diminutivos de “codex”.

Dicho diccionario establece dos (2) conceptos de interés en el tema; por un lado, señala que los códigos son combinaciones de letras, números u otros caracteres que tienen un determinado valor dentro de un sistema establecido”; y por otro lado, que son un “sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender mensajes secretos”.¹

Por consiguiente, hoy día son muchas las estrategias tecnológicas presentes en el mercado tanto a nivel de hardware como software, las cuales pueden ser consideradas como propuestas válidas para ofrecer un buen servicio, considerando que estas deben a la par garantizar la seguridad de todas esas actuaciones electrónicas que realiza una persona o usuario de un sistema informático. En tal sentido, una de esas estrategias tecnológicas presente en el mercado es el famoso Código QR (Código de Respuesta Rápida) el cual brinda una serie de beneficios con

*Profesor de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa. Redes Sociales (RRSS): Juris Directum (Instagram, Telegram, Facebook y Twitter X). Correo Electrónico: asesor.jurisconsulta@gmail.com . WhatsApp: 0412.9651082

1. <https://dle.rae.es/c%C3%B3digo?m=form> - <https://etimologias.dechile.net/?co.digo>

solo disponer de un equipo terminal de telefonía móvil (celular - Smartphone), los cuales en mucho de los casos poseen una cámara lectora o escáner que permiten hacer lectura desde cualquier ángulo o posición de dicho código.

Dentro de ese mismo orden de ideas, en algunos casos, existe equipos terminales de telefonía móvil (celular - Smartphone), que no cuentan con una aplicación (App) o software que permita tal funcionalidad para la lectura del Código QR, es por ello que se debe instalar en dichos equipos cualquier aplicación (App) que se ofrecen en la Play Store tales como: Lector de códigos QR y barras QR SCAN Team, Lector de Códigos QR y BarrasDigitalchemy. LLC, Escaner QR y Códigos Barras Gamma Play, Lector de códigos QR y barras TeaCapps o el más utilizado de todos como lo es el caso del Escaner de códigos QR y barras QR Code Scanner. Una vez adquirida la misma, dichos usuario podrán escanear cualquier Código QR, el cual posteriormente puede direccionarlo a un archivo, correo electrónico, nombre de dominio, dirección URL, cuenta de una red social entre otros; para ejecutar una determinada actuación electrónica.

Como antecedente al uso de dicha herramienta tecnológica se debe señalar que: “En 1994, DENSO WAVE, una subsidiaria de Toyota, necesitaba una tecnología más rápida y robusta que el código de barras. El propósito era procesar grandes cantidades de caracteres y rastrear vehículos y piezas con facilidad. Masahiro Hara con su equipo de dos personas desarrolló lo que ahora llamamos código QR.” Es así entonces, como algunos tratadistas, investigadores o técnicos señalan que el código QR ² (en inglés significa: Quick Response Code / Código de Respuesta Rápida) actualmente es considerado como la evolución o resultado del denominado código de barras.

QUÉ ES EL CÓDIGO QR

El código QR o Código de Respuesta Rápida (en español), son un tipo de códigos de barras bidimensionales o modulo para almacenar información en una matriz de datos, donde dicha información esta codificada dentro de un cuadro, el cual posee dentro tres cuadros pequeños ubicados en las

2.<https://es.qr-code-generator.com/qr-code-marketing/qr-codes-basics/#:~:text=En%201994%2C%20DENSO%20WAVE%2C%20una,que%20ahora%20llamamos%20c%C3%B3digo%20QR.>

esquinas superiores e inferior izquierda 3, que permiten almacenar gran cantidad de 4.296 caracteres alfanuméricos.

En todo caso, es una herramienta considerada de código abierto y esto porque el mismo está disponible para todos. Este código puede ser escaneo independientemente del ángulo que se coloque, ya que prácticamente es como tomar una foto con la cámara de un equipo terminal de telefonía móvil (celular) a un objeto determinado el cual puede estar tanto en modo digital como físico; ya que los mismos tienden a proporcionar grandes cantidades de información.

Muchas son las ventajas del Código QR, entre ellos: Ahorras tiempo buscando el enlace; capacidad para reducir posibles colas y tiempos de espera; acceder a la información de manera rápida, el escaneo es sencillo y efectivo; y, accesibilidad ya que pueden utilizarse a través de dispositivos móviles. De la misma forma el escaneo de este tipo de código te puede direccionar a:

- Información de contacto: Nombre, compañía, teléfono, dirección postal.
- Una dirección web (URL).
- Un perfil de alguna red social tal como: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube entre otros.
- Una dirección de correo electrónico o Email.
- Un mensaje del tipo SMS.
- Un número de teléfono para realizar una llamada.
- Un texto de hasta 350 caracteres.
- Acceso a una red Wifi.
- Datos para un evento determinado.
- Una geo-localización para ubicarla en un mapa.
- Entre otros.

Es público y notorio observar a diario como el Poder Público y/o demás entes públicos o privados utilizan dicha tecnología de código abierto para facilitar el acceso de los usuarios a los distintos sistemas de información automatizados que poseen; esto en primer lugar, para fortalecer las

políticas públicas o estrategias de funcionalidad, y en segundo lugar, para almacenar información en sus bases de datos de todos los usuarios que se interrelacionan vía electrónica.

REGULACIÓN DEL CÓDIGO QR

Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece de manera expresa dos (2) supuestos de interés en el ámbito informático siendo estos esenciales en cuanto al tema que aquí se está analizado. Uno de ellos se encuentra en el artículo 108, el cual decreta que el estado venezolano debe garantizar servicios públicos en el ámbito del uso de la informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información; y el otro supuesto, se encuentra el artículo 110 ejusdem el cual dispone que ese mismo Estado debe reconocer el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser estos instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional.

De la misma forma, la Ley Orgánica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, establece de igual forma tres (3) supuestos de interés: primero, que el Estado Venezolano debe formular políticas públicas dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad, por medio de la articulación e integración de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones como condición necesaria para el fortalecimiento del Poder Popular respetando primeramente el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación ⁴; segundo, que las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público para el ejercicio de la soberanía nacional en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura ⁵; y tercero, que los interesados deberán tener acceso a los recursos, debido a que estos podrán optar al uso de los recursos provenientes de los aportes a la ciencia, tecnología e innovación, para todos aquellos sujetos contemplados en esta misma ley, siempre y cuando planteen la

4. Artículo 1 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

5. Artículo 2 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

formulación de proyectos, planes, programas y actividades que correspondan con las áreas prioritarias establecidas por la autoridad, nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones ⁶.

En otras palabras, el Código QR mucho más allá de considerarse una herramienta de código abierto es un mensaje de datos, ya que posee información en un formato adecuado cargado de data o datos los cuales son procesados por medios automatizados asignándoles así un significado para posteriormente ser transmitido por un sistema de información determinado. Por su parte, la Ley Infogobierno pareciera determinar dicho Código QR como un código unívoco, que permita identificar y recuperar un documento electrónico o digital almacenado en cualquier base de datos de un dispositivo de almacenamiento. Es por ello que el artículo 27 de dicha ley dispone que la validez de las copias impresas de los documentos electrónicos viene dada siempre y cuando las mismas estén respaldadas por un código unívoco que las identifique y permita recuperarlas en el repositorio digital institucional correspondiente, de conformidad con la normativa que rige la materia. Sin embargo, es imprescindible aclarar que dicho Código QR, no puede ser confundirse con un Código Hash o una Firma Electrónica, las cuales son instituciones jurídicas y técnicas distintas y que bien pudieran denominarse otro tipo de código unívoco.

En este sentido se comprende, que el uso del Código QR para los efectos jurídicos posee validez y eficacia jurídica por analogía ya que se encuentra respaldado por un bloque de normas que establecen su validez y eficacia jurídica. Entre ellos se pueden mencionar: Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas; Ley Especial Contra los Delitos Informáticos; Ley Info-gobierno, Ley de Transparencia y Acceso a La Información de Interés Público; Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado; Ley Orgánica de Telecomunicaciones; Reglamento para La Protección de Los Derechos de Los Usuarios en La Prestación de Los Servicios de Telecomunicaciones, Ley de Instituciones del Sector Bancario entre otros.

6. Artículo 34 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

EL CODIGO QR EN VENEZUELA

En la actualidad llama mucho la atención la implementación de los Códigos QR en los distintos ámbitos de la vida cotidiana; sin embargo, en el caso venezolano pareciera que su utilidad se encuentra de moda y eso es muy notorio. Estos códigos se pueden conseguir tanto en una simple carta de menú de un restaurante como en un documento público como lo es una Licencia de Conducir, productos farmacéuticos, productos industriales, canales de televisión por mencionar algunos.

Son entonces distintos los escenarios donde cumplen una notoria funcionalidad con la finalidad de ser amigables, compatible e identificables gracias al uso de un Smartphone o equipos terminales de telefonía móvil inteligentes (celulares inteligentes). A continuación se enumeran algunas de las aplicaciones del Código QR tanto en el sector público como en el privado:

- 1. En el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, específicamente es su página 36, se presenta una Tabla identificada con el número 8 que establece las Técnicas, instrumentos, materiales y responsables. En la misma se expone la Técnica del precintado el cual puede ser Físico o Digitales, llamando entre otros mucho la atención el uso del Código QR por parte del Forense o Criminalista para identificar las evidencias previamente embaladas y ofreciendo los datos de información referida específicamente a la evidencia y al caso de la investigación.**
- 2. En la fecha 10 de agosto de 2021, la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) habilitó un Código QR para facilitar la participación ciudadana en la consulta pública nacional del Proyecto de Ley Orgánica de Aguas, aprobado en su momento en primera discusión el 9 de junio de 2021. ⁷**
- 3. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a partir del año 2017 comenzó a utilizar la herramienta tecnológica Código QR tanto para el Certificado de Registro de Vehículo como en el caso de las Licencias de Conducir. Este código puede ser**

7. <https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/activan-codigo-qr-para-consulta-publica-de-ley-organica-de-aguas>

escaneado con la aplicación del INTT para teléfonos móviles con sistema operativo Android, estando el mismo disponible para su libre descarga en el portal web oficial, donde se puede visualizar los siguientes datos: N° de Cédula de Identidad del Ciudadano, Nombres y Apellidos, Grado de la Licencia y Fecha de Vencimiento de la Licencia para Conducir. Entonces es así como la presencia del Código QR en la Licencia para conducir, siguiendo los estándares internacionales para la implementación de dicho código y demás elementos electrónicos de seguridad, ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a la información con facilidad, directamente desde su base de datos. ⁸

4. El día 29 de diciembre de 2023, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) emitió una circular identificada con la nomenclatura SIB-II-GGIR-GRT-GGR-GNP-08723, la cual se envía a todas las Instituciones Bancarias, Compañías Emisoras o Administradoras de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico y Redes Interbancarias, relativa a los: LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍA DE CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA (QR) EN LOS MEDIOS DE PAGO.⁹
5. Plan piloto de parquímetros digitales en la ciudad capital, por parte del la Alcaldía de Caracas; donde para realizar tales pago se debe descargar en el celular mediante el uso del Código QR.
6. El Ministerio del Poder Popular para la educación también señalo en su momento la posible instalación de un sistema que utilice el Código QR en las escuelas para supervisar a trabajadores y alumnos.
7. Se utiliza también para ingresar a los eventos musicales, teatro, deportivos entre otros.
8. La Superintendencia Nacional de Viviendas (SUNAVI) también utiliza este código para canalizar gestiones de trámites y denuncias.

8. <http://www.intt.gob.ve>

9. <https://www.sudeban.gob.ve/>

9. Hasta Apple coloca estos códigos de manera secreta y hasta microscópicos en las pantallas y demás componentes internos de los iPhones.
10. Existen muchos campos o sectores más donde el uso del Código QR (Código de Respuesta Rápida) es utilizado en pro de brindar a la ciudadanía mejor calidad de vida y poder ofrecer de manera rápida una respuesta en cuanto a la solicitud de información.

Como complemento a lo antes señalado existen países donde existen empresa, tal es el caso de “Memorial Spain”, la cual ofrece códigos QR en las lápidas para recordar al difunto por el teléfono móvil, es decir, que los usuarios pueden recordar a sus seres queridos ya fallecidos mediante la recopilación de imágenes, video, música y demás mensajes de datos. Esto previo a un contrato ya suscrito entre la empresa y el interesado.

Por último, es necesario señalar que estas “nuevas” herramientas tecnológicas también son empleada por los ciberdelincuentes y es aquí donde aparece el famoso QRshing, el cual es un tipo de fraude donde se emplea una especie de phishing que se realiza a través del escaneo de Código QR malicioso, llevando al usuario a descargar un virus o malware; o pudiera también, ser direccionado a un sitio web oscuro donde pudieran solicitar o adquirir información confidencial del usuario. Ahora bien, para contrarrestar este escenario electrónico se debe: Contar con antivirus actualizados, verificar la credibilidad del código; comprobar la URL, Nombre de Dominio (NDD) o dirección electrónica del código; revisar si el código en físico ha sido suplantado por otro mediante el uso de una calcomanía; comprobar con algún representante de la empresa u organismo ya identificado previamente si dicho código es el correcto; entre otras estrategias mas. Todo esto con la finalidad de no ser víctima de un QRshing.

“El progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada.”
- George Bernard Shaw -



Universidad
BIA

FACULTAD INTERAMERICANA
DE LITIGACIÓN



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO UN ANÁLISIS DE COYUNTURA

*Jesús Caraballo
Venezuela*



*Expertos en la materia han manifestado que la prevención del delito como política gubernamental requiere de la existencia de una experticia técnica, bien dentro del gobierno bien fuera de él,
-Dorennys Angulo*

RESUMEN

A través de un viaje por la sinergias intrínsecas de las Políticas Públicas dirigidas a la prevención del delito, podremos observar cómo se diseñan y formulan y lo que ha sido la historia desde el punto de vista coyuntural, investigativo, paradigmático de los diferentes Planes de la Nación (del IV al IX), directamente arraigada al positivismo y su influencia en el derecho penal venezolano; haciendo cierta diferencia en su paseo por los Planes Nacionales de corte económico de los años 2001 y 2007, como también por los Planes Estratégicos Nacionales de Prevención del Delito, años 2001 y 2008. Igualmente, mostraremos la visión transformadora, donde el formato dialógico toma preponderancia hacia el reconocimiento de la participación sostenida y corresponsable de la sociedad en trabajo armónico con las instituciones del estado, para crear y recrear las políticas públicas en prevención del delito, dirigidas a dar respuesta oportunas más adaptadas a las realidades particulares de cada comunidad dentro del proceso transformador e integrador que se desarrolla desde el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz con sus diferentes organismos adscritos.

Palabras Claves: Políticas públicas, prevención del delito, coyuntural, planes de la nación, comunidad, dialógico.

INTRODUCCIÓN

Al realizar un diminuto viaje por las políticas públicas que en materia de seguridad ciudadana se han implementado desde la puesta en marcha del nuevo modelo policial, la creación de la UNES y los ajustes en las normas que rigen a los diferentes cuerpos policiales, surge la necesidad imperante de aterrizar todos los esfuerzos realizados, por los diferentes sectores gubernamentales y organizaciones sociales.

Lo anterior toma relevancia, por el crecimiento exponencial de la violencia en Venezuela, en estas tres últimas décadas, prendiéndose las alarmas en el 2016, por las altas cifra de homicidios, estando su justa argumentación, en el crecimiento de la criminalidad, producto del proceso histórico y social que analizaremos, donde la prevención fue soslayada por los cambios en las bases de la estructura institucional y del repunte de la socialización individual nuevamente, desvaneciéndose toda intención colectiva y del rescate de la participación comunitaria.

Lo Coyuntural Histórico Social:

Ahora bien, en los años 70 se observa la ejecución de una política en el área de prevención muy común en Latinoamérica dirigida a solucionar todos los actos delictivos con la cárcel, como práctica de reinserción del individuo victimario, solucionando de esta manera cualquier problema de seguridad; siendo el castigo para las personas que cometían el delito.

A medida que avancemos en el análisis, se hará mucho énfasis en los objetivos para los cuales fueron formuladas dichas políticas que se plasmaban en cada plan de la nación por el gobierno de turno, para atender las situaciones delictivas, enfocadas en acabar con los delitos para reducir o aliviar todos los efectos colaterales.

Es evidente, que en la actualidad, existen y existieron políticas que fueron aplicadas en el pasado con sus variantes y adaptaciones, producto de las variadas asesorías locales y estatales; a fin de resolver situaciones delincuenciales en el municipio o como el caso de la gran Caracas que a mediados de enero de 2000, vino a Venezuela William Bratton, quien dirigía la Policía de Nueva York en el año 1994 y en un lapso de 27 meses logró descender el índice de criminalidad en un 33% en esa ciudad,

“Plomo al Hampa”, recibiendo una bicoca de 182.000 \$. Este emprendimiento que recibió muchas críticas, y en estos momentos tenemos a nuestro sistema policial bajo una línea reactiva enfrentando al hampa en lugares como el Barrio Los 70, en diferentes barriadas de Petare, y calentando los motores para ir a la Cota 905 y Cotiza.

En este ir y venir, como lo planteé en líneas anteriores, de este estudio documental de las investigaciones realizadas sobre la Prevención del Delito en Venezuela y el despliegue cronológico de los principales indicadores delictivos, nos pone a repensar y reformular sobre este fenómeno, mirando la violencia delictiva de estos momentos, en su derivación como un proceso histórico y social que obliga a las instituciones policiales a fortalecerse, reestructurarse y actualizarse; al igual que las dinámicas comunitarias, en su paso de socialización individual a lo colectivo; legítimo, justificado y tolerable, para juntos atender los hechos criminógenos.

Con referencia a lo anterior, recordemos que las culturas cambian la manera preventiva de accionar de cada región, por eso, nuestra canción “Sentimiento Nacional”, cada región tiene sus cosas preciosas, al igual que las situaciones muy particulares que las afectan. No obstante, igualmente existen maneras muy específicas, de cómo las personas van socializando la información en cuanto al manejo del delito desde faltas leves hasta llegar a faltas graves. Basando esta socialización en experiencias colectivas de tipo vicario donde la falta de sanción para algunos hace permeable la visión acomodaticia de la gravedad del delito.

Siguiendo adelante, en los años 80 la pobreza fue concebida como causa principal de la inseguridad y la violencia, en una tentativa de mantener una visión positivista del problema, esto ocasionó que se solicitara la asesoría técnica de las Naciones Unidas para fijar las pautas necesarias para el diseño de las políticas públicas en el ámbito criminal, con el fin de desmontar mitos que principalmente se han hecho desde el positivismo en un discurso lineal, simplemente autoritario (medidas económicas, control policial, entre otros) en materia de seguridad. A continuación se presenta el resumen de las recomendaciones del grupo consultivo canadiense (Ángulo, 2012: 155).

- a. Constitución de equipos multidisciplinarios**
- b. Densificación de la investigación**
- c. Empleo de la tecnología para el análisis de los fenómenos.**

En ese mismo tiempo, Venezuela fue reconocida como el primer país en Latinoamérica donde se empezó a aplicar de manera coordinada políticas y tareas dirigidas a la prevención del delito (dado al aumento precipitado, sostenido y desmedido contra las personas y la propiedad).

Antes de seguir adelante, hablemos de otros argumento previos y posteriores a los años 70, entre ellos se pueden recalcar el crecimiento de las lesiones personales y los hurtos en la década de 60, aclarando que su tendencia viene de principios de los cincuenta y se profundizó desde 1958 (Herrera, 1979), en paralelo al crecimiento y al desplazamiento poblacional hacia las grandes ciudades. En esta misma década, la reducción de los homicidios estuvo acompañada de la consolidación institucional, política y democrática en Venezuela; así como del apaciguamiento de los conflictos armados, entre otros (Briceño, 2009; Salamanca, 1997). (Crespo, 2016: 97).

La segunda coincidencia, aparece en los años 70, cuando, el boom petrolero se tradujo en una bonanza económica nunca vista en el país, lo cual se tradujo en múltiples beneficios sociales para la población venezolana (Ortíz, 1986; Silva y Schliesser, 1998). Así mismo, se mantuvo un crecimiento sostenido de los homicidios, hurtos y lesiones personales, y robo, no sintiéndose diferencia alguna con los años 60. Esta variación en las tendencias del robo y el homicidio, más el crecimiento sostenido desde 1960 de las lesiones personales, son indicadores del proceso de instalación de la violencia como mecanismo de acción en la actividad delictiva. (Crespo, 2016).

DISCUSIÓN

Ahora bien, en la creación del entramado de los programas de prevención del delito participaron una cantidad de personas de variadas áreas del saber, donde planteaban que tenía que hacerse hincapié sobre un modelo particular, específico de la prevención del delito y a partir de acá se fuesen dando todos los procesos de revisión exhaustiva de las

debilidades y fortalezas que podían tener todos los proyectos existentes y se abrieran las pautas para la creación de otros, relacionados con la Seguridad Ciudadana, por supuesto incluye la temática de la prevención del delito.

Igualmente, con la incidencia de los medios de comunicación con noticias que van creando el miedo, la ansiedad y la paranoia en la población; permitió que la seguridad privada tomara un auge vertiginoso sobre la seguridad ciudadana.

Como vemos, estos altibajos en el diseño de las políticas de prevención y el aumento sostenido de las tasas de criminalidad, nos llevan a preguntarnos qué es lo prioritario en una agenda de políticas de prevención, la respuesta posible puede estar en un análisis comparativos ya que cada país tiene una estructura muy propia del fenómeno criminógeno que en el tiempo se ha ido trasladando y transformando maneras más acabadas y perfectibles del delito, lo que diría Merton en contraposición con Durkheim, la perspectiva de Durkheim constituye una teoría del control social, mientras que la de Merton representa el más claro ejemplo de teoría de la frustración con ciertos vestigios de control.

De igual manera, en una situación de anomia estos controles desaparecen y los individuos quedan liberados para seguir su tendencia natural al delito. Por ello, los teóricos del control social consideran que la situación de anomia, entendida como ausencia de sociedad, no presiona a los sujetos hacia la desviación, sino que los libera de los controles que les mantienen en la conformidad; y para los teóricos de la frustración sugieren que el nexo de unión entre teorías del control y teorías de la anomia se produce principalmente a nivel estructural. En este sentido, argumentan que una situación de anomia a nivel estructural presiona a los individuos hacia la desviación, siendo esta presión la responsable de ciertos comportamientos antisociales (Teijón, 2018: 4).

Después que revisamos estas grandes teorías de la anomia, vemos como el deterioro del tejido social se ve más afectado por las altas tasas de criminalidad llevando los proyectos de prevención en curso a una paralización transformando su objetivo central hacia intervenciones fuertes, en las áreas o sectores ya focalizados que presenta estos altos

debilidades y fortalezas que podían tener todos los proyectos existentes y se abrieran las pautas para la creación de otros, relacionados con la Seguridad Ciudadana, por supuesto incluye la temática de la prevención del delito.

Igualmente, con la incidencia de los medios de comunicación con noticias que van creando el miedo, la ansiedad y la paranoia en la población; permitió que la seguridad privada tomara un auge vertiginoso sobre la seguridad ciudadana.

Como vemos, estos altibajos en el diseño de las políticas de prevención y el aumento sostenido de las tasas de criminalidad, nos llevan a preguntarnos qué es lo prioritario en una agenda de políticas de prevención, la respuesta posible puede estar en un análisis comparativos ya que cada país tiene una estructura muy propia del fenómeno criminógeno que en el tiempo se ha ido trasladando y transformando maneras más acabadas y perfectibles del delito, lo que diría Merton en contraposición con Durkheim, la perspectiva de Durkheim constituye una teoría del control social, mientras que la de Merton representa el más claro ejemplo de teoría de la frustración con ciertos vestigios de control.

De igual manera, en una situación de anomia estos controles desaparecen y los individuos quedan liberados para seguir su tendencia natural al delito. Por ello, los teóricos del control social consideran que la situación de anomia, entendida como ausencia de sociedad, no presiona a los sujetos hacia la desviación, sino que los libera de los controles que les mantienen en la conformidad; y para los teóricos de la frustración sugieren que el nexo de unión entre teorías del control y teorías de la anomia se produce principalmente a nivel estructural. En este sentido, argumentan que una situación de anomia a nivel estructural presiona a los individuos hacia la desviación, siendo esta presión la responsable de ciertos comportamientos antisociales (Teijón, 2018: 4).

Después que revisamos estas grandes teorías de la anomia, vemos como el deterioro del tejido social se ve más afectado por las altas tasas de criminalidad llevando los proyectos de prevención en curso a una paralización transformando su objetivo central hacia intervenciones fuertes, en las áreas o sectores ya focalizados que presenta estos altos

Volviendo al mero arte armónico y estratégico de la planificación, observamos que los recursos que se han invertido para alcanzar altos niveles en la prevención y disminuir los índices delictivo, no permiten por ende, obtener una mejor calidad de vida dirigida al desarrollo humano y cultural; porque nos encontramos un crimen organizado que siempre está en permanente innovación de los procesos en el arte delinquir; llevándonos a pensar que prevenir el delito implica muchas variantes a tomar en cuenta, principalmente si partimos desde su medición deberíamos recurrir a los diseños observacionales y diseño experimentales, que están ahorita en boga, que principalmente se están llevando en el Observatorio Venezolano de Seguridad (OVS) y algunas instituciones particulares o privadas que se están dedicando a estos temas, pero antes tenemos que hacer que las políticas que se estén ejecutando sea más visibles, más entendibles y más digeribles; por las comunidades y el ciudadano a pies.

Otro elemento a resaltar, es que la batería de indicadores de eficiencia, eficacia y productividad, entre otros, no solamente debe tomar al sujeto criminal, sino, también ver cómo está el proceso educativo en estos sectores, la participación familiar (en función de su consolidación: principios y valores), la existencia de una cultura de paz; en especial los nuevos desarrollos urbanísticos (Gran Misión Vivienda) en su interacción a lo interno y con los moradores de vieja data en el sector; Toda esta descripción de nuevos indicadores, para proyectarlos hacia una creación más integral o integradora; y sus adaptaciones a la actualidad; y así recuperar y mejorar la calidad de vida, las instituciones educativas, los servicios en general (ya que se han realizado tantas protesta que generan conflictos).

De lo anterior surge, que debemos adentrarnos en un mundo de variables donde se hace necesario, entre otros, tomar en cuenta estos diseños observacionales y experimentales

CONCLUSIONES

Continuando en este viaje de las políticas de prevención, es fundamental hacer énfasis en los orígenes de la planificación de estas

políticas, los llamados Planes de la Nación que eran diseñados desde un alguien con su equipo, partiendo del punto de vista de la economía, las finanzas y la misma planificación; completamente aislado del hecho social y sus especificidades criminógenas; diferente en la actualidad, donde se está integrando la óptica de las comunidades con sus propuesta para el desarrollo de los Planes de la Patria.

La investigadora Angulo, trae a colación un caso comparativo que se hizo entre Canadá y Venezuela, en cual fue invitado el investigador Christopher Birkbeck, donde un grupo de especialistas se enfocaron simple y llanamente a la delincuencia común, dejando de un lado todo el sofisticado, entramado, variado e innovador mundo de otros personeros delictivos, como son los llamados, de Cuello Blanco, informáticos, corporativos y todas sus variantes que esta compañera a lo largo de su libro lo ha reflejado.

Un elemento importante qué habla la compañera Angulo, es la disposición abierta que ha tenido la Dirección Nacional de Prevención del Delito, en el cómo atacar la criminalidad, pero no ha contado abiertamente con el apoyo político y económico necesario.

Otro punto que tenemos que destacar, es la participación comunitaria, partimos del lema “prevenir es tarea de todos”, haciendo que la prevención del delito supere lo represivo del proceso y genere la participación sin prejuicios y sin manipulación; e invitando a las comunidades a enfocarse en la población juvenil que dejaron los estudio, edificando la triada Comunidad-Familia-Escuela, para lo cual los planes de acción estarían dirigidos al tema central de la convivencia solidaria o la cultura de paz, para recuperar los espacios y enaltecer la participación de todas y todos, conociendo de antemano o trabajando en su creación, me refiero a las políticas en prevención, vista holísticamente, evitando caer en el tratamiento y enfoque individual a través de soluciones parciales, como también, el de focalizar las acciones en sectores priorizados por tener un alto nivel de criminalidad, generando el desplazamiento de los victimarios a otros sectores donde buscarán el control del mismo y replicarán su historial criminal.

Hecha la observación anterior, es importante resaltar lo que Angulo plantea en su análisis, que las comunidades deben tener un rol protagónico lo cual da más eficacia y debe ser tomado como una concepción global junto a otros elementos que tenemos que señalar, que algunas veces afecta cualquier participación de la comunidad, qué tiene que ver con los aspectos de la alimentación, el crecimiento espiritual, personal y la libertad.

Como vemos estos espacios Siempre han sido de ideas y debates, de encuentros y desencuentros; pero si se lograron algunos avances que tenemos que destacar como lo plantea la criminóloga Lolita Aniyar (Angulo, 2011: 152) .

- a) Desburocratizar el control. La comunidad recupera el control de sus propios conflictos.
- b) Facilita y fortalece la organización y Solari solidaridad comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida, el cuidado del vecindario y la defensa de los Derechos Humanos.
- c) Parte de sus acciones se orientan al mejoramiento de los espacios públicos.
- d) Disminuye el miedo al delito.
- e) Facilita el conocimiento de los modos de producción delictiva de cada zona.
- f) Se basa más en la nociones de seguridad y vigilancia que en la acción policial.
- g) Son los ciudadanos los que colaboran con la, pero no son ellos mismos policías (ni lo parecen, vamos hablando aquí de inteligencia social).
- h) Desestimula las brutalidades policiales.
- i) Constata que la criminalidad suele ser intra-clase intra-racial y afecta predominantemente a los más pobres (a estaba victimizando señalando a los pobres como los máximos productores de conflictos y de los actos delictivos).
- j) Valoriza respuestas sociales e imaginativas.

Finalmente, nos encontramos en esta revisión, con el hecho, que debemos lograr deslastrar esa práctica del ensayo y error, inclinándonos más por el conocimiento de los especialistas y profesionales en el área de investigación de las políticas de prevención. Sin embargo, recordemos que cada gobierno de turno hacían su Plan de la Nación, no incluían claramente cuáles aspecto iban a tocar en cuanto a la prevención, llamemos para aquel momento, represión, y por lo tanto no se conocía con certeza que se alcanzaba en cada uno estos programas durante su ejecución el función de disminuir los niveles de criminalidad, porque en definitiva no hubo una disertación y evaluación de los resultados obtenidos.

Ahora miremos en el horizonte, en función de organizar una serie de investigaciones, ya sean desde el diseño observacional o experimental, qué nos permita resaltar la prevención, no del cómo detener los delitos, sino más bien, como su palabra lo indica, evitar daños colaterales a la víctima.

RECOMENDACIONES

Culminando el análisis, viendo lo que son los planes, los programas y los proyectos, en su estructura base y generativa de las políticas públicas; siendo estos últimos los que a la ejecución práctica, en cuanto a la materia de prevención con una identidad propia, enfocada en sus inicios desde las percepciones individuales qué trataban de entender o prevenir delitos, ante lo que planteaban los científicos sociales, de colectivizar tanto en su diseño como en su ejecución, a todos los actores y actrices involucrados, bajo una dinámica holística. Pero es importante valorar el esfuerzo realizado para la para la producción intelectual de las bases teóricas en la temática de prevenir el delito hacia la instauración de una Cultura preventiva, palabra que fuimos acompañando con Cultura de Paz y Movimiento por la Paz y la Vida.

Así mismo, a través de la conceptualización y el desarrollo de los aspectos metodológicos de cómo se hacía sustentable y ejecutoria; la Gran Misión a Toda Vida, lo que fue el Consejo General de la Policía aunado la creación de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces

distinguimos una serie de elementos y hechos fundamentales, que hacen que las políticas públicas en prevención del delito, han estado vinculadas a la retórica tendencia del control social, en yuxtaposición con las funciones de prevención que puedan y deben argumental las comunidades y la sociedad en pleno, como la participación activa y la corresponsabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Angulo, D (2012), “Cuatro Décadas dela Prevención del Delito en Venezuela”. Serie Crítica. Colección Aporte Comunes, UNES. Caracas.**
- **Briceño, H. (2009), “Participación electoral y cultura política en Venezuela: 1958-2007”, Cuadernos del Cendes, 72, Tercera Época.**
- **Crespo, F (2016), Hacia una explicación de la violencia delictiva en Venezuela. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol XXII, No. 2 (jul-dic)**
- **Herrera L., F. (1979), Los viajeros de indias, Monte Ávila Editores.**
- **Merton, Robert King (2011). Teoría y Estructuras Sociales. Fondo de Cultura Económica.**
- **Salamanca, L. (1997), Crisis de la modernización y crisis de la democracia en Venezuela, ILIDIS.**
- **Teijón, M. (2018) Anomia, frustración y delito: una propuesta de medición para la variable principal de las teorías clásicas de la frustración. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.**

LA DESCOMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EL DELINCUENTE QUE CASI TODOS LLEVAMOS DENTRO

Juan C. Hernández M.* / Carlos A. Pascual C.**
México



“Los hombres que creen en el bien y el mal, y que creen que el bien debe ganar, deben estar atentos a esos momentos en los que es posible jugar a ser Dios”
John Irving. 3

RESUMEN

Desde hace varias décadas se habla de que vivimos una “descomposición del tejido social”, pero al escucharlo, la mayoría de nosotros nos sentimos como integrantes del grupo que no participa en su descomposición, del grupo de los buenos, sin embargo, la realidad nos enseña que podemos estar equivocados, y que dentro de nosotros puede estar latente un ser antisocial, que ante la menor oportunidad se manifiesta, es el “ello” del que hablaba Freud. El objetivo de este breve ensayo es llamar la atención y la reflexión sobre este asunto, y buscar las respuestas a varias preguntas: ¿Quiénes participan en la descomposición del tejido social? ¿Podríamos ser parte de este grupo, o realmente somos buenos, éticos, morales y deontológicamente comportados? Utilizando la metodología de análisis cualitativo de noticias y documentos relacionados con el tema, se hace una breve recopilación de los aspectos más significativos y notorios del tema. Se concluye que, la afectación o descomposición social existe, a raíz de lo que se conoce como conductas

*Médico Cirujano Facultad de Medicina UAGro, Especialidad en Medicina Legal por la UNAM-DGSMDDF, Maestría en Derecho Penal, Doctorante Centro Universitario México. Maestro de Medicina Legal, Criminalística y Seminario de Tesis Facultad de Derecho Acapulco UAGro, Socio de AMELCIF (Asociación de Medicina Legal Mexicana y Ciencias Forenses A.C.) Orcid: 000-0002-0639-0770.

**Abogado. Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Maestro en Derecho Penal y Juicios Orales. Profesor de la Facultad de Derecho en el Centro Universitario México (Acapulco, Gro.); asociado a la firma legal “Linares & Asociados” y ex miembro del comité de medios en el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C., ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6797-9685>

1. Wikipedia. John Winslow Irving, es un novelista estadounidense, autor de numerosos bestsellers y guionista ganador de un Óscar en 1999 con la adaptación de una de sus novelas. Consultado en: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Irving

antisociales, tema estudiado por la medicina, el derecho y la criminología. Pero los antisociales podemos ser todas las personas que integramos esta sociedad. El paso del huracán Otis, reveló que muchas personas consideradas “gente buena”, en esos momentos de oportunismo, dejaron la ética a un lado y participaron en los saqueos, la rapiña y numerosos actos que, apenarían al más sobrio de esta sociedad.

Todos debemos poner nuestro grano de arena, ahora para revertir este proceso, y empezar a hablar de “recomposición del tejido social”, la familia y la escuela son las instituciones más apremiantes que deben participar, en este reto, fácil para decirlo, pero muy difícil para su realización.

Palabras clave: Descomposición, Tejido social, Conducta antisocial.

INTRODUCCIÓN

Desconozco el momento en que me perdí, pero la realidad es que no me di cuenta en qué momento se empezó a hablar de las personas, o de la sociedad como “tejido social”. Palabra que nos evoca la imagen de un tejido, de una tela, y tal vez fue por el símil con ese entramado de tejido, que es el entramado de tantas personas compartiendo un espacio geográfico, que por ello le llamaron “tejido social”. De igual manera, no tengo claro y preciso el momento en que se empezó a hablar de “descomposición” de este tejido social.

Ornelas y Tello ², refieren que la palabra tejido, alude a la idea de unidades independientes que se juntan para formar algo, ese algo sostiene, contiene y toma una nueva forma colectiva; es decir es lo que resulta de entrelazar. En cambio, el término social, hace referencia al conjunto de individuos que conforman una sociedad.

Para Falla y Chávez ³, el tejido social se entiende como un conjunto de interdependencias entre partes, elementos, procesos, donde se da una serie de relaciones internas e interdependientes que sirven de soporte emocional, cultural, físico, social y aún económico de sus interactuantes.

De acuerdo con el portal de Habitat para la humanidad México, A.C. ⁴, “el Tejido Social lo conforma un grupo de personas que se unen para satisfacer necesidades

² Ornelas Adriana y Tello Nelia, Reconstrucción del tejido social en el ámbito escolar; una propuesta desde trabajo social. Revista Búsqueda, Numero 17: 154-167; 2016. México.

³ Falla, U. Chávez Y. (2004) Realidades y falacias de la reconstrucción del tejido social en población desplazada. Colombia. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600210>

⁴ Habitat para la Humanidad México A.C., El Tejido Social. Consultado en: <https://www.habitatmexico.org/article/el-tejido-social>

humanas elementales o superiores, como son: alimento, salud, educación, seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos, transporte y todo lo que represente mejor calidad de vida.

Significa el tejido social es eso que tenemos en común quienes pertenecemos a una comunidad, es lo que nos une, lo que nos identifica, lo que nos hace ser lo que somos y sentirnos parte de una misma cultura, de una misma tradición. Es sinónimo de solidaridad, de protección, de respeto a los derechos y seguridad ante las adversidades. Es saber que podemos contar con nuestros vecinos en caso de una adversidad o saber que podemos compartir nuestra estabilidad ofreciendo un poco de lo que tenemos. Se refiere a las relaciones significativas que determina formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiares, comunitarios y laborales.

Hay dos tipos de tejido social:

- El tejido social familiar. Representado por el nexo que forman personas por parentescos sanguíneos o núcleo mutuo que se convive a diario, los integrantes de este tejido son los abuelos, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, primos y otros. Todos se necesitan entre sí para satisfacer necesidades y ayudarse.**
- El tejido comunitario. Que nace de la suma de diferentes núcleos familiares que conviven muy de cerca para formar una comunidad.**

EL TEJIDO SOCIAL Y SU DESCOMPOSICIÓN

Por todo lo que encierra el concepto Tejido Social, es preocupante que, en lugar de hablar de su fortalecimiento con el paso de los años, se habla, al contrario, de su deterioro, ya que, el comportamiento violento de las personas, contra otras personas, debilita las relaciones, y las personas prefieren callar, y o relacionarse con aquellos que sabe que se dedican a actividades ilícitas, y sin estos lazos fuertes a nivel social o familiar, difícilmente se puede lograr mantener o construir una sociedad solidaria, firme y que haga valer sus derechos y de los demás, porque es la misma sociedad atacando a la misma sociedad.

Podemos preguntarnos sin duda: ¿Desde cuándo se empezó a descomponer el tejido social? Muchos dirán que no hay que alarmarnos, que personas malas, o que hacen el mal a sus congéneres, siempre han existido. Y podríamos aceptar que eso es verdad. Pero también no debemos olvidar que hemos ido aprendiendo de nuestro pasado, de nuestra historia y con el paso de los siglos nos hemos vuelto más civilizados, hemos construido una sociedad con leyes, la justicia es un anhelo y realidad en muchos casos, aunque falta mucho por hacer, etc.

Pero sin duda que lo que estamos viviendo en los últimos veinte años tiene sus propios matices, porque se tiene la impresión de que no hay gobierno que pueda con estos problemas de inseguridad, que los maleantes han sometido a las autoridades y que ahora el país con todas sus estructuras e instituciones avanzan al ritmo que le marcan los integrantes de la delincuencia organizada. Algunas personas han optado por aliarse si no activamente, si una especie de alianza pasiva con los que realizan actividades delictivas, como una estrategia para no ser afectados al considerarlos, sino aliados, por lo menos neutrales y permisivos de las conductas delictivas que afectan a otros. Y a la mayoría de los ciudadanos, no les queda más que el sometimiento y la espera, la esperanza de que algún día las cosas cambien.

Zárate Ruíz ⁵, menciona que desde hace varios años, varias leyes y programas sociales afirman en sus textos la existencia de una relación entre la violencia y el tejido social en al menos estas tres formas:

- 1. Se dice que la violencia destruye el tejido social, es decir, que debilita los vínculos sociales.**
- 2. También se dice que recuperar o fortalecer el tejido social es un remedio contra la violencia.**
- 3. Sin embargo, se reconoce además que hay formas de tejido social nocivas, es más, que generan violencia, por lo cual las políticas de desarrollo social deben prevenirlas o corregirlas.**

5 Zárate Ruíz Arturo, Los tejidos sociales y la prevención de la delincuencia en México, Universidad de Ciencias de la Seguridad, Consultado en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpglclefndmkaj/https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2022/12/5-LOS-TEJIDOS-SOCIALES.pdf>

Menciona además que, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, decía que la violencia y la delincuencia fragmentan el tejido social por la inseguridad y desconfianza que generan. Que la violencia de los últimos años, yo diría que, de los últimos 20 años, ha deteriorado el tejido social a tal punto que, la violencia se ha convertido en una forma de relacionarse y resolver problemas.

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, del Presidente López Obrador, propone, porque aún está vigente, un cambio en la estrategia de seguridad, es lo que comúnmente conocemos como “Estrategia de Abrazos, no balazos”, porque las acciones de fuerza militar y policial y el llamado populismo penal, causaron un grave daño al tejido social, pues la violencia engendra más violencia, por lo cual se cambiaron las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral. Todos sabemos a estas alturas, a un año de concluir la vigencia de este plan, que no funcionó, que fue un fracaso y que vamos a terminar peor que antes de iniciar su aplicación, sólo veamos los resultados: estamos peor que antes, de acuerdo con la percepción ciudadana y las estadísticas serias y confiables relacionadas con las violencias.

ALGUNOS EJEMPLOS DE LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

Son variadas y diversas las manifestaciones que podríamos catalogar como sintomáticas de la descomposición social, las siguientes no pretendes agotar los ejemplos compartidos en su momento por los medios de comunicación, pero sirven para darnos una idea de la magnitud, profundidad y gravedad de eso que ahora llamamos descomposición social. Veremos que los actores no siempre son personas que podemos etiquetar como violentos o delincuentes, sino de las más variadas características.

- A nivel internacional, la absurda y dispareja guerra de Rusia contra Ucrania, que a la fecha ha costado la vida de cientos de personas civiles y entre ellos niños totalmente e inocentes y el desplazamiento de miles de ciudadanos a los países vecinos y lejanos.**

- Internacional también, la invasión armada del grupo Hamas, palestinos de la Franja de Gaza, que causaron en un ataque relámpago por cielo, mar y tierra, la parte sur de Israel, y que se tradujo en el asesinato de cientos de personas civiles no armados, niños, personas adultas mayores, y jóvenes que participaban en un concierto precisamente por la paz.
- En México, son miles de personas las que integran el censo de personas desaparecidas, las cuales fueron “levantadas” por personas armadas desconocidas, pero en muchos otros casos, por servidores públicos uniformados, cuya tarea y para lo que se le paga un salario, es precisamente para lo contrario, para proteger la vida y la integridad de las personas.
- En México también la necesidad de las autoridades federales y su resistencia para aceptar la realidad de la situación y los datos derivados de ella, argumentando siempre la existencia de otros datos ante el problema que se le plantee. Por ejemplo, no aceptar las cifras exactas de personas desaparecidas, e incluso utilizar el poder y las influencias para realizar nuevos censos para disminuir las cifras reales, aumentando con ello la cifra negra de la criminalidad.
- La intención malsana de las autoridades de alto nivel, sobre todo a nivel federal, de usar otras palabras para dirigirse a un mismo fenómeno y de esa manera engañar aparentemente a la sociedad; por ejemplo, en lugar de ligar el aborto con el asesinato del producto de un embarazo, se le llama: derecho de la persona a elegir, derechos sexuales o derechos reproductivos; Personas no encontradas, en lugar de personas desaparecidas.
- La negligencia, poca atención, el nulo o poco apoyo que las autoridades brindan a las personas que acuden a denunciar la desaparición de sus familiares a manos de hombres armados o vestidos de policías, que ha dado pie a que surjas los colectivos de búsqueda que poco a poco van teniendo éxitos en sus búsquedas, pidiendo para ello incluso, permiso a los integrantes del crimen organizado que dominan en esas regiones donde ellas buscan orientadas muchas veces por llamadas anónimas.

- La acción de la delincuencia organizada que ha sumergido a nuestro país, y particularmente a nuestro Estado de Guerrero y en especial a Acapulco, en una dinámica de violencia, caracterizada por prácticamente asesinatos diarios, descuartizamiento de cuerpos humanos, masculinos y femeninos, mensajes dirigidos a los grupos enemigos, a las autoridades o a la sociedad misma.
- Los crímenes y agresiones contra actores políticos de nuestro país, desde el más conocido y famoso: el caso Colosio, hasta los últimos asesinatos ocurridos durante las campañas intermedias del 2021, siendo las víctimas no solo hombres, sino también las mujeres que participaban como candidatas en ese proceso electoral.
- La actitud y comportamiento de las estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que, en lugar de utilizar el tiempo y las instalaciones educativas para formarse como docentes de calidad, se caracterizan por salir a diversas ciudades a cometer actos vandálicos, presentándose encapuchados, armados con palos, martillos, bombas molotov e incluso armas de fuego, y secuestran, saquean y queman vehículos de transporte público y de empresas de diversos ramos comerciales, ante la nula reacción de las autoridades.
- Del otro lado de la moneda, la agresión, detención, muerte y desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre del año 2014, en la ciudad de Iguala Guerrero, ante el dolor, desesperanza e impotencia de los padres de familia que, por siete años, no han cesado en su búsqueda y exigencia de justicia a las autoridades correspondientes. Hasta el momento no se cuenta con una verdad que deje satisfechos a los afectados y a la sociedad. Anabel ⁶ le llama: “Una podredumbre que nos haría daño a todos, y que retrataba una nueva fase de descomposición en México.
- Las agresiones entre estudiantes de educación secundaria, hombres y mujeres, en varios estados de la República que, en algunos casos han terminado en la muerte de una de las jóvenes, que han resultado politraumatizadas. A eso que también llamamos “Bullying”, que ahora

⁶ Zárate Ruíz Arturo, Los tejidos sociales y la prevención de la delincuencia en México, Universidad de Ciencias de la Seguridad, Consultado en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2022/12/5-LOS-TEJIDOS-SOCIALES.pdf>

ha llegado a niveles de originar no solo el malestar, el terror y los problemas psicológicos del que lo sufre, sino a la muerte de varios jóvenes.

- **Linchamientos de delincuentes por parte de los habitantes de algunos poblados, al ser detenidos in fraganti, principalmente en algunos estados del centro de la República Mexicana.**
- **El comportamiento de algunos familiares de los adultos mayores que, aprovechándose de su edad y estado mental, se quedan con esos recursos que son asignados como parte de un Programa Social, para ayuda de los gastos de las personas mayores.**
- **Las aparentes discrepancias periciales como en el caso de Ariadna, encontrada en la Ciudad de Cuernavaca en noviembre del 2022, utilizadas como motivo político para denostar y encarcelar a funcionarios públicos etiquetados como enemigos políticos de los que ostentan el poder.**
- **Los múltiples delitos mostrados en diversas colonias de las ciudades, gracias al uso de las cámaras de vigilancia social, que muestran claramente el comportamiento delictivo de personas al realizar robos en casa habitación, robos armados con violencia hacia los habitantes de esas casas, robos de personas que van armadas, y que generalmente usan motocicletas y cascos, para no ser identificados, hacia los peatones solitarios, principalmente mujeres.**
- **Las marchas y manifestaciones de los grupos de diversos activistas, generalmente en busca de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos, como sucede como las marchas feministas, los colectivos de las comunidades LGBTQ+, y otras más, generalmente terminan en actos violentos contra las personas, las autoridades y con gran índice de destrucción de fachadas de casas y negocios que ninguna relación tienen con su protesta.**
- **El asesinato de personas homosexuales, lesbianas y transexuales, los cuales van al alza en nuestro país, destacando entre ellos la muerte del personaje llamado “Le Magistrate”, que sigue siendo investigado hasta el momento, a quien precisamente, cuando vivía, se le criticaban el faltar al respeto a la investidura y a la institución de justicia electoral al que pertenecía, al salir con ropa, accesorios y**

aditamentos de mujer, siendo hombre.

- **El aumento de los casos de femicidio en nuestro país, principalmente por parte de los familiares cercanos, dentro de los que destacan sus parejas sentimentales. Crímenes que muchas veces se realiza en presencia de los hijos de la pareja, o acompañado del asesinato de las madres, las hermanas o los hijos de las víctimas**
- **Las constantes balaceras entre lo que los medios de comunicación llaman “grupo de civiles armados” y las autoridades, principalmente integrantes de la policía, de la guardia nacional y del ejército. Hechos ocurridos en Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Colima, Cuernavaca, etc.**
- **Las agresiones policiacas contra civiles, hechos compartidos por las cámaras de vigilancia, y que se han catalogado como prepotencia y abuso policial.**
- **Las agresiones contra los animales como el caso del hombre que aventó a un perro que encontró a su paso, a un cazo de aceite hirviendo, los hombres que han sido grabados golpeando, arrojando ácido y mutilando a las mascotas principalmente, y a otros animales llamados exóticos que son dejados abandonados por sus dueños, sin agua, ni alimentos, ni medios para protegerse y sobrevivir.**
- **Los insultos que se dicen y vociferan los diputados y senadores que supuestamente nos representan al pueblo, en sus reuniones o plenos, los cuales, en lugar de estar plagados de propuestas en bien de la sociedad, sirven como escenario para escarnecer a sus adversarios y enemigos políticos. No son pocas las ocasiones que sus alegatos terminan en violencia psicológica y física.**
- **El martes 21 de noviembre de 2023, los medios de comunicación en México, informaban de las quemaduras de segundo y tercer grado, que sufrió en sus piernas, el joven Christian Carranza Camacho, de 18 años de edad, porque un grupo de compañeros de clases de mecánica, le vaciaron gasolina y le prendieron fuego. Las noticias dieron mucha información sobre el caso, pero poco hablaron de los causantes de las quemaduras; y qué decir del personal docente y administrativo de la Escuela de Mecánica de Diésel y Gasolina donde ocurrieron los hechos.**

- De ese mismo caso se desprende la negligencia de los servicios médicos primero en un hospital de Texcoco, por vencimiento del seguro médico estudiantil, a los que primero acudieron los padres del joven quemado, posteriormente el rechazo y los altos costos de atención médica, en el Hospital de las Américas, argumentando que no tenían cupo para recibir a este joven; lo que obligó a los padres a atravesar prácticamente la Ciudad de México, para finalmente internar a su hijo en el Hospital Rubén Leñero, dónde fue aceptado.
- Las múltiples denuncias de los estudiantes universitarios hacia sus docentes en relación a casos de acoso, principalmente contra las mujeres, lo que ha originado que los propios jóvenes tomen las instalaciones educativas exigiendo se les escuche y les cumplan sus pliegos petitorios ante las autoridades universitarias.
- El problema del huachicol en algunos estados del centro del país, las alegorías al crimen y al narcotráfico que se plasman en múltiples corridos que se cantan y bailan por la mayoría de jóvenes de la república.
- A nivel nacional e internacional, el problema de los migrantes, y sus múltiples facetas: los motivos de la migración en sus propios países, gobiernos dictadores, inseguridad, crimen organizado, problemas socioeconómicos, etc. Las reacciones de las personas de los países por los que cruzan, rechazo, discriminación, los delitos a los que se exponen: explotación sexual, lesiones, secuestros, asesinatos, desapariciones, sometidos a asfixia y deshidratación en las cajas de tráileres en los que son metidos con la promesa de llevarlos a su destino en forma clandestina y criminal, y extorsiones a sus familiares. Las reacciones de los gobiernos a los que pretenden llegar, teñidas de odio, racismo y discriminación, separando familias completas y humillando a toda persona que pretenda ingresar a su territorio, olvidándose que somos hermanos.
- A nivel internacional también, el secuestro de un barco y sus tripulantes que navegaban por el Mar Rojo, por terroristas afines a un país y a un grupo palestino, como venganza contra Israel por los

ataques contra Hamas en la Franja de Gaza.

- **Personas que participan en la rapiña no solo en Acapulco, sino en las carreteras cuando un transporte de carga tiene la mala fortuna de sufrir un accidente. Todos hemos visto las imágenes de personas de buena voluntad acarreando llantas, cartones de cervezas, madera, etc. Todo lo que lleve el tráiler siniestrado.**
- **• Artistas muy queridas y conocidas en el mundo, que utilizando su prestigio realizan actos de fraude con el no pago de impuestos correspondientes por sus ganancias obtenidas, eso que llamamos “problemas con el fisco”, y eso incluye a la artista, a sus contadores y representantes artísticos.**
- **• Etc.**

LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL MOSTRADA DURANTE EL PASO DEL HURACÁN OTIS

La noche del 24 al 25 de octubre del 2023, las ciudades de Acapulco y Coyuca fueron azotadas por un devastador huracán de categoría 5, el cual desde el principio fue bautizado como Otis. Su paso destruyó prácticamente al 100% de la infraestructura hotelera, comercial y las casas de los habitantes. Todos sabemos o hemos escuchado en los medios de comunicación, los niveles de saqueo que sufrieron las tiendas de todo tipo, principalmente en la ciudad de Acapulco, evento al que coloquialmente se le conoce como “rapiña”.

El paso del huracán Otis, nos dio la oportunidad de revelar otro aspecto de la Descomposición Social que realmente tenemos, porque la mayoría pensamos que la descomposición social la generan personas “malas”, y precisamente aludiendo al slogan radiofónico del gobierno federal de que “los buenos somos más”, Otis nos enseñó, que tal vez no sea tan cierto, sino que “la mayoría, tenemos apariencia de buenos”, pero en el momento de la verdad, sacamos al delincuente que todos traemos dentro.

El comportamiento humano que se observó en las horas posteriores a la destrucción de la ciudad, nos permitió ver que vivimos rodeados de personas que “aparentar ser buenas”, pero en el momento de la oportunidad muestran su conducta antisocial.

Los actores responsables de los saqueos, en aquel “río revuelto, ganancia de pescadores”, no siempre fueron personas que podemos etiquetar como violentas o delincuentes, sino de las más variadas características, desde funcionarios públicos, médicos, maestros, licenciados, arquitectos, incluso las mismas autoridades militares. Incluso se habla de familias enteras que acudían para poder acaparar más productos, más enseres, más de todo. y sin duda que surge la reflexión ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos?, ¿Dónde quedaron los valores y las buenas costumbres de las familias?

Claro que hay excepciones, para unos pocos, siguió siendo válido la enseñanza de nuestros antepasados de que somos “pobres pero honrados”, y de que “si ese objeto no es tuyo, es que tiene dueño”. Aquí les mostramos algunos de las situaciones que se vivieron desde las primeras horas del paso del huracán Otis, y también sirven para darnos una idea de la magnitud, profundidad y gravedad de eso que ahora llamamos descomposición social.

- A los pocos minutos del paso del huracán, al notar la terrible destrucción de edificios y negocios, los elementos del crimen organizado, se hicieron presente para dirigir y coordinar los saqueos de las grandes tiendas departamentales de la ciudad y a los bancos.**
- Al correrse la voz de los saqueos, no solo participaron habitantes de Acapulco, sino que hay testimonios de que, de los municipios vecinos de la Costa Grande y Costa Chica, se hicieron presentes cientos de personas con sus camionetas, para participar en los saqueos de tiendas.**
- El saqueo de productos alimentarios y de agua, podría en un momento dado justificarse, pensando en los estragos causados por el fenómeno meteorológico, pero el saqueo por varios días, llegó a niveles extremos: El robo de artículos y productos que nada tienen que ver con la supervivencia alimentaria por la contingencia: artículos de ferretería, alcohol, cervezas, motocicletas, pantallas planas, refrigeradores, aires acondicionados, blancos, incluso se llevaron los carritos de las tiendas departamentales.**

- Pero no solo los integrantes de la delincuencia organizada participaron, los propios ciudadanos que podríamos llamar “gente bien”, educada, estudiada, con un trabajo formal, con un salario, no dudaron un minuto para sumarse al saqueo del que fueron objeto los integrantes de la cámara de Comercio del Puerto.
- Se ha mencionado que, en los primeros días posterior a los destrozos causados por Otis, llegaron personas a Urgencias de los pocos hospitales que funcionaban a medias, lesionadas por instrumentos punzocortantes, lesiones causadas en la lucha por poseer una botella de agua.
- Hay comentarios de que, en plena oscuridad, las personas se metieron a las bodegas y que varios paquetes grandes, con enseres de línea blanca, cayeron sobre algunas personas adultas mayores, fueron traumatizadas y ahí las dejaron inconscientes o tal vez muertas, nadie les prestó auxilio, su preocupación era apropiarse de los objetos.
- Comentan que algunas personas para que otros no pudieran pasar y les quitaran sus objetos apartados, vaciaban detergente o champú, para que al pasar se resbalaran y no se animaran a tocar lo que ya habían seleccionados para ellos.
- Fuera de los establecimientos, había grandes acumulaciones de enseres de todo tipo, mientras buscaban un vehículo, principalmente una camioneta para llevarse los objetos a sus casas. Algunos ofrecían hasta tres mil pesos por que los llevaran, los dueños de las camionetas ofrecían llevarlos si les compartían la mitad de lo que tenían acumulado, había ofensas, agravios de todo tipo, la barbarie humana en su máximo esplendor.
- Se comenta también del saqueo a las gasolineras, exponiéndose a un accidente explosivo al manipular desde sus depósitos la extracción del hidrocarburo.
- Se comenta que algunas tiendas de conveniencia, ante la falta de electricidad, optaron por regalar a las personas los productos perecederos, pero éstas abusaron y arrasaron con todos, destruyendo incluso los anaqueles donde estaban los productos.
- Algunos comentan que vieron a personas sacar incluso las maquilas para preparar café que tienen algunas tiendas Oxxo. En suma, todo lo

que se podía robar, se lo robaban, aunque no tuvieran claro en ese momento para qué les serviría.

- Comentan que algunos puntos de la ciudad, los coordinadores de los saqueos eran los propios miembros de la delincuencia organizada, quienes daban los permisos para entrar a saquear y les especificaban los productos que sí podían sacar y cuales tenían prohibido llevarse, so pena de ser castigados.
- Muchos de esos productos, posteriormente eran ofrecidos o vendidos a otras personas, o los intercambiaban principalmente por alimentos. Aquí vemos otra faceta de la descomposición social, el comprar un producto robado.
- Posteriormente, en los días posteriores, vimos el descaro de las mismas personas que participaron en los actos de rapiña de las tiendas departamentales, al acudir a formarse una y otra vez, o distribuyendo a todos sus hijos, sobrinos, etc. Cuanto familiar pudieron localizar, cuando se estaban distribuyendo los víveres por parte de miembros del ejército, como parte de la mala coordinación que existió al atender la emergencia.

Después de estas listas, mediana, no exhaustiva, vemos que los actores de las conductas que indican tejido social descompuesto, son de las más variadas categorías. Hay desde personas estudiadas, e incluso con grados llamados de posgrados, hasta personas que podemos pensar que no pisaron las aulas académicas. Hay hombres y mujeres, y para los que les guste hablar de género, hay de los más comunes géneros, tanto en el grupo de las víctimas, como en el grupo de los victimarios.

Por tal motivo puede ser oportuno y adecuado, considerar la pregunta si sólo son ellos los malos y nosotros los buenos; o sería más apropiado decir que nosotros mismos que hablamos, señalamos y criticamos la descomposición social, haríamos tal vez lo mismo que ellos hacen, si tuviéramos la oportunidad ante nuestros ojos. Aquello que Cesar Lombroso llamaba “El delincuente ocasional”.

Hasta qué punto nuestros valores sociales, éticos y morales tienen cimentada nuestra personalidad, nuestras ideas y nuestro actuar. ¿Podríamos decir que ese delincuente que todos llevamos dentro, solo lo

llevan ellos? ¿Nosotros, estamos exentos?, ¿Realmente somos tan buenos en todos nuestros actos?

LA CONDUCTA ANTISOCIAL Y CRIMINOGENESIS

Desde un punto de vista general, la conducta antisocial empieza como un trastorno de la personalidad en la infancia o adolescencia. Estas personas cometen actos imprudentes, de explotación de otros, engañosos e ilegales para beneficio o placer personal, sin remordimiento.

Incluso en el campo médico se habla de este trastorno de conducta llamado “Trastorno antisocial de la Conducta”, la cual es definida en el DSM⁷ V⁸, de la siguiente manera: El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón general de desprecio por las consecuencias y los derechos de los demás. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. El tratamiento puede incluir terapia cognitiva-conductual, fármacos antipsicóticos y antidepresivos.

Estas personas justifican o racionalizan su comportamiento, por ejemplo, piensan que los demás son perdedores, que ellos son diferentes y los mejores en todos los campos.

Generalmente culpan a las víctimas por ser tontas o indefensas, y son indiferentes a los efectos nocivos de explotación de sus acciones sobre los demás.

En los Estados Unidos -y puede ser en todos los países-, la tasa de prevalencia estimada es de 0.2 a 3.3%, es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres con una proporción de 6:1, hay un fuerte componente hereditario. La mayoría de los pacientes también tienen un trastorno por uso de sustancias adictivas, y otro tipo de trastornos como en el control de los impulsos, trastornos límites de la personalidad, y de niños presentan trastorno de hiperactividad y déficit de atención. La prevalencia va disminuyendo con la edad, lo que sugiere que estas personas pueden aprender con el tiempo, a controlar y cambiar su mal

7 DSM son las siglas de Disease Statistic Manual, que en español significa Manual Estadístico de Enfermedades. Es publicada por la Sociedad Americana de Psiquiatras, se actualiza cada 10 años aproximadamente y actualmente está vigente su versión V o VI.

8 Zimermann Mark, Manual MSD, Versión para profesionales, Trastorno de la Personalidad antisocial. Septiembre del 2022, Consultado en: <https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastornos-de-la-personalidad/trastorno-de-la-personalidad-antisocial-tpa>

comportamiento.

Otro tipo de factores ambientales que influyen al desarrollo del trastorno antisocial de la personalidad son el abuso que sufra el niño durante la infancia. Son indiferentes al dolor de los demás desde la infancia, lo que se incrementa durante la adolescencia. Si un niño presenta déficit de atención e hiperactividad, acompañado de trastorno de conducta antes de los diez años de edad, se incrementa el riesgo de desarrollar un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. Si los padres abusan o descuidan al niño, o son inconsistentes con la disciplina o el estilo de crianza, la evolución a una personalidad antisocial puede aumentarse.

Los pacientes con trastorno antisocial de la personalidad pueden expresar su desprecio por los demás y por la ley mediante la destrucción de la propiedad, el acoso a otros o el robo. Pueden engañar, explotar, estafar o manipular a la gente para conseguir lo que quieren (p. ej., dinero, poder, sexo). Pueden utilizar un alias. Son impulsivos, no planifican por adelantado y no consideran las consecuencias para la seguridad de sí mismos o de otros. Como resultado, pueden cambiar de repente puestos de trabajo, hogares, o relaciones. Pueden acelerar al conducir y manejar el automóvil en estado de ebriedad, lo que a veces conduce a accidentes. Pueden consumir cantidades excesivas de alcohol o tomar drogas ilegales que pueden tener efectos nocivos.

Son irresponsables en términos sociales y económicos. Pueden cambiar de trabajo sin un plan para conseguir otro. Podrían no buscar empleo cuando se presenten las oportunidades. Pueden no pagar sus cuentas, las cuotas de sus préstamos o la manutención de sus hijos. Son a menudo provocados con facilidad y físicamente agresivos; pueden empezar peleas o abusar de su cónyuge o pareja. En las relaciones sexuales, pueden ser irresponsable y explotar a su pareja y ser incapaces de permanecer monógamos.

No se arrepiente de sus acciones, pueden racionalizar sus acciones culpando a los que les hacen daño (p. ej., se lo merecían) o a la forma de vida (p. ej., injusticia). Están decididos a no ser avasallados y hacen lo

que consideran que es mejor para ellos a cualquier precio, carecen de empatía por los demás y pueden ser despectivos o indiferentes a los sentimientos, derechos, y sufrimiento de las otras personas, tienden a tener una alta opinión de sí mismos y pueden ser muy obstinados, seguros de sí mismos, o arrogantes. Pueden ser encantadores, volubles y hábiles verbalmente en sus esfuerzos para conseguir lo que quieren.

Parece una descripción exacta, una biografía de muchos de los personajes que hemos visto que las autoridades han logrado detener, pero que lamentablemente por el mal sistema de justicia penal que tenemos, vuelven a salir de las cárceles, y a realizar las mismas actitudes antisociales y delictivas, por eso escuchamos que muchos tienen varios reingresos a los reclusorios, de donde han logrado salir bajo el argumento de “fallas al debido proceso”, situación que la sociedad llama “la puerta giratoria”, porque los delincuentes entran por una puerta y al poco tiempo salen por la otra. Aunque también se habla de deshonestidades y conductas corruptas de los jueces y magistrados encargados de la justicia en este país.

En concordancia con lo anterior, en México, precisa Bolaños ⁹ que las conductas antisociales inician a temprana edad, debido a la existencia de grupos organizados que reclutan y adiestran a niños y adolescentes entre 14 y 17 años de edad, que generalmente viven en pobreza y con familias disfuncionales, sumidos en la miseria, sin dirección ni sentido de la vida, que deambulan en las calles, donde desarrollan una subcultura de subsistencia y adaptación al cambio, dispuestas a conseguir dinero realizando actividades delictivas violentas, el conseguir dinero y llevar a la familia les hace sentir realizados, esto más el sentido de pertenencia y reforzamiento de la identidad y el contar con una ocupación, los hace sentir productivos a través de actividades como el sicariato o el narcomenudeo.

La actividad delictiva se ve como de alta rentabilidad, dentro de la población actual, así hablemos de narcomenudeo de drogas, trata de personas, turismo sexual, tráfico de armas, operaciones con recursos de

⁹ Bolaños Arévalo, C. A. (2016). El sicariato. Producto de la descomposición social. Recuperado de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8231/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER-MD-121.pdf>

procedencia ilícita, corrupción, extorsión, robos, asaltos, lo cual impacta no solo a la sociedad, sino a la economía del país.

Para Gómez Sánchez ¹⁰, la criminalidad es un fenómeno complejo y a gran escala por las actividades ilícitas que tiene efectos contrarios a la seguridad, estas manifestaciones atraen consecuencias en el desarrollo y la estabilidad social. La descomposición social generada por la presión social, pobreza y exclusión social desarrollan cargas psicológicas y una racionalidad limitada, mismas que propician el inicio de carreras delictivas o fuentes de oportunidades ilícitas como único modelo para subsistir en un entorno poco favorable en personas de baja resiliencia. Por ello no proyectan las consecuencias de sus conductas y surge más Criminogénesis.

Para Engelmann y Colaboradores ¹¹, las conductas antisociales muestran creencias y comportamientos que son consistentes con el supuesto de que la mayoría de los delincuentes piensan que los demás son tan antisociales como ellos mismos, por lo que, la inestabilidad social actúa como un reforzador de conducta antisocial.

De acuerdo con Torres y Rojas ¹², la causa fundamental de las conductas antisociales en México, es la pobreza de las personas. Y la pobreza que vivimos se debe a la aplicación del modelo de economía abierta, llamado “neoliberal”, pero los resultados no fueron los esperados, sino que se provocó un mayor desequilibrio en el crecimiento y en la distribución interna de la riqueza, con esto se rezagaron los indicadores del bienestar social, se incrementó la desigualdad y la pobreza. Con ello se deterioraron las condiciones de vida y seguridad, dejando a miles de ciudadanos mexicanos en situación de vulnerabilidad, de donde surge que muchos de ellos, toman por opción el cometer actos ilícitos para subsistir ante la falta de oportunidades.

10 Gómez Sánchez Edwin Javier, Descomposición social como génesis de la conducta antisocial, Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, año 8, Vol. 15, agosto - diciembre 2020, México, p.3.

11 Engelmann, J. B., Schmid, B., De Dreu, C. K., Chumbley, J., y Fehr, E. (2019). On the psychology and economics of antisocial personality. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(26), 12781-12786.

12 Torres, F., y Rojas, A. (2015). Política económica y política social en México: desequilibrio y saldos. Problemas del desarrollo, 46(182), 41-66. Recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/51274>

Desde un punto de vista psicosocial, se puede decir que las personas vulnerables, desarrollan percepciones transgresoras como mecanismos de desplazamiento de frustraciones hacia otras personas receptores de las mismas. Se percibe una indiferencia social ante todo lo que le acontece a la propia sociedad. Esta crisis ha traído como consecuencia, fenómenos bien conocidos como: la violencia, la drogadicción, la inhibición de valores, la corrupción, el desempleo, la delincuencia, la impunidad. Esta indiferencia social es producto de la repetición de tales conductas, lo que algunos llaman “normalización”, adicionada de permisividad de las autoridades, y la disfunción de la familia y las instituciones . 13

Hace algunas décadas, Sutherland y colaboradores 14 planteaban una teoría llamada “Asociación diferencial”, que explica que la delincuencia es consecuencia de un proceso de aprendizaje, a través de asociaciones que surgen en una sociedad plural y conflictiva, y eso es lo que ocurre en México, donde los patrones de las conductas delictivas son cada vez más frecuentes, normalizadas, permitidas, aprendidas, replicadas y hasta se hace apología de dichos delitos. De donde surge que las nuevas generaciones busquen imitar a estas personas consideradas muchas veces como modelos a seguir, o en un lenguaje más moderno: “influencers”.

Son muchos los investigadores que postulan que las actividades delictivas son patrones de conducta aprendidas, aplicadas y replicadas para obtener algún beneficio que se traduce como un modo de vivir; mientras que, por otro lado, la población mexicana existe la tendencia latente de colaborar con la delincuencia común y organizada, ya sea por no tener problemas, o porque obtienen algún tipo de beneficio, como el sentirse protegidos a cambio de ello.

13 Gómez Sánchez Edwin Op. Cit. No. 4.

14 Sutherland, E. H., Cressey, D. R., y Luckenbill, D. (1995). The theory of differential association. Deviance: A symbolic interactionist approach, 64-68.

También para Huertas Díaz ¹⁵, la desigualdad social es una causa importante en los fenómenos de criminalidad, porque las personas viven en desigualdad de oportunidades, eso hace que justifiquen su conducta, su actuar criminal por las condiciones de vida que enfrentan, adicional a esto, generalmente existe disfunción familiar y estructural, déficit de necesidades básicas como un motivante, por lo que al no tener un acceso a una vida lícita para sus aspiraciones económicas, se refuerza la decisión de delinquir. La sociedad responde ante este proceso con indiferencia, no se ve una reacción ética y moral, o por lo menos tomar una postura aceptable o nula ante las conductas ilícitas, lo que hace que el delito se perciba como algo permisible.

Para Gómez Sánchez ¹⁶, las conductas antisociales son manifestaciones de las necesidades socioeconómicas de la población, otras veces por el poder e incluso por el sentido de pertenencia a grupos de iguales, cuya acción va dirigida, motivada y reiterada a adquirir beneficios materiales, por actividad ilícita, etc., pero que se puede llegar a convertir en un modus vivendi para el sustento económico de la familia y la vivienda.

De acuerdo con Ramírez de Garay ¹⁷, el desempleo es una de las manifestaciones de la desigualdad y discriminación de oportunidades. El estudio del desempleo y sus efectos en la aparición de conductas desviadas y criminales ha sido mencionado por la criminología como un argumento central de la recesión de las sociedades capitalistas. Al existir desempleo, grandes sectores de la sociedad optan por realizar actividades delictivas como un modelo de oportunidad ilícita para adquirir beneficios económicos para mejorar sus condiciones de vida.

Wortley ¹⁸ plantea que, hay por lo menos cuatro maneras en que una situación determinada puede precipitar en la comisión de conductas antisociales, y que principalmente una favorece la Criminogénesis por la descomposición de la familia y las instituciones:

¹⁶ Gómez Sánchez, Op. Cit. No, 4.

¹⁷ Ramírez de Garay, L.D. (2014). Crimen y economía: una revisión crítica de las explicaciones económicas del crimen. Argumentos, 27(74), 261-290. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0187-57952014000100010&lng=es&nrm=iso

¹⁸ Wortley, R. (2008). Situational precipitators of crime. En R. Wortley & L. Mazerolle (Eds.). Environmental criminology and crime analysis (pp. 48-69). Cullompton, Devon: Willan.

- 1) Las provocaciones.
- 2) Las presiones sociales.
- 3) Desinhibiciones que hacen que el delito se perciba como permisible.
- 4) Una alta activación emocional, que es la que provoca una reacción antisocial. Enfatiza que es la presión social sobre personas que tienen baja resiliencia e inestabilidad socioeconómica, lo que llega a ser un motivante para replicar patrones delictivos.

Gómez Sánchez ¹⁹ también menciona que la conducta antisocial tiene precisamente su origen o punto de partida en la Criminogénesis, es decir en el conjunto de factores y causas que dan por resultado la conducta antisocial, lo que favorece la aparición de diferentes trayectorias criminales, que son motivadas y aprendidas por las actitudes, costumbres y/o situaciones que acontecieron durante la vida de una persona.

LA RECOMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

Queda claro que tenemos un tejido social descompuesto, y que, por los resultados vistos con el paso de los años, la tendencia es que se incremente su descomposición, ¿Qué podemos hacer para ser y comportarnos como mejores personas en la vida diaria?

La Escuela.

Paterson y colaboradores ²⁰ postulan que el fenómeno delictual puede producirse en diversos contextos y es generado por diversos factores como la falta de educación, pobreza y delincuencia, y eso aplica para todos los países. En México, las políticas públicas han fracasado al atender los pilares de la génesis de la criminalidad como lo son la pobreza y falta de oportunidades laborales y educativas. Pero la familia juega un papel importante, es por ello por lo que la evidencia científica señala que la crianza se considera determinante desde la primera infancia hasta la adolescencia, pues la crianza ineficaz carente o nula de valores, modelos parentales o de ambientes hostiles son factores importantes en la génesis de conductas antisociales.

¹⁹ Gómez Sánchez, Op. Cit. No, 4.

²⁰ Patterson, G. R., DeBaryshe, B. D., y Ramsey, E. (2017). A developmental perspective on antisocial behavior. In *Developmental and life-course criminological theories* (pp. 29-35). Routledge. Recuperado de <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315094908/chapters/10.4324/9781315094908-2>

En ese mismo tenor, Ornelas y Tello ²¹ refieren que la actual descomposición social se caracteriza por el individualismo, la indiferencia y la falta de solidaridad, y eso provoca el deterioro del tejido social. Que la violencia es una de las formas de relación social dominante que se ha normalizado en nuestras sociedades y ha permeado las instituciones escolares, en donde se produce y recrea la violencia, la exclusión, el rechazo, la desconfianza; pero la escuela es solo como una caja de resonancia que representa lo que sucede a nivel social. Pero también es aquí, en la escuela, donde existe una posibilidad para incidir en la modificación de las relaciones anómalas existentes, y promover procesos de inclusión, aceptación y confianza entre los diferentes actores de la comunidad escolar.

A la escuela se le han asignado dos tareas esenciales:

- 1) La formación en determinadas áreas del conocimiento a través de la transmisión de contenidos.
- 2) La socialización o formación social, que es la que habilita a los niños y jóvenes para entablar relaciones con los demás. Se puede decir que las dos funciones han ido a la baja, cada vez los estudiantes aprenden menos y socializan menos y equivocadamente. Algunos dicen que lo que se está reproduciendo y aprendiendo son patrones de conducta de sobrevivencia en una sociedad en descomposición. En las escuelas predominan las relaciones desiguales, y casi siempre de dominio y sumisión, en donde lo que prevalece es el control de los demás, reproduciendo lo que sucede en la sociedad en general. Por eso se debe atender a la escuela, porque es un espacio donde es posible generar un aprendizaje diferente, en el que se fomenten las relaciones sanas y habilidades sociales para la convivencia social sana, ahí se debe aprender a ser y a estar con el otro.

La Familia.

21 Ornelas Adriana y Tello Nelia, Reconstrucción del tejido social en el ámbito escolar; una propuesta desde trabajo social. Revista Búsqueda, Numero 17: 154-167; 2016. México.

Para Ávila Hernández y Cols 22., analizando la descomposición social que vive Venezuela, la familia es otra de las instituciones importantes para lograr esta reconstrucción social, entendida ésta última como la fortaleza del tejido social que se traduce en protección y reconocimiento para que los individuos tengan una existencia social a satisfacción, como lo postula Serge Paugam 23. Se debe regresar a ver a la familia, para ayudarlo a superar eso que Ávila Hernández y Cols. Llamam “el vaciamiento moral y el extrañamiento de la dimensión ética, para que disminuyan los conflictos y las relaciones violentas entre los actores sociales. Se debe generar en las personas la confianza, el reconocimiento interpersonal, el respeto a la dignidad de la persona humana, la estima social, para que surja el cuidado, la solidaridad y la protección de las personas. Y este trabajo para restablecer dichos lazos, muestra la importancia de actuar en la familia, en los amigos, en la comunidad, en el trabajo, en la iglesia.

Caldera Ynfante 24, dice que la familia como espacio de transición, se apoya en el aprendizaje de la convivencia, ahí aprendemos a convivir, como resultado del ejercicio del cuidado mutuo, la familia se cuida, uno a otro entre todos sus integrantes, porque son familia; y esto puede proyectarse a todo el ámbito social. Pero se requiere de condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad y su progresivo perfeccionamiento, y esto se logra estudiando las realidades humanas. Al respecto, Téllez Murcia 25 comenta que es necesario identificar “el acto de vivir con otros como una responsabilidad con nosotros mismos, con otros y con el entorno, en tanto somos un entramado que puede alimentar o no los vínculos que fortalecen los grupos sociales, familias y comunidades”,⁴² en un aprendizaje comunicativo para la convivencia. A lo que Caldera Ynfante agrega que debemos desmontar la perversa distinción amigo-enemigo, propia del nazismo.

22 Ávila Hernández, F. M., Víctor Martín-Fiorino y Édgar Córdova Jaimes. “Reconstrucción del tejido social en los marcos de emergencia humanitaria: el rol contemporáneo de la familia”. *Novum Jus* 16, núm. 2 (2022): 367-390. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.2.14>

23 Paugam Serge, *Le lien social* (París: PUF, 2008).

24 Jesús Caldera Ynfante, *Democracia integral: un derecho fundamental* (Bogotá: Nueva Jurídica, 2019), 30.

25 Téllez Murcia, “El sentido del tejido social”, 9.

La familia, aún con sus propios retos y actualizaciones propias de la modernidad, en nuestro país, sigue siendo una institución determinante para la conducta de las personas, y de las normas que guiarán su vida, puesto que es el primer lugar en el que se transmiten los valores al ser humano. Y además está íntimamente ligada a la sociedad, anteriormente se la llamaba “la base de la sociedad”, otros como Florino y Muñoz Buitrago ²⁶ prefieren llamarle “El fundamento y alimento continuo de la sociedad”, mediante su servicio a la vida. En la familia se forman los ciudadanos, es la primera escuela de las virtudes éticas y no éticas, que a su vez influyen en la vida y en el desarrollo social.

Ávila Hernández destacan que la familia está fundada en el amor y esto es lo que mueve a todos sus miembros a construir día tras día una comunidad siempre renovada, en la cual todos tienen igual dignidad e importancia. Es una institución necesaria para el progreso del individuo y de la sociedad; por ello, los cambios estructurales en la sociedad modifican las relaciones familiares, por lo que se halla en transición a otras formas organizativas. Las actitudes de apoyo, la educación, el afecto, la solidaridad, y el aprendizaje de las reglas, son prácticas que se aprenden en la familia y, una vez aprendidas, se reproducen en la sociedad. Es por eso que para la mayoría de las personas la familia representa el ámbito más valorado, porque actúa como una red de relaciones o fuente de apoyo y contribuye al ajuste psicosocial de las personas.

EL ESTADO Y SUS POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS

Y ¿Cómo sería la participación del Estado para reconstruir el tejido social? Gómez y Sánchez ²⁷ postulan que, para prevenir estas conductas antisociales, el enfoque debe ponerse en crear políticas criminológicas que atiendan los problemas actuales que enfrenta nuestra sociedad, se deben atender las variables ofrecidas por la Victimología, los factores

26 V. Martin-Fiorino y D. Muñoz-Buitrago en “Persona convivencia y felicidad. Condiciones ético-políticas y educativas para la construcción de la felicidad”, incluido en el libro Persona y felicidad, producto de trabajo del grupo de investigación Philosophia Personae, del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Colombia.

27 Gómez Sánchez, E. J., y Sánchez Hernández, H. (2019). Políticas criminológicas para erradicar la violencia en México. Revista Aletheia. Recuperado de https://revista-aletheia.ieu.edu.mx/documentos/A_opinion/2019/11_Noviembre/Art_Op_5.pdf

criminógenos, los móviles criminógenos y los factores detonantes que están latentes en todos los grupos poblacionales y que propician la falta de oportunidades económicas como: el empleo, la inseguridad y la violencia, para dar un tratamiento en base a estudios serios y basados en la evidencia.

Tampoco olvidar las propuestas que pueden surgir de la criminología, tomada como una de las ciencias que por excelencia juega un papel de mucha importancia al investigar, analizar y explicar las conductas antisociales y las causas de la criminalidad. sin embargo, el problema de la criminología científica amerita un estudio más profundo, especializado, con mejores herramientas, tecnologías y profesionales comprometidos a dar el seguimiento a los fenómenos latentes, mejorar la calidad de atención y el desarrollo en la impartición de justicia, desterrar la impunidad y realizar investigación científica sobre prevención de conductas antisociales.

Es importante que se ofrezcan a la población en general, el acceso a mejores oportunidades económicas, laborales y educativas en el país, sin olvidar el apoyo que pueden dar instituciones que fortalecen la moral, la dignidad de las personas, el bien común, los valores y el rescate de la familia, lo que resultaría en una contribución en gran medida al descenso de la incidencia delictiva, pobreza y exclusión social.

CONCLUSIÓN

Sin duda que la maldad ha existido siempre; en todos los siglos han existido personas que han dejado su huella, no tanto por defender sus derechos; sino porque han existido personas que han pasado por encima de esos derechos, que aunque no se conocían con ese nombre en el pasado, todos sabemos que los pueblos poderosos desplazaban, agredían, asesinaban, robaban y expulsaban a los que resultaban derrotados. Pero en estos últimos siglos, el hombre ha ido creciendo en sabiduría, valores, educación, dando nacimiento a eso que llamamos civilización. Pero en el siglo XX, que ha sido el de mayor desarrollo de la humanidad, en todos los campos de la vida, también ha sido testigo del renacimiento de conductas violentas y antisociales del hombre contra el

propio hombre. Hemos formado grandes sociedades y es indiscutible el desarrollo económico y humano, pero el tejido social que hemos formado muestra datos indiscutibles de descomposición. Ahora que más sabemos de ética, moral, deontología, valores, interacción humana, el hombre de ahora, con todos sus avances científicos, ha sido incapaz de recomponer el tejido social, estamos lejos de la congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, predominan los que piensan de una manera, hablan de otro modo y se comportan dañosamente contra sus semejantes. Es por eso que la hipótesis sigue vigente, todos, o por podríamos decir que la mayoría de nosotros, tenemos dentro de nosotros a un potencial delincuente. Algo tenemos que hacer, para ser mejores personas, y con ello contribuir a que el tejido social al que pertenecemos, frene su descomposición.

FUENTES CONSULTADAS

- Ávila Hernández, F. M., Víctor Martin-Fiorino y Édgar Córdova Jaimes. “Reconstrucción del tejido social en los marcos de emergencia humanitaria: el rol contemporáneo de la familia”. *Novum Jus* 16, núm. 2 (2022): 367-390. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.2.14>
- Bolaños Arévalo, C. A. (2016). El sicariato. Producto de la descomposición social. Recuperado de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8231/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER-MD-121.pdf>
- Caldera Ynfante Jesús, Democracia integral: un derecho fundamental (Bogotá: Nueva Jurídica, 2019), 30.
- Engelmann, J. B., Schmid, B., De Dreu, C. K., Chumbley, J., y Fehr, E. (2019). On the psychology and economics of antisocial personality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(26), 12781-12786.
- Falla, U. Chávez Y. (2004) Realidades y falacias de la reconstrucción del tejido social en población desplazada. Colombia. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600210>
- Gómez Sánchez Edwin Javier, Descomposición social como génesis de la conducta antisocial, *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*, año 8, Vol. 15, agosto - diciembre 2020, México, p.3.
- Gómez Sánchez, E. J., y Sánchez Hernández, H. (2019). Políticas criminológicas para erradicar la violencia en México. *Revista Aletheia*. Recuperado de https://revista-aletheia.ieu.edu.mx/documentos/A_opinion/2019/11

- **Habitat para la Humanidad México A.C., El Tejido Social.** Consultado en: <https://www.habitatmexico.org/article/el-tejido-social>
- **Hernández Anabel, La verdadera noche de Iguala, La historia que el gobierno quiso ocultar,** Grijalbo, México, Consultado en: chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://e-radio.edu.mx/files/Voces-y-cantos-de-la-tierra-viva/La_verdadera_noche_de_Iguala-1.pdf
- **Huertas Díaz, Omar. (2010). Anomia, normalidad y función del crimen desde la perspectiva de Robert Merton y su incidencia en la criminología.** Revista Criminalidad, 52(1), 365-376. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-31082010000100010&script=sci_abstract&lng=es
- **Ornelas Adriana y Tello Nelia, Reconstrucción del tejido social en el ámbito escolar; una propuesta desde trabajo social.** Revista Búsqueda, Numero 17: 154-167; 2016. México.
- **Patterson, G. R., DeBaryshe, B. D., y Ramsey, E. (2017). A developmental perspective on antisocial behavior.** In Developmental and life-course criminological theories (pp. 29-35). Routledge. Recuperado de <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315094908/chapters/10.4324/9781315094908-2>
- **Paugam Serge, Le lien social** (París: PUF, 2008).
- **Ramírez de Garay, L.D. (2014). Crimen y economía: una revisión crítica de las explicaciones económicas del crimen.** Argumentos, 27(74), 261-290. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0187-57952014000100010&lng=es&nrm=iso
- **Sutherland, E. H., Cressey, D. R., y Luckenbill, D. (1995). The theory of differential association.** Deviance: A symbolic interactionist approach, 64-68.
- **Téllez Murcia, “El sentido del tejido social”, 9.**
- **Torres, F., y Rojas, A. (2015). Política económica y política social en México: desequilibrio y saldos.** Problemas del desarrollo, 46(182), 41-66. Recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/51274>
- **V. Martin-Fiorino y D. Muñoz-Buitrago en “Persona convivencia y felicidad. Condiciones ético-políticas y educativas para la construcción de la felicidad”,** incluido en el libro Persona y felicidad, producto de trabajo del grupo de investigación Philosophia Personae, del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Colombia.
- **Wortley, R. (2008). Situational precipitators of crime.** En R. Wortley & L. Mazerolle (Eds.). Environmental criminology and crime analysis (pp. 48-69). Cullompton, Devon: Willan.

- Zárate Ruíz Arturo, Los tejidos sociales y la prevención de la delincuencia en México, Universidad de Ciencias de la Seguridad, Consultado en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2022/12/5-LOS-TEJIDOS-SOCIALES.pdf
- Zimermann Mark, Manual MSD, Versión para profesionales, Trastorno de la Personalidad antisocial. Septiembre del 2022, Consultado en: <https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastornos-de-la-personalidad/trastorno-de-la-personalidad-antisocial-tpa>
- Wikipedia. John Winslow Irving, Consultado en: https://es.wikipedia.org/wiki/John_Irving



**El centro de liderazgo,
estudio y capacitación
Don Andrés Bello
(CLECADAB) te invita**



INVITADOS:

DR. LEONARDO PEREIRA MELÉNDEZ

DR. FERMÍN MÁRMOL GARCÍA

**I JORNADA
NACIONAL DE
DERECHO
PROCESAL PENAL
Y POLÍTICA
CRIMINAL**



**DÍA SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2024.
DESDE LAS 8:30 A.M.
EN HOTEL PRINCIPE
DE BARQUISIMETO**

PARA MAS INFORMACIÓN

 **+58 412-7176975**





EL LITIGIO DE ALTO IMPACTO APLICADO EN CASOS DE MATERIAL ESTRATÉGICO

Mariela Molero* / Arcadio Salvador Acosta**
Venezuela



“La experiencia jurídica debe estar al servicio del necesitado”

No todos los casos aplican para el litigio estratégico, pero sí todos los casos nos dejan enseñanzas, esas que van a nutrir la experiencia jurídica de los profesionales del Derecho y marcan la diferencia en los casos venideros, de allí deviene la importancia de conocer la certeza del impacto de un caso y como con un plan estudiado a favor de nuestro patrocinado o patrocinados, podemos resolver su situación jurídica e incidir en el colectivo, para que esa experiencia permita corregir cuando se deba y prevenir conflictos jurídicos futuros.

Se puede aplicar un litigio de interés público sobre una amplia variedad de cuestiones, entre ellas: tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; justicia internacional; detención; derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes; derechos de la infancia;

*profesional del Derecho del estado Bolívar, graduada en el año 2006 de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, con la mención honorífica Magna Cum Laude, es Magíster en Ciencias Jurídicas Militares de la UNEFAB, egresada en el año 2010, con la posición académica número 1, es actualmente defensora de derechos humanos en la zona Oriente Sur de Venezuela, es asesor legal de la Asociación Civil Kapé Kapé, organización de asistencia humanitaria, promoción y defensa de los pueblos originarios de Venezuela, está preparada en litigio estratégico en derechos humanos, justicia transicional, sistema interamericano de derechos humanos, cuenta con un diplomado en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dictado por la Universidad de Los Andes, es docente universitario de postgrado en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, es conferencista nacional e internacional, autora de muchos artículos jurídicos para revistas nacionales, es productora nacional independiente alternativa de medios de comunicación, digitales y alternativos, número 1.166 de la Cápsula Legal a nivel nacional e internacional, cuenta con su canal YouTube al cual pueden unirse con el identificador @MarielaMolero. Email: marielaalejandramolero@gmail.com Móvil +58-424-9469549

**Arcadio Salvador Acosta Rivas, abogado de la República Bolivariana de Venezuela egresado de la Universidad Santa María, especialista en derecho penal, reconocido profesional del derecho en el estado Bolívar con 23 años de experiencia, ex fiscal del Ministerio Público para el estado Bolívar, secretario de sala y alguacil – Poder Judicial, ha manejado casos emblemáticos con defensas exitosas, creador del espacio digital Nota Jurídica que se transmite por la red social Tik Tok y boletines de noticias digitales para el estado Bolívar, luchador social que conjuntamente con el derecho ejerce diariamente en Ciudad Bolívar. Vías de contacto: Email: asalvadoracosta@gmail.com / Tik Tok: @abogadosalvador Móvil: +58 0414 - 8534519

censura y libertad de expresión; salud materna y derechos reproductivos; pena de muerte; discriminación; y derechos económicos, sociales y culturales, pueblos indígenas, material estratégico, entre otros.

Si hablamos, sobre tráfico de material estratégico, su disposición está atribuida solo al Estado, en el caso del ejercicio legal de la minería, para que los particulares puedan explotar recursos como oro, diamante, coltán, casiterita, entre otros, se creó ministerialmente la Corporación Venezolana de Minería conocida por sus siglas CVM, la cual, dentro de sus resueltos establece la constitución e inscripción de "Alianzas Mineras", luego de ese proceso, dependiendo del sector minero donde funcione dicha alianza, existirá una oficina de recaudación de la CVM, donde se procede a consignar los "arrimes", esto último, constituye la cuota o fracción de minerales que percibe el Estado venezolano de manos de sus aliados, es decir, como ganancia o tributo por permitir al particular la explotación del mineral.

Ocurre que en el marco de operaciones militares en el estado Bolívar, hay quienes teniendo en manos sus constancias de arrime y documentos en regla con la CVM, están en este preciso momento detenidas en calabozos por varios delitos, entre ellos, el del tráfico de material estratégico, lo cual, constituye mala praxis policial, porque estas personas no están al margen de la ley, cuentan con constancia de operatividad y poseen las constancia de sus arrimes, entendiendo esto, como un recibo que describe el lugar, el nombre de la alianza que está contribuyendo, la fecha, el nombre, apellido, cédula y firma del funcionario receptor de la CVM, además, nombre, apellido, cédula y firma del pagador y la cantidad expresada en letras y números de quien arrima y el tipo de mineral, lo que constituye a todas luces, un eximente de responsabilidad penal, es más, hay parcelas demarcadas por la CVM de pequeña minería, donde no es necesaria la alianza, solo hace falta ponerse en línea con el respectivo arrime.

Cuando estudiamos sobre litigio estratégico comprendemos que muchas veces tenemos casos que pueden marcar ese antes y después, que debemos ir más allá en la defensa de los derechos ciudadanos,

podemos y debemos marcar la diferencia, debemos con el derecho incidir en las autoridades para que se detengan atropellos y arbitrariedades. Debemos llamar la atención hacia los abusos y violaciones de derechos humanos y resaltar la obligación del Estado de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales.

En el marco de muchos operativos, se violan los derechos humanos, entre abogados conocemos que en el marco de tales operaciones les destruyen los documentos y equipos de trabajo a los ciudadanos, que de forma honesta están trabajando en algo que forma parte de su vida cotidiana, como en el caso del estado Bolívar donde la minería forma parte de la cultura, donde ser minero no es malo, es una manera de ganarse la vida, pero ocurre, que el órgano que práctica los procedimientos y realiza las presuntas flagrancias desconoce estos procedimientos y la cosmovisión local.

Al presentar ante los tribunales de control a ciudadanos por delitos de tráfico de material estratégico, los fiscales cuando reciben estos procedimientos de manos del órgano que los instruye, actúan punitivamente y como si estuviésemos anclados en el extinto proceso penal inquisitivo, apelan sin investigar a que existe un concurso de delitos, es decir, imputan múltiples hechos, el más grave asociación para delinquir, comprometiendo la conducta de estos, habiendo casos donde a los imputados los comprometen con GEDO que significa Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada.

En línea a lo anterior, hay responsabilidad de los operadores de justicia, se detalla el atropello en las supuestas flagrancias, el desconocimiento de las alianzas emitidas por la CVM, luego el ensañamiento del Ministerio Público durante el proceso, cuando su norte es la búsqueda de la verdad y la defensa para este tipo de hechos punibles, donde deben hacer valer en favor de los imputados sus constancias de arrime como elementos exculpatorios, constituyendo estas defensas un verdadero reto para los profesionales del derecho, quienes frente a los referidos casos deben desempeñar su mejor defensa, para evitar que sean condenadas personas inocentes.

Vincular un caso que contenga la imputación de material estratégico permite dar a conocer fallas en el sistema que implican violaciones de derechos humanos y eso como abogados nos debe advertir de que no es un caso más, conlleva una responsabilidad de producir cambios significativos que implique un adecuado proceso para evitar que los órganos de justicia se conviertan en una experiencia de terror para cientos de justiciables.

En ese sentido, el fin último del litigio estratégico es dejar una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado, mediante este artículo se plantea que se pueden colocar ideas claves para los abogados en ejercicio cuando asuman una defensa de imputados o acusados para realizar los descargos.

‘‘EL LITIGIO ESTRATÉGICO NOS PERMITE PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS PARA TODAS LAS PERSONAS’’

Es una herramienta que utiliza el poder del derecho para lograr transformaciones estructurales a nivel jurídico, institucional, político o social. Este tipo de litigio identifica casos que tienen el potencial de convertirse en emblemáticos, es decir, casos que, además de buscar la reivindicación de los derechos de una víctima o grupos de víctimas, buscan transformar una realidad para evitar que sigan ocurriendo hechos de similar naturaleza.

Lo que pretendemos al escribir este artículo es poner a pensar a los colegas, a los operadores de justicia y al legislador, tenemos en el Oriente Sur venezolano una situación complicada con el material estratégico y al mismo tiempo es una actividad normalizada por el contexto social geográfico.

Las leyes deben prevenir los delitos en vez de crear leyes para castigar delitos, son numerosos los casos de detenidos por material estratégico y aunque el enfoque para este escrito está dirigido a minería legal ante la CVM, no dejaremos por fuera el mencionar que hay personas que han sido detenidas por 20 litros de gasolina para auxiliar a un familiar accidentado por falta de combustible.

Cuando miramos realidades y conociendo el alcance de nuestras posiciones podemos solicitar que se revisen las distintas actuaciones de los operadores de justicia en la aplicación de las leyes.

Como integrantes del colectivo gremios de abogados, es un deber hacer un llamado de atención al Ministerio Público para que la instrucción a la hora de imputar delitos por tráfico de material estratégico, pero además se impute el delito de asociación para delinquir, se realice como diligencia de investigación la verificación del hampograma y sino aparecen allí relacionados los imputados inmediatamente quedan desvinculados de ese delito y en consecuencia no forman parte de un GEDO.

Podemos a través del litigio estratégico emplearlo conscientemente para promover la aclaración, el respeto, la protección y la realización de los derechos en beneficio del colectivo porque el delito de material estratégico es muy frecuente en este espacio territorial y debemos sobre la marcha detener atropellos y evitar colapsar el aparato judicial.

En el ejercicio hemos detectado cuatro situaciones en las que sería aplicable esta estrategia: 1. El derecho no es observado (en lo sustantivo o en lo procedimental); 2. Hay discordancia entre el derecho interno y los estándares internacionales; 3. No hay claridad en el derecho existente; 4. La ley se aplica reiteradamente de manera inexacta y/o arbitraria.

El litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque, a partir de una causa legal, busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática.

Pretendemos generar en todos los lectores un nivel de concientización, empoderamiento y apropiación de sus problemáticas y necesidades, bajo la premisa de que lograr cambios en la sociedad es fundamental para lograr la materialización de cambios permanentes. Concientizar sobre la necesidad de ser dueños de sus propios problemas e identificar la forma de superarlos, sin necesidad de depender de un tercero.

Podemos con nuestras acciones ser agentes de cambio, de esperanza por una justicia verdadera, de mostrar un mismo escenario, pero observándolo desde otra posición, solo así, entenderemos que estamos para sumar, para apoyar y somos desde nuestros pequeños espacios agentes de transformación.



LA RECREACIÓN LABORAL EN VENEZUELA

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas*
Venezuela



FUNDAMENTOS LEGALES DE LA RECREACIÓN LABORAL EN VENEZUELA

La recreación laboral entendida de acuerdo con Gamboa (2022:1) como “el conjunto de actividades, experiencias y vivencias planificadas que se realizan en los centros de trabajo, las cuales son diseñadas a partir de las características y necesidades de los trabajadores para desarrollar y mantener su equilibrio social, emocional y físico, con la idea de generar satisfacción y disminución de patologías laborales”, es reconocida como un derecho en la legislación venezolana vigente, en virtud que constituye una actividad necesaria para la salud física, mental y espiritual del trabajador y su familia.

Las leyes que regulan la temática de recreación laboral en Venezuela están contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012), el Reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo (2007), la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (2005), el Reglamento de la LOPCYMAT (2007) y la Ley Orgánica de Recreación (2021). Toda esta normativa jurídica condiciona las actividades de las organizaciones e instituciones y de los trabajadores, al permitir manejar las acciones requeridas para cumplir con los objetivos previstos.

En este orden de ideas, el artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) consagra la recreación como un derecho que mejorara la calidad de vida del individuo, por lo que el Estado establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones

*Postdoctora en Estudios de la Paz y Cooperación, en Investigación Transcompleja e Investigación, Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa, Abogada, Docente Universitaria, Coordinadora Línea de Investigación Cultura de Paz UBA. noheliay@gmail.com . <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

y comunidades que promuevan, desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas y recreativas en el país.

Al respecto, el artículo 349 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, 2012) señala que “Los patronos contribuirán con el fortalecimiento de la práctica deportiva, la actividad física, la recreación y la educación física...” En concordancia el artículo 350 consagra que el Estado en corresponsabilidad con las organizaciones sociales de los trabajadores, planificará y desarrollará programas y misiones para el turismo social, la cultura y la recreación que faciliten el pleno disfrute del tiempo libre, el descanso y las vacaciones contribuyendo a la salud física y emocional de los trabajadores y trabajadoras junto a su familia.

En correspondencia, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Prevención Condición y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT, 2005) estipula el establecimiento de instituciones, normas, órganos y entes que garanticen la promoción y desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, en concordancia, el artículo 7 de la ley in comento, indica que el financiamiento de los programas dirigidos a la utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, será por vía fiscal, sin perjuicio de otros mecanismos que se establezcan en la convención colectiva de trabajo.

Por su parte, los artículos 28 y 29 ibidem establecen normas que contemplan la obligatoriedad de los planes de recreación y aprovechamiento del tiempo libre y de la vigilancia de los mismos en el centro de trabajo y de sus reportes ante el INPSASEL y el INCRET.

Cabe destacar que el artículo 104 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT, 2005) establece que “Toda empresa debe contar con un programa recreativo donde se integre la recreación, turismo y cultura para poder reducir accidentes y enfermedades ocupacionales, así como mejorar sus condiciones de vida”.

Siendo el ente responsable de las políticas públicas en materia de recreación laboral es el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación

de los Trabajadores (INCRET). Al respecto, la página web oficial del INCRET (2024:1) informa que la División de Recreación Laboral es la encargada de “Diseñar, promover, coordinar y ofrecer servicios recreacionales que impulsen el esparcimiento y la sana utilización del tiempo libre, para la calidad de vida de los trabajadores, trabajadores y su grupo familiar”.

El cual expide una certificación de solvencia al empleador por el cumplimiento del programa recreativo de su empresa, la cual está siendo solicitada por INPSASEL para verificar el cumplimiento de la misma.

En correspondencia, el artículo 113 ejusdem refiere que los delegados de prevención recibirán las denuncias relativas a los programas de recreación y utilización del tiempo libre, correspondiendo al INPSASEL sancionar mediante multas al patrono que incumpla con el Programa de Recreación.

Al respecto, el artículo 36 del Reglamento de la LOPCYMAT (2007) establece que los Servicios de Salud y Seguridad Laboral deberán desarrollar y mantener un Sistema de Vigilancia de Utilización del Tiempo Libre.

En caso de incumplimiento, el ordinal 6 del artículo 118 de la LOPCYMAT (2005) establece que se sancionará al empleador con multas de hasta (25 U.T) por cada trabajador expuesto cuando no imparta a los trabajadores formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y periódica en la utilización del tiempo libre y aprovechamiento del descanso en el momento de ingresar al trabajo.

Por su parte, el artículo 119 ejusdem prevé que se sancionará al empleador con multas de (26 a 75 U.T) por cada trabajador expuesto cuando no elabore, implemente o evalúe los programas de salud y seguridad en el trabajo y no desarrolle programas de educación y capacitación para los trabajadores en materia de salud y seguridad. Los ordinales 2 y 3 del artículo 120 ibidem consagra que se sancionara al empleador con multas de (76 a 100 U.T) por cada trabajador expuesto cuando no asegure el disfrute efectivo de las vacaciones, así como del

descanso de la faena diaria, debiendo el empleador llevar un registro detallado de sistema de vigilancia del tiempo libre.

Por su parte, la Ley Orgánica de Recreación (2021) los artículos 1 y 3, consagran la recreación como un derecho de todas las personas que el Estado debe garantizar para contribuir al desarrollo pleno e integral de las potencialidades humanas, crecimiento personal, social y comunitario, favorecedor del buen vivir y del bienestar general mediante el buen uso y disposición del tiempo libre.

En consecuencia, todas las políticas públicas inherentes, así como programas institucionales y servicio de recreación público, privado y comunal deben desarrollarse bajo responsabilidad de un profesional con formación académica o experiencia acreditable en el área de conocimiento.

Por su parte el artículo 2 establece que su ámbito de aplicación comprende todos los tipos, modalidades y especialidades de la recreación, incluidas las denominaciones genéricas de entretenimiento, esparcimiento, diversión y distracción.

Sin embargo, en la realidad se observa que la recreación laboral, es frecuentemente dejada en un segundo plano en relación a las obligaciones del empleador. Al respecto, González (2022:1), manifiesta que el INCRET ha venido realizando actividades dirigidas a difundir el derecho que tienen todos los trabajadores a la recreación, brindando asesoría a las entidades de trabajo para la constitución de su programa recreativo laboral (PRL).

Por su parte, Alviárez (2022:1) enfatiza que es importante que los trabajadores se recreen durante la jornada laboral, mantengan buenas relaciones interpersonales así como buenas prácticas de promoción de la salud laboral y prevención de enfermedades con ocasión del trabajo, destacando que la buena calidad de vida dentro de la entidad de trabajo, redundará en una mayor productividad, lo cual constituye un beneficio directo para el empleador, “quienes muchas veces se niegan a desarrollar los programas recreativos por considerarlos un gasto y no una inversión”. Tales afirmaciones evidencian que la recreación laboral aun es un camino

que tiene mucho por recorrer en Venezuela.

Es importante entender, que la recreación laboral es un elemento motivador del trabajador y que por ende puede aumentar su productividad y mejorar el clima organizacional. Al respecto, Rojas (2023:1) asevera que “el estrés provocado por las largas horas de trabajo, la rutina, tareas que implican gran esfuerzo, llevan a desmotivación, falta de atención en las tareas laborales y por tanto, ausentismo”. Acota el autor que estudios recientes han demostrado que un trabajador es más productivo si cuenta con espacios físicos agradables, por lo cual “las nuevas tendencias empresariales son contar con espacios físicos donde los empleados pueden relajarse, hacer ejercicios, distenderse, todo ello, mientras laboran”.

De allí que velar por el cumplimiento del derecho a la recreación laboral, puede beneficiar no solo al trabajador de manera individual, sino a todo el grupo laboral en conjunto, ya que se encuentran dentro de una vivencia grupal y colectiva, ofreciendo una vía pacífica de resolución de conflictos humanos y laborales al gestionar adecuadamente la convivencia solidaria, mejorando la capacidad y productividad de la organización.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RECREACIÓN LABORAL EN VENEZUELA

La recreación laboral de acuerdo con efiempresa (2017:1) es una actividad humana necesaria y placentera de diversión o esparcimiento que es realizada durante el tiempo libre, de forma individual o colectiva, proporcionando descanso al cuerpo y la mente, permitiendo recuperar fuerzas, generando trabajadores motivados, felices, saludables, propiciando un entorno laboral favorable.

De modo que las actividades recreativas laborales constituyen aquellas acciones específicas que constituyen el medio a través del cual los trabajadores pueden satisfacer sus necesidades de distracción. Las cuales se clasifican tal como se muestran en el cuadro 1, a continuación.

Cuadro 1
Clase de actividades recreativas laborales

Especie	Esparcimiento	comprende actividades como paseos, el uso de playas o de piscinas, excursiones a las montañas o bosques que no requieran un adiestramiento especial y todas aquellas actividades que resulten un atractivo para el participante.
	Visitas culturales	visitas a museos, monumentos artísticos y culturales; iglesias, ruinas, zonas arqueológicas, lugares turísticos, visita a sitios artesanales, fiestas populares y tradiciones folklóricas.
	Sitios naturales	corresponden a la observación y disfrute de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones
	Actividades físico-deportivas	Prácticas, encuentros, competencias
	Asistencia a acontecimientos programados	espectáculos, exposiciones, festivales, concursos de belleza, corridas de toros, partidos de fútbol, cine, teatro, danzas, musicales, entre otros.
	Lúdicas	todas las formas de juego: juegos de mesa, juegos de salón, juegos tradicionales, videojuegos, juegos de ordenador
	De creación artística	Literarias, artes plásticas, teatrales, danzas, música, artesanía, escultura, tallado, madera, piedra, bordado, tejido, bisuterías, entre otras.
	De Relajación	meditación, auto relajación, masaje, auto masaje, yoga, mándalas, entre otros.
Estructura	Intensidad	Leve
		Moderada
		Vigorosa
	Distribución del espacio	Al aire libre: en contacto con la naturaleza: en tierra, en el medio acuático y en el aire.
		Cerrados
		Mixtos

- **Forman la personalidad psicosocial porque permiten el desarrollo de la personalidad del individuo y su sana relación con los demás.**
- **Liberan espontaneidad, por cuanto alienta a los trabajadores a desinhibirse y expresar sus sentimientos frente a los demás.**
- **Sicomotoras, estimulan el movimiento físico y producen como efecto el desarrollo psicomotor del participante.**

Al respecto, el INCRET (2024:1), señala que el programa de recreación laboral (PRL) constituye el conjunto de actividades recreativas, culturales y deportivas, de descanso y disfrute del tiempo libre, vinculadas entre sí, como herramienta para el buen uso del tiempo libre, que busca prevenir las enfermedades ocupacionales, así como reducir los accidentes de trabajo, para crear y fortalecer la integración entre los trabajadores, y con ello aumentar la productividad de la entidad de trabajo, al incrementar la energía de las personas, elevando su rendimiento laboral.

Por lo que contar con un personal adecuadamente ejercitado, saludable, que disfrute períodos de descanso apropiados y participe en actividades recreativas acordes con su condición física, emocional e intelectual, se traduce para las entidades de trabajo en una disminución de la tasa de ausentismo laboral, además de menores riesgos de accidentes laborales causados por cansancio o estrés.

De acuerdo con Drew (2018) en la programación de actividades recreativas laborales, de considerarse los siguientes criterios:

- (a) Igualdad de oportunidad para todos**
- (b) Para todas las edades**
- (c) Atención a ambos sexos**
- (d) Alentar la recreación familiar**
- (e) Comprenda actividades tanto de descanso, como activas**
- (f) Reconocer los diferentes gustos e intereses de los individuos**
- (g) Suministrar actividades para la expresión creadora y**
- (h) Asegurar condiciones seguras y sanas. Al respecto, Neeventos (2024) sugiere diez actividades recreativas empresariales, a saber: 1. Gimnasia de mantenimiento; 2. Torneos o ligas internas de juegos de pelota; 3. Actividades de trabajo en equipo; 4. Actividades fuera del lugar de trabajo; 5. Full day o excursiones; 6. Pausas laborales; 7. juegos de mesa; 8. Fiestas temática; 9. Celebraciones de fechas especiales y 10. Dinámicas.**

En cuanto a las necesidades que satisface la recreación, así como los valores que fomenta y los efectos positivos que genera, se presentan en el cuadro 2, a continuación.

Cuadro 2

Necesidades, Valores y Efectos de la Recreación

NECESIDADES	VALORES	EFFECTOS
FÍSICAS	Desarrollo Físico Desarrollo y adquisición de habilidades físicas Alargar la vida Mejorar la salud Fortalecimiento muscular Mayor resistencia física Bienestar físico Control de peso y obesidad Control de trastornos cardiovasculares	Bienestar y salud física
EMOCIONALES	Control de stress Abandono del cigarrillo Satisfacción personal Compañía y aceptación Interactuar con otros Superar la timidez Disminuir la agresividad Superar la pasividad Desviar la melancolía Reducir la ansiedad y neurosis Reducir el consumo del alcohol y tranquilizante	Bienestar emocional y mental
SOCIALES	Contacto social Superación de la sensación de soledad Amistad – sociabilidad Interés común-cooperación Competencia Preparar para la vida adulta Interactuar con otros Aceptar las reglas y deseos del grupo Disciplina-liderazgo-cohesión Poder social-posición social Prestigio social Compartir con la familia	Bienestar y salud social
INTELLECTUAL	Desarrollo de la creatividad Auto expresión Ejercicio de la memoria Aprender nuevas habilidades Información	Bienestar emocional y mental

Fuente: Kraus (2008)

REFLEXIONES FINALES

Una de las conductas naturales que posee el hombre es la de recrearse. Esta actividad ha surgido en el mundo actual como una respuesta a la automatización, el aburrimiento, la soledad, la rutina y otros factores propios de la sociedad la cual vive inmersa en el deterioro debido a la inseguridad y a la violencia, así como al sedentarismo. El turismo y la recreación son un fenómeno social que promueve y desarrolla valores de superación y conquista personal, de comunicación y promoción de la vida

social, de la alegría y estados de buen humor, de descanso y de la salud física y mental; dichos valores satisfacen la necesidades emocionales, sociales, intelectuales y físicas.

En este sentido, las definiciones encontradas acerca de recreación la enfocan como una actividad de aceptación social, que se lleva a cabo durante el tiempo libre, ya sea individual o colectivamente, que es libre y placentera, y no se requiere de otro beneficio más allá que el de haber participado en ella. Recrearse, necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias de la rutina diaria, especialmente laborales y así conseguir un descanso necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas.

Desde esta perspectiva, la recreación es considerada una parte esencial para mantener una buena salud, por cuanto esta permite al cuerpo y a la mente una renovación necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor calidad.

Así pues, la recreación se asocia, también, con factores intelectuales y educativos, de tal manera que es fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. A su vez, el recrearse proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación de la persona con el entorno, además, es ampliamente vista como una acción voluntaria, en la que se incluyen actividades físicas, mentales, sociales y emocionales, tales como: deportes, juegos, artesanías, artes escénicas, música, drama, viajes, pasatiempos y actividades sociales.

La recreación por su parte, con la conquista del tiempo libre y su adecuada utilización, se ha convertido en una de las preocupaciones de la población, y se reconoce esta época como de la recreación y tiempo libre. En consecuencia, para la sociedad de hoy la recreación no es un mero pasatiempo, sino que constituye una responsabilidad que tiene la familia, las empresas, el individuo, el gobierno y la sociedad en general.

Es considerada como una necesidad para los seres humanos de distintas edades y se reconocen sus beneficios como factor de: salud,

condición física, motivación y forma de vida para el bienestar del hombre. De allí que, la recreación se ha convertido en un derecho del hombre, en un campo de acción económica y socio cultural del cual se ocupan los gobiernos, las economías, las industrias, las comunidades, la iglesia y un gran número de organismos.

La recreación influye en el trabajo, la economía y cultura de una sociedad, puesto que el hombre ha tenido la necesidad de emplear tiempo libre para distraer su mente y recrearse, ya que esto constituye una actividad sana, divertida y que, al saber sacar el debido provecho, puede lograr ayudar al desarrollo integral del individuo.

Para poder realizar la tarea de recrear es preciso conocer la necesidad, el deseo y los intereses de los participantes, en el caso de estudio, de los trabajadores. Se debe entender que el turismo y la recreación significan actividades al aire libre que deben ser planificados, organizados y operados eficientemente para que sectores cada vez más amplios disfruten de sitios de interés con los que cuenta la geografía nacional.

Es importante destacar que para alcanzar dicho objetivo se requiere de una organización institucional adecuada orientada específicamente hacia la promoción y operación del turismo y la recreación social, como una de las modalidades más importantes del turismo.

En este sentido la dirección de gestión humana de las diferentes entidades de trabajo, además de ejecutar sus funciones operativas dirigidas a incrementar la productividad, debe también atribuir importancia al establecimiento de programas, servicios y estímulos que contribuyan a elevar la calidad de vida, mediante el cumplimiento de las políticas del Estado relacionadas con planes y programas referidos particularmente al ocio y la recreación.

La recreación laboral cada día, resulta más necesaria en las entidades de trabajo, debido al incremento de permisos o licencias por padecimientos de índole laboral cuyas causantes son los excesos de trabajo, presiones, mal ambiente laboral y relaciones interpersonales deficientes, estrés, agotamiento, entre otros, relacionados. Por lo que las

entidades de trabajo deben canalizar y mejorar estas condiciones nocivas, que afectan directamente a la productividad y al bienestar de sus trabajadores, mediante una acertada política recreación laboral.

Ante la crisis económica que atraviesa Venezuela a la par del contraído mercado laboral y la ausencia de cifras, en relación al cumplimiento de este derecho constituyen desafíos, Sin embargo, existen métodos muy variados para recrear, que no necesariamente implica el desembolso de grandes cantidades de dinero, tales como colocar en un lugar de la entidad de trabajo, una mesa de pin-pon, de ajedrez o algún otro juego de mesa, de manera tal, que los trabajadores, en su hora de descanso, puedan ir a esos lugares a entretenerse antes de volver al trabajo. Dándole a estos la oportunidad de conocer a quien trabaja en otras áreas o departamentos, y con quien probablemente no se ha compartido un diálogo que se aleje del simple saludo. En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Recreación (2021) contempla los juegos tradicionales, así como las plataformas tecnológicas.

Además, brinda la oportunidad de estrechar relaciones, de descubrir más allá de lo estrictamente profesional. Entre otros beneficios, se podrá aumentar el nivel de identificación entre los trabajadores y la entidad de trabajo, evitando así problemas de salud, lo que reduce notablemente la tasa de ausentismo en la empresa. Está comprobado que la recreación y el esparcimiento, resultan ser elementos útiles y necesarios a la hora de mantener las buenas relaciones, concentración, bienestar y salud. Unos pocos minutos al día, podrán recargar las energías para continuar la jornada con entusiasmo y renunciar por un rato a las presiones diarias que ayudan a entrar en un caos que encaminan a problemas de todo tipo.

Se hace necesario insistir en la recreación como medio y no como fin último. Como medio, ayuda a orientar la vida y contribuye al desarrollo del carácter y estructuración de la personalidad, pues a través de las actividades recreativas se logra un equilibrio entre lo que se es y lo que se quiere ser.

La influencia positiva de la recreación laboral es enorme y va más allá de la búsqueda de alegría, placer, distracción, calma, creación, factores que proporcionan un renovado impulso para volver a encontrarse en aquello que puede ser fundamental para la vida de cada uno, como lo es el trabajo, a través del cual se realiza lo que más le gusta y permite crecer individual y colectivamente en la reciprocidad con los demás, asumiendo en la práctica con carácter recreativo.

Las diferentes manifestaciones de la recreación pueden constituirse en satisfactores en relación con el individuo, el grupo social y el medio ambiente, y correlativamente pueden adquirir un carácter de singulares o sinérgicos. El propósito en todo caso es que los procesos que genere sean sinérgicos, es decir, que paralelo al desarrollo económico de las comunidades, los protagonistas de los programas sean partícipes del surgimiento mismo de tales procesos, que la realización de las necesidades sea el motor del desarrollo y estimule la solidaridad social y el crecimiento de las personas.

REFERENCIAS

- **Alviárez, J. (2022). Fundamentos de la Seguridad Social. Documento en línea. Disponible en: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069048885238>**
- **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial N° 36.860 de Diciembre 30**
- **Drew (2018). 5 actividades recreativas para distender la oficina. Documento en línea. Disponible en: <http://blog.wearedrew.co/>**
- **Efiempresa (2017). Recreación y Bienestar Laboral. Documento en línea. Disponible en: <https://efiempresa.com/>**
- **Gamboa, E. (2022). Recreación, Promoción y Asistencia Social al Trabajador. Documento en línea. Disponible en: <https://www.mtss.go.cr/>**
- **González, L. (2022). Intensifican Estrategias para asegurar aplicación de la Nueva Ley Laboral. Documento en línea. Disponible en:**
- **INCRET (2024). Programa de Recreación, Tiempo Libre, Descanso y Turismo Social de la LOPCYMAT. Documento en línea. Disponible en: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069048885238>**
- **Kraus, R. (2008). Necesidades, Valores y Efectos de la Recreación. Documento en línea. Disponible en: <https://www.elartedelarecreacion.com/p/abc.html>**

- **Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012).** Gaceta oficial 6.076 del 07 de Mayo
- **Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005).** Gaceta Oficial N° 38236 de fecha 26 de Julio.
- **Ley Orgánica de la Recreación (2021).** Gaceta Oficial N° 6.634 de fecha 07 de Julio
- **Neoeventos (2023).** Las 10 mejores actividades recreativas para empresas. Documento en línea. Disponible en: <https://neoeventos.es/>
- **Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2007).** Gaceta Oficial N° 38.596 de fecha 3 de Enero.
- **Ramírez (2020).** Actividades recreativas y deportivas que practican los trabajadores. Documento en línea. Disponible en: <https://repositorio.untumbes.edu.pe/>
- **Rojas, M. (2023).** La LOPCYMAT: Aplicación estratégica. Documento en línea. Disponible en: <https://omnia.legal/>
- **Valdez, F. (2019).** Plan de Recreación Laboral. Documento en línea. Disponible en: <https://capsve.com/>



ADOPCIÓN DE EMBRIONES O ADOPCIÓN PRENATAL

*Dra. Romano P. Fabiana**
Argentina



RESÚMEN.

En el proceso de la fertilización in vitro (FIV), las parejas pueden generar más embriones de los que realmente necesitan. Los embriones adicionales suelen ser crio-preservados (congelados) de modo que puedan ser transferidos más adelante.

Por distintas circunstancias (familia múltiple, enfermedad de alguno de los miembros de la pareja, divorcio, cambios de estado civil., etc.) estos embriones podrían no ser utilizados., en consecuencia estas parejas tienen la opción de donarlos a otra mujer para que logre un embarazo deseado. Esto se realiza mediante un trámite en el cual ambos integrantes de la pareja donante expresa su voluntad libre, consensuada, mediante consentimiento escrito. Se realiza de forma totalmente anónima y altruista.

ADOPCIÓN PRENATAL., CRIOPRESERVACIÓN, FIV

INTRODUCCIÓN

La donación de pre-embriones con fines reproductivos es la opción que aceptan incluso los sectores más críticos con las Técnicas de Reproducción Asistida. De seleccionar esta opción, en los términos del art. 5° LTRHA ¹, los donantes y el centro deberán firmar un contrato

*Dra. Paula Fabiana Romano. Abogada egresada de la Universidad de Morón. Especialista en Familia por la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Ciencias Jurídicas y políticas. Tesis doctoral "Incertidumbre jurídica en torno al estatuto y derechos del embrión humano crio-conservado, efectos y propuestas en términos de Derechos Humanos". Diplomada en discapacidad por la universidad de Buenos Aires. Diplomada en Familia y Sucesiones por la Universidad de Buenos Aires. Escribana Pública. Miembro del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón, Autora de publicaciones digitales para Argentina, Latinoamérica y Europa.UNIASACO., Brasil. Publicaciones en la Revista Filocam. Publicaciones en editorial Olejnik. Publicaciones en CIDEJ. San Diego EEUU. Revista de Derecho Público IIEditiones. Ponencia en la Unversidad de Coimbra Portugal. ORCID: 0009-0005-9448-6906.

1 Ley 26862 Reproducción medicamente asistida, acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción medicamente asistida. Sancionada el 5 de junio del 2013. Promulgada de hecho:25 de junio del 2013

gratuito, formal, libre y por norma general, confidencial 2

Hace tres décadas que se congelan embriones en Argentina. Se estima que hay una cifra considerable de al menos 5 dígitos de embriones humanos crio-conservados., suma que período a período va elevando la cifra, en los distintos centros de fertilización asistida del país. Un embrión en el derecho comparado no sería equiparable en sus derechos como una persona física, sino que éste iría in crescendo sus derechos de manera proporcional a su evolución. Sin embargo para nuestro Código Civil y Comercial de la Nación evitó demás conceptos y sólo recalcó en su art. 19° que es persona humana desde la concepción. Sin dejar otro espacio para cualquier otra definición. Por fallo Portal de Belén c/Ministerio de Salud s/Amparo 3

Si bien existe una ley de cobertura de Tratamientos de Reproducción Humana Asistida (Ley 26.862 de 2013) hay un vacío legal con respecto a qué se debe hacer con los embriones no implantados 4. El proyecto plantea que con un marco jurídico se protege a los embriones, se evita que se judicialicen situaciones y le da seguridad jurídica a los médicos y pacientes. El proyecto también procura limitar el número de ovocitos a fecundar para disminuir el número de embriones a crio-preservar, prohíbe la comercialización de embriones y la generación de embriones para ser usados sin fines reproductivos ni terapéuticos. Y en este sentido, establece los destinos posibles de los embriones: ser usados por sus titulares para posteriores tratamientos, ser donados con fines reproductivos, ser donados con fines de investigación y cesar su crio-preservación. En caso de silencio por parte de sus titulares o de abandono, los embriones puedan ser usados para investigación.

2 Para una crítica a la referencia de la ley al “contrato” de donación de gametos o preembriones, vid. Pantaleón, quien considera que no pueden ser objeto de contrato en los términos del artículo 234 código civil y comercial de la Nación Argentina. - Bienes fuera del comercio. Están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida: a) por la ley; b) por actos jurídicos, en cuanto este Código permite tales prohibiciones., las cosas como los gametos o preembriones, están fuera del comercio de los hombres cit., en VV.AA., Homenaje al Profesor Roca Juan, y cit., en VV.AA La filiación a finales del siglo XX.... Cit., p.370., en el mismo sentido, Vid. Gomez-Ferrer Sapiña, cit., en Gimeno(coord.), cit., pp.330-331.

3 DERECHO A LA VIDA PÍLDORA CON PRESUNTOS EFECTOS ABORTIVOS. Portal de Belén c/Ministerio de Salud s/Amparo 05/05/2002 – Corte Suprema de Justicia de la Nación <https://defensoria.org.ar/normativas-cdh/portal-de-belen-c-ministerio-de-salud-s-amparo/>

4 PROYECTO DE LEY El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, sancionan con fuerza de Ley de protección de embriones no implantados

Por último, el proyecto permite el diagnóstico genético pre-implantatorio, que sirve para evitar continuar con enfermedades transmisibles entre familias. En la práctica judicial, una cantidad cada vez mayor de fallos señala “que es el Poder Legislativo es el encargado de resolver la cuestión de los embriones no implantados cuando hay algún conflicto derivado de las técnica de reproducción asistida”.

“Una ley de protección de los embriones no implantados es necesaria porque hay un vacío legal que genera inseguridad jurídica”⁵.

Si bien al no tener una normativa que contemple los casos de adopción prenatal, queda facultad de los juriconsultos dirimir los casos en particular. Para nuestra jurisprudencia Nacional, un caso reciente de adopción prenatal sucedido en Paso de los Libres, Provincia de Corrientes., la jueza Marta Rut Legarreta, a cargo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres en la Provincia mencionada, otorgó la adopción de un feto a un matrimonio inscripto en el Registro Único de Aspirantes de la provincia. El fallo genera preocupación ya que podría sentar jurisprudencia en la adopción prenatal, inédita en nuestro país. Corrientes es un «territorio Pro-vida» por decreto, eso significa que la vida del ser humano desde sus inicios está por sobre todo. Se establece como «política de Estado la defensa de la vida». Asimismo, Corrientes se considera una de las provincias con mayor tasa de embarazo adolescente: cada día nacen diez bebés cuyas madres tienen entre 15 y 19 años.

Bajo este contexto la jueza Marta Rut Legarreta ⁶, a cargo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres, emitió un fallo por el cual habilitó la adopción de un feto (significado éste, dado que si se produjera el alumbramiento, sería una persona física, según nuestro Código Civil y Comercial de la Nación), que aún no había nacido. Palabras claves para determinar sentencia fueron “no quiero tener de nuevo otro bebe a la fuerza, producto de una violación”.

5 Daniel Fernando Filmus (nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1955) es un sociólogo, educador y político argentino. Fue Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina durante la presidencia de Néstor Kirchner. Se desempeñó también como Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires durante el período 2007-2013. Fue Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires (2017-2019). Actualmente es Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina.

6 N° 448 Paso de los Libres, 12 de Julio de 2019.- Y VISTOS: Estos autos caratulados LXP 19676/19. "NMR S/ SITUACION DE N.N.A";

Significado que fue contundente para el ejercicio de sus funciones, dando veredicto y sentando precedente para este caso en particular. Palabras concretas según la postura establecida por este fallo particularmente son las citadas por la Dra Aida Kemelmajer de Carlucci 7” tampoco es siempre así, de este modo, una madre puede estar decidida a dar a su hijo en adopción, por ejemplo, ante una violación y no será necesario trabajar con la madre para que el niño permanezca con ella y tampoco para que haya referentes afectivos que puedan hacerse cargo del cuidado del niño, por lo tanto, no sería necesario dejar transcurrir 180 días como lo establece el mismo artículo en el inciso c...”

“Deben profundizarse las intervenciones mediante diagnóstico y seguimiento de la mujer en conflicto con su maternidad, centrado en la manifestación de voluntad libre, seria, esclarecida, tratando de ahondar en sus motivaciones sin una postura condenatoria, disminuyendo las posibilidades de una desvinculación biológica innecesaria. Respetando el derecho de la madre a decidir, siempre que su decisión implique considerar a su hijo sujeto con derechos, no objeto de propiedad”. 8

Según nuestra normativa se considera que un niño está en condiciones de adoptabilidad, cuando después de haber nacido, permanece 45 días junto a su madre. La ley presume que el arrepentimiento se podría dar en ese lapsus de tiempo. Si aún así, al tener al recién nacido en los regazos, posibilitaría la construcción de lazos afectivos y la insistencia dentro del plazo para tal consideraciones, no obstante, permanece el deseo de dar al niño en adopción, el juez declarará su estado de adoptabilidad 9.

7 Kemelmajer de Carlucci. “Tratado de Derecho de Familia”, Tomo III, Pág. 249 y ss.-

8 FONTEMACHI, María A., La práctica en adopción, aspectos interdisciplinarios, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza 2000, pág. 33/34, con prólogo de AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI).-

9 ARTICULO 607.- Supuestos. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta si: a) un niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido, y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo máximo de treinta días, prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada; b) los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco días de producido el nacimiento; c) las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de ciento ochenta días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las causas que motivaron la medida, el organismo administrativo de protección de derechos del niño, niña o adolescente que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al juez interviniente dentro del plazo de veinticuatro horas. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste. El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días.

Es la condición válida o legalmente por el desprendimiento del niño a través del instituto de la adopción reglamentado en el Código Civil y Comercial de la Nación. La obligación de los Jueces y demás funcionarios judiciales es intervenir en la protección de la vida de los embriones crio-congelados, para asegurar su derecho a crecer y a nacer que surge de distintas normas del ordenamiento jurídico de jerarquía constitucional art. 75° inc 22 Carta Magna, y otras de carácter procesal. La adopción de embriones supernumerarios crio-conservados es una alternativa jurídicamente viable para superar la situación de riesgo y abandono que padecen.

La adopción de embriones podría definirse como un procedimiento mediante el cual un embrión, es el fruto de células femeninas y masculinas, se transfiere al útero de otra mujer para ser gestado por ella y su cónyuge (si corresponde). La pareja que adoptó los embriones no se sirvió de un útero de una tercera mujer para su gestación, de esta manera estaríamos refiriéndonos de una "maternidad subrogada". Como en una adopción tradicional, la pareja que adopta al niño no tiene una conexión genética. La diferencia radica que este tipo de adopción, la pareja no tiene que transitar por el difícil proceso legal para ser declarados padres legales del niño. En este caso, la pareja adoptaría "biólogicamente" al bebé durante la etapa temprana del embrión y no cuando ya ha nacido. La adopción de embriones puede ser una opción para aquellas parejas que, son infértiles, desean pasar por la experiencia de lo que significa transitar un embarazo. Ello también es una opción para aquellas parejas en los que uno de ellos es infértil, pero quieren tener una relación genética igualitaria con el bebé. Por lo tanto, existe la posibilidad de adoptar embriones humanos como forma o posibilidad de evitar su destrucción, en los siguientes casos:

- 1. Cuando los padres biológicos ya no quieren otro hijo.**
- 2. Cuando estos embriones son "huérfanos", es decir, que sus padres habían muerto.**

Por lo tanto, la adopción puede resolver principalmente dos problemas:

- 1. la infertilidad de algunas parejas (desde un punto de vista médico).**
- 2. La destrucción de embriones indefensos.**

Lo que se analiza aquí es una solución digna para evitar la destrucción de miles de embriones que ya están crio-conservados. Sin embargo, el remedio más efectivo sería una norma que impida la fertilización de un número indiscriminado de óvulos. Por lo tanto, sólo los cigotos que vayan a ser transferidos deben ser fertilizados. Con esto, la ética de las técnicas de reproducción humana asistida no está justificada, pero se propone una posible forma de remediar un mal que ya está hecho, basado en el problema moral del "mal menor". En algunas circunstancias puede ser moralmente legal permitir daños (en el caso de la fertilización in vitro) en atención a un bien superior (la vida de los embriones) o para evitar daños más grande (muerte del embrión) 10. Tomás de Aquino estableció que pertenecía al sabio legislador permitir transgresiones menores para evitar males mayores. En consecuencia si estos embriones no pueden transferirse a la madre biológica, se propone la posibilidad de transferirlos a otra mujer que va a albergar a ese nuevo ser. Algunos llaman a la adopción prenatal a aquella que no habrá daños, a la unidad, ni un desequilibrio de las relaciones de parentesco, ya que el embrión estaría, desde un punto de vista genético, en la misma relación con ambos padres adoptivos 11 (la misma situación que una adopción tradicional). Además, los lazos que se establecen entre quién es adoptado como embrión y los adoptantes podrían aliviar algunos problemas psicológicos que se observan en algunas adopciones tradicionales.

Desde un punto de vista técnico-médico, puede haber dos formas de llevar a cabo el proceso de adopción de embriones. Una sería recibir embriones. "Crio-preservados" preexistentes donados por sus padres biológicos, y el otro sería crear embriones para ser adoptados más tarde. Aunque ambos métodos dan como resultado un ser humano que no está genéticamente conectado con sus padres adoptivos, desde un punto de vista ético y emocional, estos dos caminos para la adopción de embriones son completamente diferentes 12.

10 Cfr. AGUILÓ PASTRANA, Alfonso. "El problema del mal menor. Tolerancia (18) El problema del mal menor". Dirección en Internet: . Fecha de consulta: 27 de enero de 2006

11 Cfr. FAGGIONI, Maurizio. La cuestión de los embriones congelados. Disponible en: . Acceso en: 23 de enero de 2009.

12 Cfr. LEWIS COOPER, Susan; SARAHSOON GLAZER, Ellen. Choosing Embryo Adoption. Dirección en: . Fecha de consulta: 26 de enero de 2009

La adopción de embriones fruto de técnicas de fecundación in vitro en este caso, los embriones excedentes resultantes de un FIV, cuyos padres genéticos ya no los quieren, se les da en adopción a parejas infértiles para que se implanten en el útero de la mujer y se crían como sus hijos propios. La pareja adopta uno o más embriones excedentes que seguramente están "crio-preservados". Debido a la existencia del problema de los embriones congelados, el poder de darlos en adopción es una solución que evita que sean destruidos o sujetos a investigación, de allí la frase de Santo Tomás de Aquino, que se realiza "un mal menor para no causar males mayores" todo converge a un mismo fin. La adopción les da la oportunidad de crecer en un útero materno y que tienen una familia en la que se desarrollan como seres humanos. La posibilidad de vivir, que es lo más importante, independientemente de si alcanzan un plazo o no.

La idea de dar estos embriones a otras parejas infértiles para su adopción, se acerca mucho a la adopción tradicional; A los embriones excedentes se les ofrece un destino legítimo y altruista para lograr el desarrollo y creación dentro de una familia estable y, además, ofrecer a estas parejas la oportunidad de experimentar embarazo. Cabe la otra variante de producir embriones para ser adoptados. Los mismos se fertilizan con espermatozoides y óvulos de donantes seleccionados. Esta selección puede hacerse en base a los criterios de los padres adoptivos.

Esta opción se desvía de la idea original que implica una adopción. En una adopción tradicional nunca estará involucrada con la intención de concebir un niño que será adoptado pronto. En este sentido, la opción propuesta aquí, es que la adopción de embriones preexistentes garantiza a los padres adoptivos que estos fueron concebidos por una pareja que deseaban profundamente la paternidad y que luchaban por lograr ese sueño. Aquí radica el contraste de que una pareja unió sus células con el fin de complacer a otra y no por voluntad propia de ser padres.. La opción de producir embriones para ser adoptados se asemeja a las prácticas eugenésicas en las que los padres adoptivos conciben una especie de

10 Cfr. AGUILÓ PASTRANA, Alfonso. "El problema del mal menor. Tolerancia (18) El problema del mal menor". Dirección en Internet: . Fecha de consulta: 27 de enero de 2006

11 Cfr. FAGGIONI, Maurizio. La cuestión de los embriones congelados. Disponible en: . Acceso en: 23 de enero de 2009.

12 Cfr. LEWIS COOPER, Susan; SARAHSOON GLAZER, Ellen. Choosing Embryo Adoption. Dirección en: . Fecha de consulta: 26 de enero de 2009

niño en un dibujo: eligiendo características de un fototipo especial o con ciertas inclinaciones o aptitudes e inclinación para ciertas cosas. Solo deberían ver las características de los donantes y, en función de ellas, elegir gametos para crear un niño ideal. Aquí, podríamos llamar que surgen niños de primera clase, que son aquellos seleccionados cuidadosamente con características especiales, y niños de segunda, son aquellos cuyos padres los tuvieron por naturaleza propia y acto volitivo, la fortuna de una concepción sin intervención de terceras personas ni ciencias. Además, hay miles de embriones "crio-preservados" y no es éticamente correcto fertilizar a otros para este propósito. Las razones para elegir adoptar embriones es que muchas personas que están tanto fuera como dentro del campo de la infertilidad se preguntan por qué una pareja debería elegir adoptar un embrión o en lugar de adoptar un niño ya nacido. Hay algunas razones que pueden ser dirimidas sobre esto, basados en un programa de adopción de embriones que ya fue realizado en los Estados Unidos ¹³.

1. Dar sus embriones para adopción permite a los padres genéticos participar en la selección de los padres adoptivos y en la vida del niño o los niños nacidos de ese proceso.
2. Para aquellas parejas que han experimentado infertilidad durante mucho tiempo, la adopción de embriones ofrece la oportunidad de experimentar un embarazo, dar a luz y, además, disfrutar de la paternidad.
3. Durante el embarazo, la adopción de embriones proporciona a las parejas un vínculo emocional con el niño antes del nacimiento.
4. Además, las mujeres tienen control sobre el medio ambiente y sus alrededores cuidado prenatal, eliminando así problemas potenciales causados por condiciones insalubres durante el embarazo.
5. La adopción de embriones también permite que la pareja adoptiva tenga garantía de conocer el origen del niño, información médica desarrollo social y psicológico de sus padres genéticos (algo que no sucede en una adopción tradicional).

¹³ Cfr. LEWIS COOPER, Susan; SARAHSOON GLAZER, Ellen. Choosing Embryo Adoption. Dirección en: . Fecha de consulta: 26 de enero de 2009

¹⁴ Incluso se puede conocer su RH+-

6. La adopción de embriones ofrece privacidad a la pareja.

Por otro lado, la adopción de embriones abarca los siguientes beneficios:

Evita las molestias inherentes a la estimulación ovárica ¹⁵, disminuye el costo económico de la técnica, ya que uno no tiene que pasar por todo el proceso de fertilización in vitro, y también disminuye las parejas en la lista de espera para su adopción convencional, cuya causa de infertilidad no está asociada con ninguna patología uterina ¹⁶.

Aun así, la adopción de embriones no debe seleccionar el género del niño cuando adopta ¹⁷, como en la mayoría de los casos de adopción ni pueden cambiar de opinión y rechazar al niño si el nacido tiene alguna enfermedad o defecto físico. Sin embargo, la adopción de embriones puede presentar dificultades emocionales, ya que no hay garantía de que sea posible tener un hijo., debido a la baja tasa de éxito de la técnica utilizada. Pero, aun así, es importante tratar de dar la posibilidad de vivir a estos miles de seres humanos que ya están congelados y que de otra manera dar forma a tu destino sería la muerte con la destrucción o dejar cesante la crio-conservación. Con un solo embrión que puede nacer, valió la pena intentarlo, ya que la vida humana no tiene precio ¹⁸.

15 Deben preparar a la mujer para que su útero pueda recibir los embriones.

16 Las anomalías uterinas son responsables de la infertilidad en el 2% de los casos. aproximadamente Ejemplos de anomalías uterinas asociadas con infertilidad son las deformidades congénitas del útero, "leiomiomas y escarificaciones o adherencias intrauterino" (síndrome de Asherman). De todos ellos, los "leiomiomas" son los más frecuentes. En algunos casos, los "fibromas submucosos" pueden interferir con implantación y / o desarrollo embrionario y causar abortos. Fibromas Grandes "intramuros" pueden distorsionar la cavidad uterina y afectar la implantación. El Los "subserosos" rara vez afectan la infertilidad, a menos que compriman las trompas de Falopio "Falopio", bloqueando el acceso de los espermatozoides al óvulo. Síndrome de Asherman puede estar asociado con hipomenorrea o amenorrea, generalmente secundaria a legrado agresivo después del aborto, infección intrauterina, miomectomía, metroplastia o placenta retenida. Esta situación crea un entorno muy desfavorable para la implementación. Ver GONZÁLEZ, Alejandro. Unidad de Reproducción Asistida, Policlínica San Mauricio, Jerez de la Frontera Cádiz, "Técnicas básicas de diagnóstico en el estudio de esterilidad conyugal ". Dirección en: <http://www.sefertilidad.com> . Página web de la Sociedad Española de Fertilidad SEF. Consulta de clausura: 27 de enero de 2007

17 En este tema de no elección del sexo, el art. 14 del Acuerdo sobre Derechos humanos y biomedicina adoptada en Oviedo, el 4 de abril de 1997, que establece: "No se permitirá el uso de técnicas de reproducción médica asistida con el propósito elegir el sexo de la persona que va a nacer, excepto en los casos en que sea necesario evitar una enfermedad hereditaria grave relacionada con el sexo ".

18 En los Estados Unidos, 134 niños nacieron como resultado del programa Snowflakes Adopciones de embriones. Datos obtenidos en: <http://www.nightlight.org/snowflakeadoption.htm> . Acceso en: 30 fuera. 2008

Se refiere en estos casos, dado que la transferencia embrionaria por salud de la gestante se realizan una transferencia de un embrión, eventualmente dos o excepcionalmente tres. Será facultad del médico tratante evaluar las condiciones clínicas de la mujer que vaya a llevar a cabo la gestación.

Para evaluar el derecho comparado, analizamos la legislación española.

España, con la Ley Nº 35/1988, de 22 de noviembre, de Técnicas de Reproducción Asistida, y con la Ley Nº 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y uso de embriones humanos y fetos o sus células, se convirtió en uno de los países pioneros, junto con Noruega y Suecia, en regular por completo las nuevas técnicas de reproducción humana. En ese momento, había aproximadamente 700,000 parejas infértiles, de las cuales El 40% podría haberse beneficiado de FIV y el 20% de la inseminación artificial. En ese momento, ya había 13 bancos de gametos y 14 centros en los que se realizaba dicha técnica ¹⁹. Posteriormente, con la Ley Nº 45/2003, se modificó la Ley Nº 35/1988 para responder a nuevos problemas, como el destino de los embriones excedentes. Finalmente, con la Ley N ° 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de reproducción humana asistida, hubieron novedades que podrían resolverse de la siguiente manera ²⁰.

- 1. El concepto de "pre-embrión"; es aquel que está constituido in VITRO como un grupo de células resultante de la división progresiva del "ovocito" desde su fertilización hasta 14 días después ²¹.**
- 2. La clonación en humanos con fines reproductivos está absolutamente prohibida.**
- 3. La posibilidad de realizar investigaciones con embriones excedentes y las disposiciones de la Ley 45/2003, que limitó la investigación de embriones congelados antes de la entrada en vigor de la ley.**

19 Preámbulo de la Ley Nº 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción. Asistido Disponible en: <http://www.noticias.juridicas.com/lec/Admin/135-1988.html> . Consultado el 19 de mayo de 2003.

20 Ley N ° 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, BOE 126, de 27 de mayo de 2006.

21 Esta legislación aún acepta el término preembrionario y no justifica el término como lo hizo en el Preámbulo de la Ley N ° 35/1988, en el que se argumentó que esta expresión también adoptado por los Consejos Europeos de Investigación Médica de nueve naciones (Dinamarca, Finlandia, República Federal de Alemania, Italia, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Austria y Bélgica). En lugar de un preembrión, debería llamarse embrión en un preembrión. -implantadora, porque estamos ante un ser humano único e irrepetible en su primera etapa de existencia

- 4. Los límites establecidos por la Ley N ° 45/2003 22 para el generación de "ovocitos" en cada ciclo reproductivo, límites que deberían derivarse exclusivamente de las indicaciones clínicas de cada caso, pero solo continúa autorizando la transferencia de un máximo de tres embriones en una mujer en cada ciclo reproductivo.**
- 5. El diagnóstico genético previo a la implantación está autorizado para la medición de enfermedades hereditarias graves y no es susceptible al tratamiento terapéutico curativo posnatal, para la realización de otros cambios que pueden comprometer la viabilidad del embrión.**
- 6. Además del registro de donantes de gametos y pre-embiones con el propósito de reproducción humana ya existente. Centros de actividades de reproducción asistida. En el primero, registre los hijos nacidos de cada donante, la identidad de las parejas o mujeres receptoras. En el segundo, el datos sobre la tipología de técnicas y procedimientos, tasas de éxito y otras cuestiones para proporcionar a los ciudadanos información suficiente sobre la calidad de los centros que practican estas técnicas. El número de embriones que se mantienen congelados en cada centro también se registrará y la obligación establecida por el Ley previa para enviarlos al Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa.**
- 7. En relación con la previsión del esposo, la afiliación solo se reconocerá cuando su material reproductivo esté en el útero de la madre. Sin embargo, el esposo puede dar su consentimiento para que su material de reproducción pueda ser usado para fertilizar a su esposa en los 12 meses siguientes después de su muerte.**
- 8. El contrato por el cual el embarazo se reemplaza por sustitución (maternidad subrogada) se considera nulo y sin efecto.**
- 9. Exceso de embriones de FIV que no se transfieren a las mujeres en un ciclo reproductivo pueden ser crio-preservadas en bancos autorizados Esta conservación tendrá lugar hasta el momento que médicos de entidades oficiales con la participación de especialistas fuera del centro, certifique que el destinatario no cumple con los requisitos apropiados para practicar la reproducción asistida.**

El posibles destinos que pueden tener los embriones crio-preservados son:

- a) Su uso en la mujer misma o su cónyuge.**
- b) Donación para fines reproductivos (adopción).**
- c) Donación para fines de investigación**
- d) El fin de su conservación (destrucción). Esta última opción solo será aplicable cuando el tiempo máximo de conservación establecido por ley, sin haber optado por ninguna de las otras tres opciones.**

En el caso de embriones crio-preservados en exceso, la mujer o la pareja de padres debe renovar el consentimiento informado previamente firmado cada dos años para que sus embriones tengan el destino que han elegido. Si, durante dos renovaciones consecutivas, no existe la firma del consentimiento correspondiente, el centro en el que están crio-preservados los embriones podrán disponer de ellos para cualquiera de los fines antes mencionados, manteniendo los requisitos de confidencialidad, anonimato ²³. Así es como la legislación española abre la posibilidad a las parejas, que, después de someterse a ciclos de fertilización in vitro, no desea tener más niños y todavía tienen embriones congelados, "donan" o ceden en adopción La adopción de embriones no requiere procedimientos oficiales . Los donantes firman un consentimiento, renunciando a cualquier acción para demuestre su paternidad y acepte el carácter sin fines de lucro de su actuar. Los embriones que se transfieren provienen de parejas que viven en otras comunidades autónomas o países, para evitar la coincidencia de hermanos. Asimismo, se recomienda que la mujer receptora sea menor de 35 años. (aunque hay donaciones para mujeres mayores) y el hombre no mayor de 50 años. Se transfieren de dos a tres embriones, y la donación es anónima. En cuanto al tema, hay proyectos como el iniciado por el Instituto. Marqués de Barcelona, en colaboración con el Centro Médico Internacional Advanced (Cima), que en 2005 lanzó un programa de adopción de embriones quien pretendía utilizar embriones excedentes, provenientes de pacientes ya había satisfecho su deseo reproductivo, con

23 De acuerdo con la Ley N ° 14/2006, mencionada anteriormente.

el coraje de ofrecerles embriones la posibilidad de vivir, ayudándoles a encontrar padres ²⁴.

Aunque la donación de embriones es gratuita, el procedimiento cuesta aproximadamente 2.250 euros y, según el Centro, la probabilidad de éxito en el embarazo es aproximadamente del 32%. El procedimiento consiste en preparar el útero de la mujer usando algunos parches que se aplican sobre la piel y las pastillas vaginales para recibir embriones. Después de unos días, los embriones se descongelan, luego de su elección para su transferencia. El examen de embarazo se realiza en 14 días. Y, si su resultado es positivo, el tratamiento continúa por otros dos meses. Posteriormente, la mujer embarazada es vista por su ginecólogo habitual ²⁵. Aunque este programa habla de "adopción de embriones", en realidad hay equivalente al concepto de "donación de embriones" mencionado en la ley.

España es uno de los primeros países en incluir expresamente en su legislación, la posibilidad de llevar a cabo la adopción de embriones. Con su legislación, evita la brecha legal en otros países, como el México. Sin embargo, hay países en los que la adopción de embriones también es permitido, como es el caso en Inglaterra y los Estados Unidos, y en otros, como Alemania, esta posibilidad no existe, ya que la ley solo permite fertilización de los óvulos que se implantarán de manera efectiva y que no se producirán embriones en exceso o supernumerarios. Como consecuencia de este hecho, más de uno un tercio de las adopciones que tienen lugar en España involucran parejas extranjeras, principalmente de Francia, Portugal e Italia ²⁶. Es la ciencia que nos ha dado la oportunidad de servirnos de sus avances. La adopción de embriones es una gran elección. Da para aquellas parejas infértiles que no pueden llevar a cabo sus deseos el paso a gestar en el vientre un embarazo. Sentir todas las sensaciones que eso produce psíquicamente a una mujer con todos los anhelos y esperanzas que ella pone de su ser.

²⁴ "Programa de adopción de embriones". Disponible en: http://www.institutomarques.com/programa_adopcion_embryones.html. Acceso en: 21 ene. 2009

²⁵ Cfr. Idem

²⁶ Ver VEGA M. et al. "Regulación de la reproducción asistida en el contexto europeo. Derecho comparado". Disponible en: <http://www.bioeticaweb.com/content/view/275/765/lang.es/>. Acceso en: 12 ene. 2009

Hay miles de embriones excedentes que están a la espera del derecho a la vida. Es una forma, la adopción, de marcarles un destino distinto a la destrucción.

Son personas latentes con todo un potencial genético humano que esperan por tiempo en un estado inanimado el momento de formar parte de algo, ese algo que nos pertenece a todos y es LA VIDA.

Si la vida humana es un valor absoluto e incommensurable, entonces se debe hacer todo lo posible para salvar la vida de una persona. Por lo tanto, la adopción se presenta como una solución legal al problema de los embriones congelados, dar la dignidad de la persona y como derecho propio la posibilidad de un desarrollo a la luz de todos.

CONCLUSIONES

Pacientes que se someten a técnicas de fertilización in vitro (FIV) y poseen embriones supernumerarios, es decir, son aquellos embriones de calidad que pueden ser crio-preservados para implantación en un futuro. La donación de los mismos para otras parejas con fines reproductivos es una opción a todas luces de mejor coste y adaptabilidad psicológica para la donante y la receptora. Estos embriones proceden de parejas que se han sometido a tratamientos de doble donación de gametos, ovocitos y espermatozoides.

Con el fin de haber conseguido el resultado deseado de la concreción de ser padres., deciden donar los embriones para que otras parejas alcancen su objetivo aspreciado.

En otras ocasiones se trata de embriones generados a partir de gametos donados., esto significa material genético masculino y femenino.

Dado que no precisa de la selección de una mujer donante compatible, ni de procesos de estimulación ovárica controlada, pues la labor del laboratorio de FIV se limita a la descongelación, observación y posterior transferencia del embrión superviviente. Los costos del procedimiento se reducen notablemente.

La adopción de embriones generalmente es solicitada por una gran variedad de pacientes. Parejas que por motivos morales o religiosos, físicos o de género., deciden no generar sus propios embriones y adoptar embriones, los cuales permanecían crio-preservados; parejas que ante la posibilidad de realizar una doble donación como solución a su problema reproductivo, optan por la adopción de embriones; mujeres que deciden ser madres sin pareja; parejas que por motivos económicos no pueden asumir el coste de otro tipo de tratamientos, así como otras situaciones personales. Por último, la adopción de embriones presenta una ventaja más. En este caso no asociada a las parejas que adoptan, sino a las parejas que libremente los donan. El hecho de ayudar a otras parejas a conseguir una gestación tan deseada constituye un beneficio emocional, y permite dar un destino a los embriones que permanecerían crio-preservados ad eternum,, con un futuro incierto de supervivencia y el sesgo mismo del derecho a la vida.

BIBLIOGRAFÍA

- Adopciones de embriones. Datos obtenidos en: <http://www.nightlight.org/snowflakeadoption.htm> . Acceso en: 30 fuera. 2008
- ARTICULO 607.- Supuestos. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad
- Cfr. AGUILÓ PASTRANA, Alfonso. “El problema del mal menor. Tolerancia (18) El problema del mal menor”. Dirección Internet: . Fecha de consulta: 27 de enero de 2006
- Cfr. LEWIS COOPER, Susan; SARAHSN GLAZER, Ellen. Choosing Embryo Adoption. Dirección en:.. Fecha de consulta: 26 de enero de 2009 Incluso se puede conocer su RH+-
- DERECHO A LA VIDA PÍLDORA CON PRESUNTOS EFECTOS ABORTIVOS. Portal de Belén c/Ministerio de Salud s/Amparo 05/05/2002 – Corte Suprema de Justicia de la Nación <https://defensoria.org.ar/normativas-cdh/portal-de-belen-c-ministerio-de-salud-s-amparo/>
- FONTEMACHI, María A., La práctica en adopción, aspectos interdisciplinarios, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza 2000, pág. 33/34, con prólogo de Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI).

- **GONZÁLEZ, Alejandro.** Unidad de Reproducción Asistida, Policlínica San Mauricio, Jerez de la Frontera Cádiz, "Técnicas básicas de diagnóstico en el estudio de esterilidad conyugal ". Dirección en: <http://www.sefertilidad.com> . Página web de la Sociedad Española de Fertilidad SEF. Consulta de clausura: 27 de enero de 2007
- **Kemelmajer de Carlucci.** "Tratado de Derecho de Familia", Tomo III, Pág. 249 y ss.-
- **Ley N ° 14/2006,** de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, BOE 126, de 27 de mayo de 2006.
- **Ley 26862** Reproducción medicamente asistida. Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción medicamente asistida. Sancionada el 5 de junio del 2013. Promulgada de hecho: 25 de junio del 2013
- **Ley de protección de embriones no implantados** <https://salud.gob.ar/dels/entradas/el-status-juridico-del-embrion-noimplantado>
- **N° 448** Paso de los Libres, 12 de Julio de 2019.- Y VISTOS: Estos autos caratulados LXP 19676/19. "NMR S/ SITUACION DE N.N.A";
- **Preámbulo de la Ley N° 35/1988,** de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción. Asistido Disponible en: <http://www.noticias.juridicas.com/lec/Admin/135-1988.html> . Consultado el 19 de mayo de 2003.
- **Profesor Roca Juan, y cit.,** en VV.AA La filiación a finales del siglo XX.... Cit., p.370., en el mismo sentido,Vid.Gomez-Ferrer Sapiña, cit., en Gimeno(coord.).,cit., pp.330-331.
- **"Programa de adopción de embriones".** Disponible en: http://www.institutomarques.com/programa_adopcion_embriones.html . Acceso en: 21 ene. 2009 Cfr. Idem
- **PROYECTO DE LEY** El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, sancionan con fuerza de Ley
- **VEGA M. et al.** "Regulación de la reproducción asistida en el contexto europeo. Derecho comparado ". Disponible en: <http://www.bioeticaweb.com/content/view/275/765/lang,es/> . Acceso en: 12 ene. 2009

Jornada Académica

en Derecho Penal y Procesal Penal



Dr. Giovanni Rionero

Profesor de Postgrado de Derecho Penal y Procesal Penal en la UCV, UCAB y USM.

Primer Segmento:

La teoría del delito en la resolución de casos penales.

Segundo segmento:

Las sentencias que cambiaron el proceso penal



Dr. Leonardo Pereira

Abogado con diversos postgrados y maestrías, Dr. en Jurisprudencia y PHD en Seguridad Ciudadana y Paz, Autor de 25 libros de derecho procesal penal, literatura y poesía

Tema: La presunción de inocencia y el rol de la defensa técnica en el proceso penal.



Dr. Marco Medina

Magistrado Emérito del Tribunal Supremo de Justicia, Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Zulia.

Responsabilidad penal en el deporte (primer segmento)
Participación de la víctima, control material del ejercicio de la acción penal y optimización del juicio como expresiones axiológicas del proceso (segundo segmento)

DAFA

Despacho Andarcia Febres
& Asociados

sábado **13** abril
2024

Info: Cel: 0424-935 7576 / 0424-9469549 / 0412-0383496



dinastiaoosorioconsultores
molero.mariela

Av. libertador, Edf. Dinastía Osorio N° 21

📍 Ciudad Bolívar



*Joselino del Valle Serrano Martínez**
Venezuela



La Seguridad Privada, en la República Bolivariana de Venezuela, constituye una actividad lícita, que es regulada por el Estado Venezolano a través del ente rector de la seguridad ciudadana en el país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, ubicándose expresamente dentro de su estructura organizativa se ubica el Viceministerio de Seguridad Ciudadano donde se encuentra adscrita la Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada encargado de regular, autorizar, supervisar, fiscalizar, controlar y revocar, de manera eficiente y eficaz, las actividades de las personas jurídicas que prestan servicios privados de vigilancia y seguridad en el país.

En esta dirección, es abordada la seguridad privada bajo el enfoque del ordenamiento jurídico vigente observando los instrumentos legales conforme a una porción de los contenidos teórico-jurídicos inherentes a la misma, secuenciándose el orden de los mismos de acuerdo con el filósofo austriaco Johannes Kelsen (1881-1973) a través del Modelo Doctrinal denominado Pirámide Kelsiana, por cuanto la política pública de seguridad ciudadana denominada Gran Misión Cuadrantes de Paz, establece el apoyo de la Seguridad Privada para el fortalecimiento constructivo de la Seguridad Ciudadana en el país.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

También llamada Carta Magna, establece en el artículo 112, que las personas podrán, “dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano,

***Geógrafo egresado de la Universidad de Los Andes. Oficial en Situación de Reserva Activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Docente de Pregrado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Consultor en Seguridad Privada. Correo Electrónico: joselino.serrano@gmail.com**

seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social” fundamentado tal contenido la iniciativa privada en el país para la conformación del sector privado dirigido al ejercicio de actividades económicas lícitas en el país, distinguiéndose entre estas, las Sociedades Mercantiles como Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, orientadas por razones de seguridad a la prestación de un servicio remunerado para la sociedad en función de la prevención de riesgos y generando según sus posibilidades, condiciones de seguridad en el entorno donde sea prestado el servicio.

Asimismo es destacado, que en el artículo 299, establece que el sistema socio-económico del país, está encauzado para, “asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad”, para ello, “el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población” (Ib.) específica y especialmente, mediante los emprendimientos y actividades socio productivas privadas generadas por las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada conforme a la contratación por parte del sector público o privado para la prestación única y exclusiva del servicio de vigilancia y seguridad privada, constituyendo una fuente confiable de trabajo contributivas al sistema socio-económico, sin que ello, constituya la asunción de una responsabilidad intransferible del Estado Venezolano: la Seguridad.

Por consiguiente, las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, son contratadas ante la comercialización de un servicio de consumo lícito y negociable en el mercado laboral de la seguridad privada, conforme a las capacidades y soluciones que puedan ser ofrecidas para la reducción de riesgos y la prevención de hechos delictivos, dada la dirección de acciones para la formación de condiciones que tributen hacia la producción de un ambiente seguro a favor de las demás personas donde resulta necesario complementar a los Cuerpos de Policía que ejercen por su parte y en forma exclusiva el Servicio de Policía, enmarcado en la definición teórico-jurídica de la Seguridad Ciudadana.

Todo esto y según la demanda de los ámbitos y sectores, que requieran la permanencia y exclusividad de la protección del patrimonio tangible e intangible, conforme al contexto del requerimiento en forma total o parcial de manera de permanente o paulatina, sea precisado y delimitado en espacios físicos y horarios explícitos; el resguardo de la integridad física de las personas, así como de los bienes tanto privados como públicos, dadas las especificaciones de la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada según el caso, siempre enmarcadas dentro del ordenamiento jurídico vigente en el país.

LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

Este instrumento jurídico, establece en el artículo 1, la protección del trabajo como, “hecho social” además de, “garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras creadores de la riqueza socialmente producida, y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia”, de ahí, que las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada deben promover el estímulo hacia el desarrollo humano a través de las jornadas laborales desempeñadas por cada trabajador y trabajadora mediante una conciencia ética y en pro del bienestar de cada ciudadano al contribuir con; percibiendo por parte de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada un sueldo en retribución que permita la cancelación de los bienes y servicios necesarios para tener bienestar y sostener la calidad de vida.

DECRETO N° 1.453, CON FUERZA DE LEY DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Destaca entre sus contenidos teórico-jurídicos, el artículo 1 se, “entiende por Coordinación, el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo Nacional, los estados y los municipios, unen esfuerzos para la ejecución de acciones tendentes a desarrollar los principios de comunicación, reciprocidad y cooperación que permitan garantizar la Seguridad Ciudadana” conforme a la participación de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada de acuerdo con lo dispuesto, en la Constitución y el Sistema Popular de Protección para la Paz dados los vértices de interés de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, dada la conjunción de la seguridad

ciudadana junto a la seguridad privada para el fortalecimiento de la primera como, “estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades” (Ib.) donde confluyen de forma coordinada junto a los Cuerpos de Policía, las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, dentro para la prestación eficaz y eficiente del servicio de policía junto al servicio de vigilancia y seguridad privada.

DECRETO N° 1.471, MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL SISTEMA POPULAR DE PROTECCIÓN PARA LA PAZ

Establece en el artículo 1 dicho sistema como un, “un mecanismo de articulación Innovador, eficiente, revolucionario”, que incorpora las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada como entes encargados de la seguridad privada en el país junto, “los poderes del Estado, a nivel nacional, estatal, municipal, el Poder Popular y los gobiernos comunales, para que de forma Integrada, junto a la participación y aportes de interés social del sector privado para que, “se promueva y materialice un nuevo modo de planificación de política criminal, Impulso y ejecución de los planes en materia de Seguridad Ciudadana contra cualquier amenaza Interna o externa”, específicamente, la Delincuencia Organizada.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4, precisado en el numeral 3, “SUBSISTEMA PROTECCIÓN” que establece la participación entre, “la Seguridad Pública y Privada, para fortalecer y garantizar la protección a la ciudadanía” constituyendo tal contenido en el fundamento del objeto de estudio de la investigación, dada la necesidad de generar contenidos que sustenten el modelo de unificado de operación de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada en el marco del Sistema Popular de Protección para la Paz.

DECRETO N° 4.078, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA GRAN MISIÓN CUADRANTES DE PAZ

Conforme al artículo 2, esta Gran Misión, “tiene por objeto implementar un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad integral” para su disfrute como derecho por la población conforme a la participación de

las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada junto a los Cuerpos de Policía, dado el carácter complementario del servicio de vigilancia y seguridad privada, respecto al servicio de policía.

A lo sumo, el artículo 3, establece sus fines en el numeral 2 para, “fortalecer la consolidación y expansión de los Cuadrantes de Paz”, considerando, “la modalidad de interacción dinámica, activa y contextualizada en el entorno donde se desarrollan las labores de prevención” mediante la vinculación participativa con las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, que prestan sus servicios dentro del cuadrante de paz, a fin de sostener un intercambio fluido de información respecto a los riesgos y amenazas presentes en el mismo que puedan incidir desfavorablemente para la seguridad ciudadana, por cuanto:

El numeral 4 se relaciona con, “una mayor comprensión los factores criminógenos presentes en los Cuadrantes de Paz, así como las diversas expresiones de criminalidad y delitos de alta complejidad” que puedan cernirse sobre el bien protegido por las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo tanto,

Mientras, que el numeral 5, se orienta para, “asegurar la capacidad operativa de los Órganos de Seguridad Ciudadana y de apoyo para el despliegue en los Cuadrantes de Paz” mediante el empleo racional de los recursos tecnológicos disponibles para el encuentro e intercambio de información de interés para el fortalecimiento de la protección brindada en el cuadrante de paz, especialmente, por vía de los recorridos del servicio de vigilancia y patrullaje desarrollados por el Cuerpo de Policía asignado al cuadrante.

Y, el numeral 7, ante la promoción de, “la proximidad asertiva en la prestación de los servicios que ejecutan los órganos policiales y militares” respecto a las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada que prestan servicio de vigilancia y seguridad privada dentro del cuadrante de paz, esto, persigue fortalecer los esfuerzos empeñados en pro del fortalecimiento del contexto favorable para el desempeño de los principios, valores, deberes, derechos y garantías constitucionales en al marco de la seguridad de la Nación, transversalizada por la seguridad

ciudadana con la inclusión de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, por cuanto, el artículo 4 alusivo a los vértices de la Gran Misión Cuadrantes de Paz donde despunta en forma lineal respecto a la seguridad ciudadana el vértice 4, “Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3)” como nueva forma de abordaje de la criminalidad.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Establece en el artículo 1, el objeto del servicio de vigilancia y seguridad privada, “en beneficio de personas naturales o jurídicas, y sus bienes”, de ahí, que tal contenido traslade hacia el respeto y promoción mediante su fortalecimiento a través de una organización securitaria, reconocida por el Estado Venezolano, por cuanto, su objeto orienta a la garantía del derecho a la vida, la libertad y la seguridad, aunado el derecho a la propiedad, dado el accionar de la seguridad privada orientado a la salvaguarda de tales derechos fundamentales.

Debe señalarse, que el artículo 2, establece que los servicios a ser prestados deben, “absoluto respeto a la Constitución, a los Tratados o Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República que la materia, a lo previsto en este Reglamento y a otras normativas aplicables”, en este sentido, es importante aclarar que la prestación de tal servicio se enmarque en los alcances que compete para la salvaguarda y la defensa del derecho humano fundamental de la seguridad, dadas las competencias que confiere el ordenamiento jurídico vigente.

A este tenor, el artículo 3, especifica los servicios a ser prestados y remunerados:

- 1. Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada.**
- 2. Servicio de Traslado y Custodia de Valores.**
- 3. Servicio de Transporte y Custodia de Personas y Bienes.**
- 4. Servicio de Protección de Personas y Bienes.**
- 5. Servicio de Escolta Civil de Personas.**

En efecto, resulta de interés el abordaje correspondiente al artículo 4 para alcanzar la comprensión del Servicio de Vigilancia y Seguridad

Privada conforme al numeral 1 de dicho artículo donde es establecido para, “brindar seguridad a patrimonios propios o de terceros” que contraten la prestación de dicho servicio.

Todo ello, conforme a lo establecido en el numeral 2 donde son tipificadas las, “actividades de seguridad, control de acceso, control de pérdida y servicio de protocolo prestado en espacios privados de uso público y en locales destinados a la recreación o con ocasión del desarrollo de espectáculos públicos” que concentren numerosas personas en espacios definidos.

Conforme con los contenido del numeral 3 orientado hacia el empleo de las tecnologías diseñadas para labores de seguridad a través de la, “instalación y monitoreo de cámaras de seguridad, circuitos cerrados, medios aéreos no tripulados, sensores de movimientos, cercos eléctricos, telefonía móvil, sistemas de alarmas, GPS, entre otros”

En atención al numeral 4, ante las actividad que, “impliquen logística, servicios especiales de capacitación y asesorías en el área de vigilancia y seguridad privada” para su desempeño y prestación conforme a los requerimientos expuestos por la parte contratante del servicio.

Al igual, que las demás actividades inherentes previstas en el numeral 5 según la, “prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada”, especialmente, en el marco del Sistema Popular de Protección para la Paz conforme al subsistema de protección en función de la unicidad operacional de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada en el contexto de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Venezuela. Constitución. (2000, 30 de enero). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria, N° 5.453, marzo 24, 2000.**
- **Venezuela. Decreto N° 1.453, con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.318, noviembre 6, 2001.**
- **Venezuela. Decreto N° 1.471. Sistema Popular de Protección para la Paz (2014, noviembre 19). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.582, enero 16, 2015.**

- **Venezuela. Decreto N° 4.078 (Mediante el cual se crea la Gran Misión Cuadrantes de Paz, concebida como un conjunto concentrado de políticas públicas con alcance nacional y expresión focal en micro territorios denominados Cuadrantes de Paz). (2020, Marzo 13). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 41.786, diciembre 20, 2019.**
- **Venezuela. Ley Orgánica del Trabajo. Los Trabajadores y las Trabajadoras. En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076E, mayo 7, 2012.**
- **Venezuela. Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (2018). En Asamblea Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.364, febrero 16, 2018.**



INCOMPATIBILIDADES FILOSÓFICAS INTERGENERACIONALES

Sergio Andrés Salinas*
Venezuela



Antes de comenzar con el tema de actualidad que nos atañe en este artículo, “la generación de cristal”, es necesario hacer una breve contextualización para el mejor entendimiento de esta reflexión.

Es común escuchar a los adultos de mediana y tercera edad anhelar los tiempos de antes en donde todo era mejor, no obstante, es inverosímil que no se le agregue a dicha frase las palabras “más sencillo, más fácil, menos concurrido, tranquilo”. No agreguemos pacífico, pues el mundo no ha dejado de estar en guerras y revoluciones en los últimos 200 años. Con la diferencia de que antes era una o dos guerras en algún país remoto y de difícil acceso, y ahora el mundo en-tero está envuelto en pequeñas guerras o guerrillas simultáneas.

¿Qué tienen que ver las guerras con las diferencias de pensamiento y proceder entre las generaciones? Tiene todo que ver, pues el estudio social de las generaciones y sus comportamientos diferenciados tal y como lo conocemos comenzó después de la segunda guerra mundial siendo la revista Time en su edición del 5 noviembre de 1951 la que dio mayor difusión a la expresión, “Generación silenciosa” , dando así, comienzo al entendimiento general de que los hijos nacidos en el siglo XX son diferentes a sus padres y los padres de los abuelos, pero no al entendimiento y mucho menos aceptación de que inculcar valores básicos de comportamiento no es lo mismo que imponer el criterio de generaciones anteriores a la actual.

***23 años. Licenciado en Comunicación Social mención Audiovisual. Servidor público radicado en el ámbito judicial orientado a las relaciones públicas y relaciones interinstitucionales. Apasionado de la escritura creativa en verso y prosa y al desarrollo e innovación académico, social y cultural.**

Resistencia es igual a desgaste.

Las características sociales principales de las generaciones anteriores a la Generación Z son la firmeza e intransigencia ante los cambios, es decir, resistencia al cambio y resistirse al cambio es inútil, porque estos igual van a suceder sin previo aviso ni necesidad de pedir permiso y eso es algo que la Generación Z y las subsiguientes estamos acostumbrados, pues, a diferencia de las anteriores, en donde los cambios económicos, sociales, políticos y culturales venían empaquetados en ciclos de décadas, ahora el mundo pareciera cambiar de rumbo cada mes, o sea, el mundo está en un constante y aceleradísimo cambio perpetuo y para una generación que durante su infancia vio como los televisores, computadoras y teléfonos pasaron de ser aparatos toscos, pesados y diferenciados, a ser todos planos y unificados, en donde todos cumplen la misma función, solo que en formatos diferentes y que tienen actualizaciones de sistema semanales en contraste a las generaciones anteriores donde se tenía que hacer un consenso para aceptar o rechazar la integración de alguna novedad, y de aprobarse igual habrían detractores. Las generaciones de turno simplemente aceptamos lo que venga de manera automática y aprendemos a sacarle el máximo provecho en cuestión de minutos.

Es decir, para las demás generaciones en donde todo estaba muy bien de-limitado por líneas inalterables, enfrentarse a un 2024 donde las líneas sociales se han desdibujado, y que la generación de turno tenga el tupé de observar, señalar y protestar por los errores y atropellos que sus antecesores aceptaron, debe ser como mínimo, un panorama desolador; dando así como resultado una actitud de desprecio hacia las nuevas generaciones. Dicho esto, la generación que creció con Jazz no entendió el Rock and Roll, pero no por eso se despreciaba y rechazaba de manera recalcitrante y generalizada todo lo nuevo, o de ser así, la querella era entre la generación anterior y la que le sucedía, pero no como ahora que son varias generaciones despreciando a las actuales, olvidando incluso sus propias refriegas y diferencias culturales.

A la luz de lo antes mencionado, los cambios siguen y seguirán sucediendo, y aquellos que los acepten e integren seguirán

manteniéndose vigentes en la sociedad, mientras que los que no, llegará el momento cuando la resistencia se agote.

Cambios exponenciales.

Este segmento tiene el propósito de complementar el anterior y ayudar así a que sea más digerible, pues aquel tiene un carácter un tanto beligerante y el fin de este artículo es la reflexión y no la acusación, así que éste dará un leve cambio de enfoque, siendo así el clímax de la narrativa para dar paso a un desenlace con broche de oro. ¡Disfruten!

Hace mucho tiempo, pero no tanto, se inventaron las telecomunicaciones modernas, con el telégrafo como eje angular. Pasarían 41 años desde el telégrafo, que era una herramienta inaccesible al público y que además requería aprender código morse para su uso, hasta la invención del teléfono fijo doméstico el cual tampoco era accesible para el público general en sus primeros momentos y luego transcurrieron 102 años hasta el 17 de octubre de 1973 cuando se inventó el celular.

En un ritmo de tiempo similar se fueron desarrollando las demás tecnologías de la vida cotidiana y en ese mismo ritmo de tiempo, nacieron, crecieron y vivieron las seis generaciones anteriores a la Generación Z.

Por el contrario, solo en los últimos quince años se inventó el teléfono inteligente y sus numerosos dispositivos derivados de éste, (siendo la mayoría la siguiente generación de todo lo que ya se había inventado anteriormente); el inter-net se globalizó y con él se crearon las redes sociales; aparecieron los implantes neuronales, los drones y la inteligencia artificial en los últimos años; iniciaron y terminaron guerras y otras tragedias bélicas y sociales; hubo más de una decena de pandemias mundiales o regionales incluyendo la más grave, el Covid-19; el surgimiento, auge y caída de las criptomonedas y los NFT's en menos de cinco años junto al surgimiento de una nueva carrera espacial privatizada; el cambio climático con incendios, inundaciones y huracanes todos en un mismo año; se desarrolló la vacuna contra el VIH/Sida gracias a la edición genética CRISPR que también impulsó el

resurgimiento de la investigación de la clonación y facilitó la creación de otras vacunas en tiempo record, dando paso así también a la carne cultivada en laboratorio; hubo más de un centenar de protestas sociales unificadas a nivel internacional y/o mundial, solo por mencionar algunas: Black Lives Matters, Movimiento Me too, Gay and Trans Lives Matters o el escándalo contra la iglesia católica por el descubrimiento de los centros de exterminio y erradicación de culturas indígenas precolombinas autóctonas de Canadá y su posterior agravamiento al descubrir que eso fue una práctica generalizada a nivel mundial bajo la fachada de “los misioneros”; entre muchísimos otros sucesos contemporáneos.

Empatía y cooperación

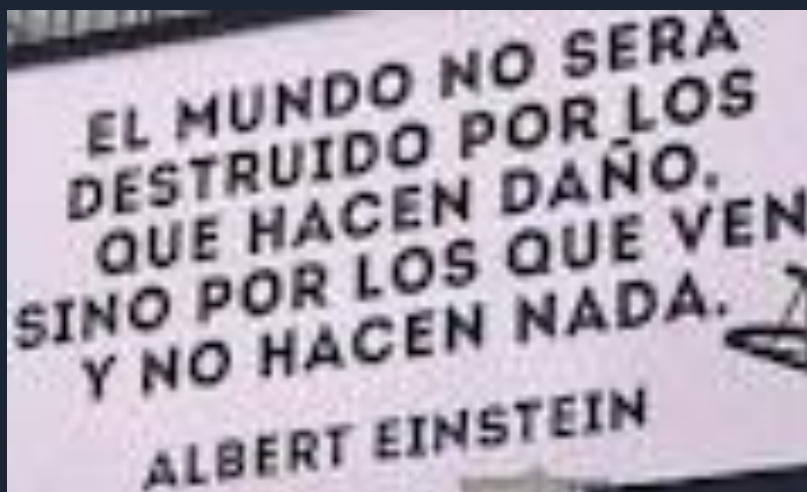
Para culminar, la sociedad occidental se caracteriza por ser individualista a la vez que radical, es decir, todos creemos tener la razón por encima de los demás y ciertas personas se aprovechan de eso para agruparnos en facciones contrarias con fines de poder. Cabe destacar, que si cultivásemos la empatía y la cooperación en vez del ego y la competencia, la mayoría de los sucesos de índole social antes mencionados habrían acontecido de una forma muy diferente o no habrían sucedido en primer lugar.

Por último, dejo una pregunta abierta para encender la flama de la reflexión: ¿Cómo sería el mundo si quienes lo dirigen fuesen menores a 40 años pero asesorados por mayores a esa edad en vez de seguir siendo dirigidos por personas de la Generación Silenciosa y Baby Boomers como ha sido en los últimos 80 años?



LA PAZ COMO PRODUCTO DE LA LEY, LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

*Jesús A. Jiménez Peraza**
Venezuela



En la misa de Inicio del Año 2023 en el Vaticano, SS Francisco hizo una exhortación a la Virgen María a fin que intercediera por la paz. Como tal se entiende no solo la ausencia de guerra entre los países,

normalmente por territorios, riquezas o problemas raciales y religiosos; sino también la unión, la armonía, la concordia entre los hombres, base para la convivencia y el avance de la humanidad. La iglesia le atribuye tal importancia, que la petición de su existencia es el único acto permitido como interrelación y expresión oral, entre los feligreses que asisten a la santa misa.

La continuación de la confrontación Rusia – Ucrania; las consecuencias del ataque terrorista de Hamás a Israel y la respuesta masiva de éste, aun en desarrollo; la guerra civil en Siria y la yemení; la de Etiopía; las amenazas y eventos beligerantes de Corea del Norte contra sus paisanos del Sur o los de China – Taiwán; de Venezuela con Guyana y, en menor medida las protestas gremiales constantes, las manifestaciones de inconformidad social y huelgas sectoriales reprimidas, en Venezuela y el mundo, no significa que la Madre de Dios y nuestra, haya desatendido la súplica.

Simplemente Dios dotó a los seres humanos de discernimiento y sabiduría, por lo que las consecuencias de la indebida aplicación de

*@jesusajimenezp jesusjimenezperaza@gmail.com

dichas virtudes, son imputables solo a nosotros mismos, quienes vivimos en estado permanente de conflagración, porque no respetamos la ley, no atendemos a los llamados de la justicia y nos hemos desviado en la interpretación de la política, como disciplina, que son los elementos que pueden proporcionarnos sosiego interior, paz social y la entendida en sentido amplio, como antípoda de la guerra, tres formas de interpretar el significado de la paz.

Las leyes son actos sancionados por un Poder Público independiente, investido con la fuerza que le proporciona el hecho de ser electo directamente por el pueblo. Ellas responden a todo un proceso de formación que incluye discusión; consulta popular y técnica, además de la promulgación por el Ejecutivo, para garantizar recursos económicos y administrativos de sustentación, lo que traduce que sean realmente efectivas para precaver litigios entre los ciudadanos o de ellos contra el Estado.

El proceso legislativo en Venezuela está absolutamente distorsionado, asunto en el cual lastimosamente se incluye al Sistema Judicial, encargado de su aplicación e incluso, al sector opositor, quien debe ser una voz para la denuncia procedente, para la educación pública y para controlar el poder, no para la conchupancia. Todo el entramado de leyes en Venezuela, impropriamente redactadas, indebidamente aplicadas y sin control opositor ha sido nefasto para nuestro proceso de paz interna.

El desconocimiento del valor justicia por los diferentes órganos nacionales encargados de su aplicación, también atenta contra la paz. No me refiero a la justicia como principio moral de dar a cada quien cuanto le corresponde, según la definición de los sabios juristas romanos, sino a la rectitud, equidad, a la probidad en los funcionarios administrativos y jurisdiccionales.

La noción de justicia es amplia y compleja, la retributiva nos obliga a dar a los demás el mismo tratamiento que aspiramos para nosotros mismos. La justicia distributiva, permite colocar las riquezas y recursos para el beneficio de todos por igual y la restaurativa, para la reinserción del victimario además de la compensación a la víctima. Ninguna tiene aplicación clara en el país y, mientras no suceda de esa manera,

difícilmente consigamos la paz social.

La política es un arte, una ciencia, que guarda relación con la apropiada regencia de la cosa pública y la forma como debe organizarse la sociedad. A través de ella se estudian problemas y procuran soluciones mediante acuerdos, para que el beneficio sea el óptimo y en forma horizontal, dando cobertura a todos.

Las mesas de trabajo o de conciliaciones para superar los gravísimos problemas sociales y económicos que nos aquejan han servido de poco, porque siempre se buscan beneficios individuales o grupales, no nacionales y en proyección, mundiales.

Estamos en año electoral, con un gobierno y un país ahogados en problemas de todo tipo que en mucho se mitigarían, si tan solo el órgano competente sin injerencia de los demás, sino atendiendo a sus facultades propias, legales y constitucionales fijara un cronograma electoral.

Las Elecciones Presidenciales tienen que celebrarse en este año 2024, para que el nuevo Presidente de la República tome posesión de su cargo el 10 de enero del 2025 (artículo 231 CN1999) o para que reasuma el actual, porque tiene derecho según una controvertida enmienda constitucional a participar como candidato indefinidamente (artículo 230 ejusdem).

Ya deberían estar definidas las candidaturas, hay mucho por explicar sobre programas, equipos de gobierno, orientación económica, nuestra pretendida ubicación dentro del panorama regional y mundial, porque todo está complicado y en todas partes. Lejos de esta elemental lógica política, estamos esperando que la Sala Político Administrativa dé Despacho y con ello la posibilidad de determinar la cualidad de potenciales candidatos, para que luego otros Poderes del Estado manifiesten a su vez, dentro de los límites de sus competencias propias si la sentencia producirá o no efectos prácticos. Esa situación no es legal, no es justa, no es política. Dios bendiga a Venezuela!

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO. DECONSTRUYENDO MITOS

*Carlos Arsenio Pérez Cheguen**
Guatemala



RESUMEN

El Derecho Penal del Enemigo, se ha constituido en un tema polémico en su discusión dentro de la dogmática penal, situación que ha provocado que en algunos aspectos se generen aseveraciones que se alejan de la verdad, una de ellas muy importante, es en cuanto a la equivocada creencia de que las normas del Derecho Penal del Enemigo, fueron creadas por Günther Jakobs, cuando en realidad el jurista alemán, lo que ha realizado es una identificación de normas que desde larga data y en diferentes países se han utilizado para hacer frente a crímenes de alta gravedad. De igual forma, es frecuente escuchar como varios juristas, en diversas actividades académicas, indican que los delitos de violencia contra la mujer y la forma en que se aplican las medidas de seguridad y alejamiento, corresponde a una manifestación del Derecho Penal del Enemigo, ignorando conceptos relevantes de la teoría del Derecho Penal del Enemigo y desconociendo la protección que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos le otorga a las mujeres, creando una confusión, que es necesario aclarar, entre esa protección especial y la pretendida incorporación de los delitos de Violencia Contra la Mujer en el Derecho Penal del Enemigo.

***Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Juez de Paz del municipio de Puerto Barrios del departamento de Izabal (2005-2007). Juez de Paz del municipio de San Cristóbal Acasaguastlán del departamento de El Progreso (2007-2010). Juez de Primera Instancia de Control de Ejecución de Sanciones para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, del departamento de Guatemala (2010-2019). Juez del Tribunal Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio, Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual, del departamento de Guatemala. (2019-2021). Juez del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, del departamento de Guatemala -Tribunal de Mayor Riesgo Grupo "C"- . (2021 a la actualidad).**

¿ES GÜNTHER JAKOBS EL CREADOR DEL DENOMINADO DERECHO PENAL DEL ENEMIGO?

“Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul (...)”. ¹

El denominado Derecho Penal del Enemigo -DPE- es sin duda uno de los temas más polémicos, sino el que más, en la actual discusión de la dogmática penal; sin embargo, a la par de ser un tema polémico ha resultado también mitificado, debido a falsas creencias o malos entendidos que se han generado en relación a determinadas explicaciones doctrinales sobre el mismo.

Lo anterior ha provocado que se intente hacer propios del DPE, antecedentes, cualidades o características, que no se corresponden ni con la realidad ni con el significado de su concepto, fenómeno este, que deriva de un cúmulo de factores de diversa procedencia. Siendo varios los mitos que se han creado alrededor del DPE, considero de interés poder abordar y desarrollar en este espacio uno de ello y evidenciar que la creencia ampliamente difundida en cuanto a que el jurista alemán Günther Jakobs, es el creador del DPE, no pasa de ser un mito.

¿ES GÜNTHER JAKOBS EL CREADOR DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO? ¿MITO O REALIDAD?

Entendemos el DPE como una reacción jurídico-normativa de los Estados, frente a especiales focos de desestabilización social por parte de delincuentes que muestran acentuadas cotas de peligro para bienes jurídicos de la vida social o comunitaria, reacción que se manifiesta a través de un Derecho Penal que se caracteriza por un adelantamiento de la barrera de punibilidad, un marcado rigor punitivo, flexibilización de garantías procesales y la restricción a acceder a beneficios en la ejecución de las penas (entre otras características).

Entonces, si ese es el DPE, debemos estar conscientes que es una realidad que antecede, y por mucho, a las ideas del jurista alemán, si consideramos que las normas penales, con las características que se han mencionado en el párrafo anterior, ha existido desde la existencia misma

1. Bartolomé Leonardo De Argensola, Soneto, Siglo XVI.

del Derecho Penal, y que no surgen a partir de las ideas de Günther Jakobs, por lo que resulta ilógico dar a entender que dichas normas deben a él su existencia.

Lo que debe quedar claro, es que efectivamente la denominación de “Derecho Penal del Enemigo” se debe a este autor, pero no la existencia de las normas, que es el punto en que reiteradamente prevalece la confusión.

Uno de los mayores críticos en Latinoamérica del DPE, es el gran jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien indica que: “En síntesis, Jakobs trata de construir un derecho penal especial (del enemigo) compatible con un Estado de Derecho, pero no lo logra, pues toda teorización en tal sentido es por esencia autoritaria” (Eugenio Raúl Zaffaroni, 2006; Pág. 255). Sin embargo, como se verá en las líneas que prosiguen, Günther Jakobs, no trata de construir un sistema penal, sino que, por el contrario, describe lo que ya se está produciendo.

Si Jakobs no hubiera designado el fenómeno legislativo que describía con el término de DPE, sino con otros menos alarmantes, por ejemplo: Derecho de defensa de peligros, Derecho de peligrosidad criminal, Derecho de neutralización de riesgos o Derecho Penal de prevención, los cuales aluden al mismo fenómeno, probablemente el revuelo organizado en relación al DPE no se hubiere producido.

Tal y como indica el jurista español, Miguel Polaino-Orts: “La denominación de enemigo, en contraposición a la de ciudadano, puede parecer políticamente incorrecta, drástica, beligerante, etc., pero no se puede rechazar seriamente sin saber siquiera a qué se refiere, qué realidad describe, qué características la adornan, qué garantías le competen, qué contenido engloba, etc. La etiqueta es en sí, lo de menos.” (Miguel Polaino-Orts, 2013; Pág. 411).

Supuestos reales del DPE, en el sentido en que Jakobs utiliza el término, han existido siempre y, por supuesto, también existen en la actualidad, aún y cuando nos escandalice reconocerlos con el nombre que le ha otorgado Jakobs, por no ser, como se indicó anteriormente, “políticamente correcto”.

De esa cuenta, podemos verificar la existencia permanente de estas normas tradicionales del DPE, de las cuales podemos mencionar como ejemplo, entre otras, algunos tipos de delitos con elementos subjetivos del injusto: los delitos de consumación anticipada mediante la autónoma incriminación de actos ejecutivos imperfectos (como lo son los delitos de tentativa y los llamados delitos de emprendimiento), así como delitos de consumación anticipada a través de actos preparatorios (por ejemplo los delitos de conspiración, asociación ilícita y los denominados delitos de provocación), también los denominados delitos de peligro abstracto (por ejemplo, los delitos contra el medio ambiente como ejemplos de delitos de peligro abstracto, en los que se produce un adelantamiento de la punibilidad y que -no obstante- son redefinidos como delitos básicos o cualificados de lesión) o en general todo el sistema de medidas de seguridad.

De nuevo nos ilustra el jurista español Polaino-Orts, al indicar que: “Existía un Derecho Penal del Enemigo y se tenía conciencia de su existencia, o -por mejor decir- sabíamos que existía una realidad que, ahora, denominada de otro modo produce escándalo y rechazo, pero entonces, bajo la rúbrica de Derecho Penal de las medidas de seguridad, de la peligrosidad criminal, etc., parecería normal y aun plausible, y por supuesto legítimo a los ojos de la doctrina mayoritaria.” (Miguel Polaino-Orts, 2013; Pág. 412).

No es lógico, bajo ningún punto de vista, imputar a un escritor que describe una realidad, la existencia de dicha realidad. Las observaciones, comentarios y consideraciones que realiza Günther Jakobs, resultan ser la descripción de una realidad que Jakobs no crea, que no propone y que no modifica; lo que realiza el jurista alemán es valorar, describir y designar con un nombre esa realidad que observa. Este autor reflexiona científicamente sobre las bases normativas de un DPE que ya existe en la realidad, una realidad legislativa que le precede.

Una circunstancia que muchas veces escapa al debate, es el hecho de que Günther Jakobs, describe al DPE, como una reacción de los Estados frente a determinados supuestos de especial peligrosidad. Se entiende en

este caso que, el DPE se constituye en una herramienta más dentro del propio sistema del Derecho Penal a la que pueden recurrir los Estados, y utilizar esta herramienta jurídica para combatir estos supuestos de especial peligrosidad, que se entiende en varias referencias doctrinales como mega criminalidad, que comprende delitos tales como: la criminalidad económica, el narcotráfico, el terrorismo, los delitos de corrupción estatal, y en general el crimen organizado.

Jakobs, no utiliza como parámetros de referencia Estados que puedan ser considerados como Estados dictatoriales, autoritarios o absolutistas; por el contrario, usa como marco de referencia para su análisis de las normas consideradas de DPE, las normas que se aplican en Estados democráticos modernos, tal el caso de Alemania y España, entre otros mencionados.

Al tener conciencia de la severidad de las normas tanto sustantivas como procesales, que han sido denominadas como DPE, es propósito de Jakobs identificarlas, darles un nombre y proponer que se utilicen solamente en aquellos casos en donde la actividad criminal que se pretende combatir y su naturaleza lo demanden, pero evitando que desplace el derecho penal común o “Derecho Penal del Ciudadano”, como lo denomina Günter Jakobs.

La historia nos muestra que el DPE es inevitable y aun necesario, pero como es un factor de riesgo es preciso controlarlo permanentemente para que no se dispare, es un foco de peligro y por eso hay que identificarlo y mantenerlo dentro de cuotas de normalidad, en ese sentido lo peor que podríamos hacer es negar su existencia, o considerar que son normas no aplicables a Estados democráticos de Derecho, cuando son estos Estados precisamente, los mejor capacitados para darle un uso razonable a esta herramienta del Derecho Penal.

En conclusión, el jurista alemán, Günther Jakobs, lo que ha hecho es informar de la existencia de un factor de riesgo, al que denomina DPE, lo identifica y nos previene de la necesidad de su adecuado tratamiento. Conviene entonces recordar lo escrito por el jurista español Polaino-Orts:

“Corresponde a una antigua costumbre matar al mensajero que trae una noticia no deseada. Esta solución puede parecer tranquilizadora, ya que así puede demostrarse a todo el mundo cuan cómoda es la vida sin ese mensajero” (Miguel Polaino-Orts, 2006; Pág. 18).

¿QUÉ ES EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO?

En la doctrina se ha denominado Derecho Penal del Enemigo –DPE-, a la manifestación del Derecho Penal que se caracteriza por un adelantamiento de las barreras de punibilidad, un marcado rigor punitivo, flexibilización de garantías procesales y la restricción a acceder a beneficios en la ejecución de las penas, dentro de otras características.

Es concretamente en 1985, en una polémica y sugerente intervención en las jornadas de penalistas alemanes, celebrada en Frankfurt, que el jurista alemán y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, Günther Jakobs, introdujo primero el término y después el concepto de Derecho Penal del Enemigo.

No obstante, con un mayor análisis relacionado a los fines del DPE, y considerando una construcción objetiva del concepto y no bajo un estereotipo negativo, se puede conceptualizar al Derecho Penal del Enemigo como: La reacción jurídico-normativa de los Estados Democráticos actuales frente a especiales focos de desestabilización social por parte de delincuentes que muestran acentuadas cuotas de peligro para bienes jurídicos de la vida social o comunitaria.

Nuestras sociedades siempre se han enmarcado en tres situaciones posibles; una de ellas es la máxima juridicidad postulable, la segunda es la óptima realidad jurídica alcanzable, y una tercera que es la realidad que se produce cotidianamente. Frente a estas tres circunstancias, que normalmente son diferentes entre sí, debe de fundamentarse la seguridad cognitiva de la norma –la norma jurídica-, que se refiere a la seguridad necesaria que han de aportar y han de gozar los ciudadanos para que la norma sea real y despliegue sus efectos propios de protección normativa:

- 1. Institucionalización de expectativas sociales.**
- 2. Orientación de conductas sociales.**
- 3. Siendo estos tres aspectos los efectos propios de la norma jurídica.**

El DPE resulta ser la forma en que reacciona el Derecho Penal en un Estado Moderno -y cuando nos referimos a un Estado Moderno no hacemos referencia a un Estado dictatorial o autoritario, sino más bien, a un Estado Constitucional de Derecho (un Estado Social y Democrático de Derecho como algunos prefieren llamarle)-, ante la mega criminalidad, aquella criminalidad feroz que atenta contra la sociedad y la propia estabilidad de las bases del Estado. El DPE entonces, es una herramienta del propio Derecho Penal, para hacer frente a una criminalidad real y no hipotética, una criminalidad devastadora en sus efectos y persistente en sus métodos.

Enfrascarnos a negaciones en cuanto a la existencia de esta herramienta del Derecho Penal, pensando que en nuestros Estados no se tiene ni se necesita normas propias del DPE, es una actitud que muestra desconocimiento de la realidad y deshonestidad para la población. Sin embargo, lo más grave de una actitud semejante, es no decidir adecuadamente cómo combatir la mega criminalidad, si todos coincidimos en que el Derecho Penal común ha sido muy limitado en la capacidad de combatir la criminalidad comunitaria o ciudadana, menos capacidad tendrá por lógica para combatir la criminalidad que atenta contra los propios cimientos de la sociedad y del Estado.

FENÓMENOS DELÍCTIVOS ANTE LOS CUALES ACTÚA EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

La expresión Derecho Penal del Enemigo, “no es una expresión diabólica del Estado autoritario como se le pretende pintar. Respeta el ordenamiento jurídico, es acorde con el respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho. Tal vez si Jakobs no hubiera utilizado las distinciones de ‘persona y no persona’; y la expresión ‘enemigo’, sus ideas no habrían provocado la ira internacional de los académicos” (Mario Schilling Fuenzalida; citado por Rodrigo Ríos Álvarez, 2012; Pág. 165).

Todos estamos de acuerdo en que, la Sociedad es finalmente un acuerdo normativo, que requiere que la norma sea realizable. Para Niklas Luhmann, la comunicación es la única operación genuinamente social; Si no hay comunicación no hay sociedad. Los seres humanos interactuamos en sociedad únicamente a través de la comunicación, y concretamos objetivamente esa comunicación a través de normas sociales. Para Jakobs, la norma que garantiza el cumplimiento de las demás normas, es precisamente la norma penal, por lo tanto, para el jurista alemán, es necesario que la sociedad confié en el cumplimiento de la norma penal (Alberto Montoro Ballesteros, 2007; Pág. 368 y 371).

Con ello se quiere decir que la aplicación real de la norma y su efectiva vigencia únicamente pueden producirse cuando la norma se dirija contra destinatarios idóneos (personas) y estos acepten el contenido comunicativo de esta como mensaje válido, orientando sus conductas con esa comunicación que le sirve de guía. El mensaje que transmite la norma, entonces, relaciona a la persona con el mundo social. La persona es en consecuencia el complemento necesario de la norma, e incluso se podría considerar que la persona es parte substancialmente integrante de esta norma.

Como se indicó ya con anterioridad, las normas jurídicas –como norma social- institucionaliza expectativas sociales, y una expectativa social, válida de toda persona es que los demás respeten estas mismas normas, concebidas como orientadoras de conductas sociales, “los ciudadanos, las personas en Derecho, se rigen normalmente por la norma, aunque incidentalmente puedan infringirla... su pasado (puntualmente) delictivo no representa mayor problema para que la estructura social mantenga su conformación. El delito se concibe en ellos como un desliz reparable, dicho coloquialmente: como una ‘metedura de pata’. (Pero en relación a aquellos individuos que cometen delitos muy graves y con mucha frecuencia) la estabilización de su ‘error’ no puede hacerse de la manera usual, por el simple hecho de que su apartamiento de la norma... no es un simple error o un mero desliz reparable, sino una oposición frontal a un proyecto de vida de los demás. O lo que es lo mismo: El enemigo genera inestabilidad social (Miguel Polaino-Orts, 2019; Pág. 7).

Es responsabilidad del Estado de Guatemala, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, garantizarles a sus habitantes, entre otros derechos, la seguridad, la cual es necesaria para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas dentro de parámetros de normalidad. Explica Jiménez Díaz que, tranquilidad pública o seguridad ciudadana, “es aquel estado en el cual los ciudadanos gozan de una situación de tranquilidad y estabilidad que les permite ejercer de forma libre y responsable los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente (María José Jiménez Díaz, 2006; Pág. 302). La paz de los ciudadanos (la tranquilidad pública) es también, y primordialmente, un bien jurídico tutelable, y así lo han reconocido expresamente los Tribunales Constitucionales en diferentes países. 2

Por lo anteriormente descrito, es obligación del Estado combatir y neutralizar un foco de desestabilización e inestabilidad social, y en este caso nos referimos a aquellos delitos que atentan ya no directamente contra el bien jurídico de una persona en particular, sino más bien aquellos delitos que tienen la capacidad de afectar las estructuras mismas del Estado y con ello se vuelven focos de peligro para la sociedad en general. Por ello se entiende que el DPE sea una reacción jurídico-normativa de los Estados Democráticos actuales, frente a especiales focos de desestabilización social por parte de delincuentes que muestran acentuadas cuotas de peligro para bienes jurídicos de la vida social o comunitaria.

En ese orden de ideas, se considera como actos delictivos que afectan la vida social o comunitaria, y que atentan contra los propios cimientos de la sociedad y del Estado, aquellos fenómenos conocidos como mega criminalidad, que entre diferentes clasificaciones, se llega a cierto consenso en cuanto a incluir en esta denominación los delitos relacionados con las siguientes actividades:

- a) Criminalidad económica.**
- b) Narcotráfico.**
- c) Terrorismo.**
- d) Corrupción a gran escala (Pública y privada).**

2. Ver por ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional de España 33/1982 del 8 de junio de 1982.

f) Crimen organizado (tráfico de migrantes, trata de personas, ciberdelincuencia).

Si advertimos la técnica legislativa utilizada en la redacción de las leyes penales creadas para el combate de estos fenómenos criminales, se va a encontrar que las mismas guardan características como: un adelantamiento de las barreras de punibilidad, un marcado rigor punitivo, flexibilización de garantizas procesales y la restricción a acceder a beneficios en la ejecución de las penas, que son características propias del DPE, en otras palabras, estamos utilizando ya, el DPE, es decir que ya se utiliza esta herramienta del Derecho Penal. En Guatemala, en México, en España, en todo el mundo, la mega criminalidad se combate con Derecho Penal del Enemigo, aunque quizás muchos críticos de esta construcción todavía no se hayan enterado.

¿SON LOS AUTORES DEL DELITO DE VCM UN FOCO DE PELIGRO PARA LOS CIMIENTOS DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD?

Para iniciar este capítulo se considera necesario, explicar un concepto relevante dentro de la teoría del DPE, nos referimos al concepto de: La seguridad cognitiva en la vigencia de la norma. Este concepto resulta reiterativo en el estudio del DPE. Según la Doctrina del DPE, la idea que actualmente se expresa como “seguridad cognitiva en la vigencia de la norma”, es aquella en que los ciudadanos, precisamente para ser tratados como ciudadanos, esto es para disfrutar de las garantías del mundo civilizado, han de ofrecer a cambio y por su parte cuotas de garantía y respeto de la norma como modo de ordenación social y proveedora de seguridad ciudadana. Esa obligación positiva de hacer que afecta a todo ciudadano está reconocida por el Derecho Penal Funcionalista, para el que la autoridad de la norma depende de su respeto substancial por parte de los ciudadanos. Por ello, para la doctrina funcionalista la creación de inseguridad cognitivo-normativa por parte de un individuo, esto es, que no reconozca a los demás como personas en Derecho, que no brinde el mínimo de seguridad de cumplimiento y respeto de la norma, que permita que esta mantenga su vigencia, provoca con ello una alteración grave en la realidad social lo cual evita que se desarrolle de forma confiable y segura la vida social, dañando con ello los cimientos

de la sociedad y del Estado.

Para el DPE, no cualquier persona logra la creación de inseguridad cognitiva de la norma, en una sociedad, sino únicamente determinados delincuentes que por su especial poder de desestabilización normativa, debido a la gravedad de los delitos que cometen, crean un peligro tal que impide a los ciudadanos que ejerciten sus derechos y disfruten de sus garantías con la seguridad que, en condiciones normales, la norma les brindaría (Miguel Polaino-Orts, 2019; Pág. 64).

Para el autor español, Miguel Polaino-Orts, el concepto de “enemigo” dentro de la teoría funcionalista, tiene características de cientificidad, normatividad, descriptividad, y por ende una neutralidad valorativa. No es utilizado desde un enfoque religioso, político, bélico, histórico o filosófico. De esa cuenta realiza la siguiente definición del concepto “enemigo”:

Enemigo es quien incluso manteniendo intactas sus capacidades intelectuales y volitivas, y disponiendo de todas las posibilidades de adecuar su comportamiento a la norma, decide ‘motu proprio’ autoexcluirse del sistema, rechazando las normas dirigidas a personas razonables y competentes, y despersonalizándose o, por mejor decir, de personalizándose a si misma mediante la manifestación exterior de una amenaza en forma de inseguridad cognitiva, que –precisamente por poner en peligro los pilares de la estructura social y el desarrollo integral del resto de ciudadanos (‘personas en derecho’)- ha de ser combatida por el ordenamiento jurídico de forma especialmente drástica, con una reacción asegurativa más eficaz. Esta reacción se circunscribe a garantizar y restablecer el mínimo de respeto para la convivencia social: El comportamiento como persona en Derecho, el respeto de las demás personas y –en consecuencia- la garantía de la seguridad cognitiva de los ciudadanos en la norma (Miguel Polaino-Orts, 2019; Pág. 130).

De entre las numerosas medidas legales que han surgido para combatir aquellas acciones consideradas de violencia contra la mujer, que por lo general se desarrollan en una dinámica de maltrato de mujeres por parte de sus parejas, en el seno de matrimonios o de parejas de hecho

convivencia sin matrimonio-, resaltan las genéricamente denominadas medidas de alejamiento, que constituyen una medida puramente preventiva, encaminadas a proteger a las mujeres, de sus parejas, convivientes o incluso de otros hombres con quienes ha existido algún tipo de relación que podría ser familiar, laboral, académica o religiosa (que esto último es las menos de las veces), por representar estos sujetos un peligro real, y no supuesto o inventado, para las mujeres víctimas, al limitarles y perjudicarles el desarrollo incluso de su proyecto de vida. Pero debemos de ser claros, en este aspecto, resultan ser un peligro real y concreto para una o varias víctimas en lo particular (la mujer víctima y su núcleo familiar), pero no representan en absoluto un peligro para la sociedad y el Estado, al no constituirse en focos de peligro que atenten contra las bases sociales de una determinada sociedad y un determinado Estado, por lo que no puede considerarse que esa peligrosidad que representa el hombre agresor, es suficiente para etiquetarlo como “enemigo”, según la definición que de ese término realiza la teoría funcionalista del Derecho Penal y de la cual hace uso la teoría del DPE. No se puede tratar al agresor de un delito de violencia contra la mujer, de la misma manera en que se trata a un terrorista, a un narcotraficante, a un tratante de personas o a un funcionario o empresario que desfalca al Estado.

EL PLUS ASEGURATIVO Y DE PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DE VCM

El desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial es innegable. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial (La Gran Guerra, como se le conocía antes de la Segunda Guerra Mundial), la Sociedad –o Liga- de las Naciones fue creada el 28 de junio de 1919, en virtud del Tratado de Versalles, para promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad. Este organismo internacional se disolvió el 18 de abril de 1946, tras fracasar en sus intentos por impedir una Segunda Guerra Mundial, y fue reemplazada por la actual Organización de las Naciones Unidas –ONU-, la cual nació oficialmente el 24 de octubre de 1945.

Es necesario establecer este breve antecedente en virtud que, de acuerdo a los objetivos principales de la Organización de las Naciones Unidas, que son mantener la paz y la seguridad internacionales, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, y apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática; resalta lo relativo a la protección a los Derechos Humanos, y muestra de ello ha sido el especial interés que ha puesto la ONU, en la creación de diversas convenciones, tratados, convenios y protocolos, relacionados a la protección de los Derechos Humanos en general para todas las personas, y particularmente lo concerniente a la protección de los Derechos Humanos específicos de las personas que pertenecen a sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad, habiendo identificado al sector de mujeres, a nivel mundial, como un sector en condiciones de vulnerabilidad, por la innegable cultura patriarcal y androcéntrica que prevalece en todos los Estados del orbe.

Como consecuencia de lo anterior, actualmente contamos con una serie de normativa internacional en materia de protección a los Derechos Humanos, y de protección a los Derechos Humanos específicos de las mujeres. En observancia al principio de control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que establece, entre otros aspectos, la obligación de los Estados parte de adecuar la legislación interna en relación a la legislación internacional, también se ha creado una amplia normativa de carácter interno, en cada uno de estos Estados, tendiente a proteger, garantizar y fomentar los Derechos Humanos específicos de las mujeres. Con lo anterior queda en evidencia un plus asegurativo y de protección en beneficio de los Derechos Humanos de la mujeres, a través de estos corpus iuris tanto a nivel internacional como a nivel nacional.

Podemos evidenciar esta circunstancia al realizar un repaso sobre los instrumentos internacionales y nacionales más relevantes que se han creado con el objetivo de la protección a los Derechos Humanos específicos de las mujeres. Entre estos instrumentos legales tenemos:

A nivel internacional: La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW (Por sus siglas en inglés)- de 1979; El Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1999; las Diferentes Recomendaciones y Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Entre las que destacan la Recomendación General No. 30, sobre las Mujeres en la Prevención de Conflictos y en Situaciones de Conflicto y Posteriores a Conflictos de 2013; y la Recomendación No. 33, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia de 2015); y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer –conocida como “Belém Do Pará”- de 1994 (MIMPAZ, 2016).

A nivel nacional (Guatemala): Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Decreto 97-1996; Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, Acuerdo Gubernativo 831-2000; Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Decreto 7-99; Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Decreto 22-2008; Protocolo de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, del año 2010; Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009; y el Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con Competencia en Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, Acuerdo 30-2010 (Secretaría de la Mujer y Análisis de Género, 2018).

La amplia cantidad de normativa tanto a nivel internacional, como a nivel nacional, dejan visualizar de forma expresa, la preocupación que existe en el campo jurídico y de protección a los Derechos Humanos específicos de las mujeres, por garantizarles a ellas, el derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado, tal y como lo señala el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer –“Belém Do Pará”-.

Como resultado de lo anterior, se ha creado un plus asegurativo y de protección a favor de las mujeres en general, pero particularmente para aquellas que habiendo hecho uso del sistema de justicia –el acceso a la

justicia por parte de las mujeres, también es una preocupación legal tanto a nivel nacional como internacional- se les debe otorgar una protección especial para evitar que vuelvan a ser víctimas de un acto de violencia en su contra o para evitar que estos actos de violencia se realicen en contra de ellas, al existir un riesgo cierto e inminente, actuando de esta forma el sistema de justicia de manera preventiva. Es claro que en este apartado nos referimos a actos de violencia o amenazas de violencia que se realizan en contra de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, que es lo que establece una alta connotación de género en los delitos de violencia contra la mujer -VCM-.

Como se indicó en el capítulo anterior, entre las medidas legales que han surgido para combatir aquellas acciones consideradas de violencia contra la mujer, sobresalen las denominadas: medidas de alejamiento, las cuales constituyen como ha resaltado la doctrina, un “tratamiento protector privilegiado en los supuestos de violencia domestica frente al resto de supuestos delictivos...” (Vicente Magro Servet, 2005; Apartado II).

Se debe considerar en este aspecto, que no hay duda que se hace primar, es decir tiene primacía, la necesidad de asegurar y proteger a la mujer víctima o amenazada de ser víctima del delito de violencia contra la mujer, sobre la propia presunción de inocencia del sujeto en contra de quien se dirigen estas medidas de alejamiento, toda vez que se imponen en contra del agresor convicto o incluso meramente presunto -porque la naturaleza de estas medidas para que puedan cumplir con el fin establecido así lo exigen-, que en los supuestos de ordenes o medidas cautelares de alejamiento el sujeto no ha sido sometido a juicio, y por lo tanto estas medidas se imponen cuando no ha quedado probada aún su responsabilidad (Miguel Polaino-Orts, 219; Pág. 344). No obstante, está técnica jurídica, que en ocasiones ni siquiera exige una comprobación previa y fehaciente del peligro que entraña el delincuente, se justifica en aras del plus asegurativo y de protección que el sistema de justicia le debe de proporcionar a la mujer víctima o amenazada de ser víctima del delito de violencia contra la mujer.

Se puede concluir en este capítulo, entonces, que lo que motiva la utilización de medidas de seguridad y alejamiento en beneficio de las víctimas o probables víctimas de delitos de violencia contra la mujer, no es el hecho de considerar al agresor como enemigo del Estado o de la sociedad, como muchos quieren hacer ver cuando pretenden incluir los delitos de VCM, como delitos en donde se aplica el Derecho Penal del Enemigo, sobre todo al considerar que la utilización de las medidas de seguridad y alejamiento tanto personal como espacial, en contra de los agresores en los delitos de VCM, es una manifestación del adelantamiento de las barreras de punibilidad, características propia y fundamental de las leyes del Derecho Penal del Enemigo. Por el contrario, se ha evidenciado, que el legislador, al tomar como base la amplia normativa nacional e internacional de protección a los Derechos Humanos específicos de las mujeres, presta mayor atención a la perspectiva de protección a la mujer víctima, aunque sea a costa de la libertad de movimiento o de decisión del sujeto agresor o probable agresor.

El agresor o posible agresor en los delitos de VCM es un peligro real y cierto, y no imaginario para la víctimas, pero no es un peligro para las bases propias del Estado y de la sociedad, para ser considerado “enemigo”, de acuerdo a la teoría funcionalista del Derecho Penal y de la teoría del DPE, en tanto que la conducta del agresor altera e imposibilita la convivencia de la víctima y de su núcleo familiar, pero no de los ciudadanos en general, toda vez que el agresor no se constituye en un foco de peligro para la sociedad y el Estado. El objetivo central de las medidas seguridad y alejamiento conllevan la maximización de la idea de seguridad de las víctimas, se maximiza la protección penal de las víctimas, por lo que se puede considerar que las leyes contra la violencia contra la mujer, constituyen un ejemplo de un nuevo Derecho Penal de víctimas, para brindarles espacios de libertad libres de violencia.

CONCLUSIÓN

Llegado a este punto, ya es posible identificar y resolver *la confusión que existe en varios autores, en cuanto al plus asegurativo y de protección de la víctima y la pretendida incorporación de los delitos de Violencia*

Contra la Mujer en el Derecho Penal del Enemigo.

A tal efecto, se puede sostener que el agresor que es responsable de un delito de VCM, no es un “enemigo” de la sociedad ni del Estado, requisito para aplicar un DPE. Así también, podemos concluir que las medidas de seguridad y alejamiento, que tienen como base innegable, la peligrosidad del autor, no se otorgan específicamente por esta peligrosidad, sino más bien en función de un mayor plus asegurativo y de protección para la mujer víctima del delito de VCM. Es decir, el legislador, al contemplar su utilización, lo hace en función de garantizar la seguridad y protección de la víctima, y no por considerar que la persona contra quien se van a decretar estas medidas de seguridad y alejamiento sea considerado un peligro para la sociedad y el Estado, que lo hagan merecedor de un adelantamiento en las barreras de punibilidad y por ende aplicarle un DPE. Si entendemos estos aspectos, entonces ¿En dónde radica la confusión que existe entre varias personas al considerar que se aplica un DPE en los delitos de VCM?

Es más que evidente, que las medidas de seguridad y alejamiento (alejamiento personal, no acercarse a la víctima; y alejamiento espacial, no llegar a los lugares en donde vive o frecuenta la víctimas) suponen una restricción física y legal de derechos fundamentales, como manifestación del ejercicio del poder coercitivo del Estado, estas medidas sin duda, limitan algunos de los ámbitos más importantes de la personalidad del sujeto, como son la libertad de movimiento o la libertad de determinación en varias facetas de su personalidad (por ejemplo, la elección del lugar de domicilio o de trabajo, libertad de relacionarse con los demás, libertad de expresión, etc.). La restricción de derechos con estas medidas de alejamiento, llegan incluso a prohibirle al acusado acercarse a “cualquier lugar” que sea “frecuentado” por la víctima o familiares, pero la razón principal que justifican estas medidas es darle un espacio de libertad libre de violencia a la víctima.

Frente a ello, un blindaje de mayor aseguramiento y protección para la mujer víctima del delito de VCM, deviene de un plus asegurativo y de protección que le otorga todo el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, a los Derechos Humanos específicos de las mujeres, lo cual se ve replicado en la normativa nacional de cada Estado parte, en cumplimiento del principio de control de convencionalidad. Una muestra de ese mayor nivel de seguridad y protección lo constituyen las figuras jurídicas de las medidas de protección y alejamiento en favor de las mujeres víctimas y en contra de los hombres agresores. Estas medidas de seguridad y alejamiento no se crean y se imponen por considerar al hombre agresor, como un foco de desestabilización y peligro para los fundamentos de la sociedad y del Estado, es decir no se le considera un “enemigo” desde el punto de vista de la teoría funcionalista del Derecho Penal, y del DPE.

No podemos dejar de lado dentro de éste análisis, considerar que la creación de normas penales especiales que tipifican delitos específicos en contra de mujeres, tal es el caso de Guatemala con la creación de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008), y la imposición de penas para los delitos allí tipificados, penas que podrían ser discutidas en cuanto a su proporcionalidad, racionalidad y necesidad, constituyen, de acuerdo a los términos utilizados por Jesús-María Silva Sánchez, una expansión del Derecho Penal, (Jesús-María Silva Sánchez, 2001; Pág. 20), y que el decretar medidas de seguridad y alejamiento -denominaciones establecidas en la doctrina-, podría considerarse un adelantamiento a las barreras de punibilidad, lo que constituye un razonamiento cierto de acuerdo a lo que observamos en nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora bien, se debe de tener en cuenta que no todo expansión del Derecho Penal -en cuanto a la creación de nuevos tipos penales, o la agravación de la sanción penal establecida para delitos ya existentes-, constituye el surgimiento de normas de un Derecho Penal del Enemigo. Es importante hacer esa separación, porque la expansión del Derecho Penal, puede responder a diversas motivaciones, en tanto que el surgimiento de leyes propias de un Derecho Penal del Enemigo, persiguen precisamente combatir a quien conceptualmente y normativamente se constituye en “enemigo” de la sociedad y del Estado.

Por otra parte, el adelantamiento de las barreras de punibilidad, tal y como lo vemos en la investigación y juzgamiento de delitos consideramos propios del crimen organizado, tales como la asociación ilícita, la conspiración, la pertenencia a bandas armadas (denominados delitos de estatus), ciertamente no es una característica exclusiva del Derecho Penal del Enemigo, como se puede evidenciar en la punibilidad de delitos de posesión (estupefacientes o armas), e incluso en la tentativa como grado imperfecto de consumación en la mayoría de delitos.

En tal sentido, la existencia de un adelantamiento de la barrera de punibilidad al momento de imponer medidas de seguridad y alejamiento en contra de un sujeto acusado de un delito de violencia contra la mujer, no es suficiente para considerar que los delitos de VCM, pertenecen al DPE, por cuanto que el agresor no cumple con las características de “enemigo” de la sociedad y del Estado; este adelantamiento no es una característica exclusiva del DPE, y en el caso concreto se configura como una manifestación objetiva de un plus asegurativo y de protección de la mujer víctima.

REFERENCIAS

- **Jiménez, M. (2002). Mujer víctima de violencia doméstica, trastorno de estrés postraumático y eximente de miedo insuperable. Madrid, España. Editorial de Derecho Reunidas, S.A.**
- **Magro, V. (1999). La reforma del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 14/1999 de 9 de junio y sus incidencias en el ámbito de protección de las mujeres maltratadas. Madrid, España.**
- **Mesa Interinstitucional sobre Mujeres Paz y Seguridad -MIMPAZ- (2016). Compendio de Leyes e Instrumentos Internacionales sobre Derechos de las Mujeres. IEPADEZ.**
- **Montoro, A. (2007). El funcionalismo en el Derecho: Notas sobre N. Luhmann y G. Jakobs. Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, Número 8.**
- **Polaino-Orts, M. (2006). Derecho Penal del Enemigo. Desmitificación de un concepto. Editorial Grijley, Lima, Perú.**
- **Polaino-Orts, M. (2019). Derecho Penal del Enemigo ante el Estado de Derecho. México, México. Editorial Flores.**
- **Ríos, R. (2012). El Derecho Penal del Enemigo. El problema de su legitimidad a la luz de algunos de sus defensores y detractores. Ars Boniet Et Aequi (Año 8 No. 2).**

- **Secretaria de la Mujer y Análisis de Género (2018).** Marco Normativo Nacional en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres. Guatemala, Centro América.
- **Silva, J. (2001).** La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades posindustriales. Madrid, España. Civitas Ediciones, S. L.
- **Zaffaroni, E. R. (2006).** Manual de Derecho Penal, Parte General. Segunda Edición. Buenos Aires, Argentina.



ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

*Pedro H. Díaz A.**
Venezuela



RESUMEN

En el presente artículo, el autor aborda la importancia que existe en la articulación y cooperación entre los órganos de seguridad ciudadana, para la fusión de esfuerzos en conseguir para el pueblo una convivencia en paz, manejado como un principio básico en la gestión pública por ser componente principal para la seguridad ciudadana integral. Y le ha presentado a sus lectores circunstancias conocidas por todos que reflejan la separación, el divorcio entre los cuerpos de seguridad. Esta importancia es reconocida por otros gobiernos como se refleja en cita textual incorporada en el presente trabajo, donde se expresa quererse garantizar la efectiva coordinación como eje central de una Seguridad Ciudadana, que inclusive puede extenderse y vincularse con el área privada.

Palabras clave: articulación, cooperación, órganos de seguridad ciudadana, divorcio, liderazgo.

ABSTRACT

In this article, the author addresses the importance that exists in the articulation and cooperation between the citizen security organs, for the fusion of efforts to achieve a peaceful coexistence for the people, managed as a basic principle in public management as a main component. for comprehensive citizen security. And he has presented his readers with circumstances known to all that reflect the separation, the divorce between the security forces. This importance is recognized by other governments, as reflected in the textual citation incorporated in this work, where it is expressed that they want to guarantee effective

*C.I. 6.445.660. UNES-Universidad Nacional Experimental de la Seguridad

Correo: conanpedro66@gmail.com. PEDAGÓGICO EXPERIMENTAL LIBERTADOR (BARQUISIMETO-Edo. LARA) PROFESOR EN EDUCACIÓN COMERCIAL

coordination as the central axis of Citizen Security, which can even be extended and linked to the private area.

Keywords: articulation, cooperation, citizen security bodies, divorce, leadership.

INTRODUCCIÓN

El artículo a continuación, su autor pone en la palestra la aplicación del significado de la palabra divorcio, en la relación que pudiese existir entre los distintos órganos de seguridad para combatir el delito y garantizarle a la población una vida en paz, manifestándose entonces la preocupación por la separación de esfuerzos de estas entidades, reflejándose en un inefectivo cumplimiento de sus funciones. Para avalar su postura, realiza cita textual de instrumento legal vigente que regula la coordinación entre los Órganos de Seguridad Ciudadana, en la República Bolivariana de Venezuela y del planteamiento, encontrado con este contenido, originados por estrategias innovadoras de estos últimos años por Gobierno extranjero de este continente.

La fuente por haber protagonizado, en muchos años, labores correspondientes a uno de estos órganos de seguridad y haber vivido varios resultados que en su todo o partes no fueron satisfactorios, resaltante entre las causas la falta de trabajo en equipo entre instituciones, decide romper su silencio al respecto, deseando no sea tarde, para exponer su punto de vista y crear alguna consciencia, enmarcado en la Línea de Investigación e Innovación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) matriz número uno (01), línea potencial temática, literal “a”.

Finalmente el autor transmite la importancia del asunto tratado, queriendo crear en su lector un despertar como lo hizo él y conseguir que no se detengan las propuestas posibles para atacar el mal del divorcio entre los Cuerpos de Seguridad.

ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

El autor se permite exponerles a los lectores, luego de meditaciones y reflexiones a partir de aquella vez, no muy lejana en el tiempo, que prestó la debida atención para suministrar la importancia que merecía su

apreciación acerca de la “Articulación y Cooperación entre los Órganos de Seguridad Ciudadana”. Había ya conocido, desde sus primeros tiempos de estudios en esa etapa primaria, el derivado de un verbo: divorcio, lo había conjugado muchas veces en sus oraciones según el contexto del momento, inclusive éste y sus sinónimos en estos últimos años de su vida en todo lo concerniente al Órgano de Seguridad CICPC y otras Instituciones, pero no es hasta ahora en donde se detuvo a meditar ¿cuánto uso de este verbo se le ha dado en el contexto como contraparte de la Seguridad ciudadana? y ¿cuánto verdadero ejercicio de su acción?.

Por lo antes expuesto, dentro de las líneas de investigación e innovación de la UNES, matriz: Doctrina, Política y Gestión Pública de la Seguridad Ciudadana, línea potencial temática: Fundamentos y componentes teóricos de las políticas públicas en seguridad ciudadana integral, esbozará a sus lectores su posición al respecto respondiendo las mencionadas interrogantes, esperando que podrán justipreciar su contenido y pronunciarse, lo cual robustecerá el conocimiento que se persigue con ímpetu en este deseo de superación intelectual y solución de problemas.

El Ministerio de Interior y Justicia, le corresponde ejercer la coordinación de los Órganos de Seguridad Ciudadana mediante la Coordinación Nacional de Seguridad Ciudadana y de las Coordinaciones Regionales de Seguridad Ciudadana en las diferentes entidades federales. Para ello se decretó el 20 de septiembre del 2001 y publicado en Gaceta Oficial Nro. 37.318 de fecha 6 de noviembre del mismo año, instrumento que regularía la coordinación entre los Órganos de Seguridad Ciudadana, Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana [LCSC], Art.2 (2001):

Artículo Nro. 2, ...quienes conforman esos Órganos de Seguridad: 1. La Policía Nacional, 2. Las Policías de cada Estado, 3. Las Policías de cada Municipio, y los servicios mancomunados de policías prestados a través de las Policías Metropolitanas, 4. El cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, 5. El cuerpo de bomberos y administración de emergencias de carácter civil y 6. La organización de protección civil y administración de desastre.

Y en el resto de sus articulados se desarrolla, para quienes les compete, las obligaciones de acatar, vigilar, organizar y desarrollar todas aquellas instrucciones a niveles nacionales, estatales y municipales de Coordinación, como unión de esfuerzos, emanados para garantizar la seguridad ciudadana a través de la cooperación amplia, regulándose así también las actuaciones en competencias concurrentes.

Entonces, hasta con el piso legal se cuenta para que estas instituciones, de forma profunda, trabajen en equipo y no sólo cumplan, como está ocurriendo, con apariencias que sean percibidas por sus espectadores, al no darle cumplimiento a lo exigido y hacer las cosas de forma incompletas o a su manera, quedando nuevamente sólo en palabras “En la unión está la fuerza”, “unidos y venceremos”, “un solo árbol no hace montaña”, entre otras muchas. En sus 24 años como funcionario del CICPC, el autor cuántas veces escuchó esas expresiones, pero ahora recapitulando se dio cuenta que nunca lo llevamos a ejecutar en su 100%, las circunstancias, varias: la desconfianza, el protagonismo, los celos y con dolor se atreve a aseverar que hasta el odio tuvo su participación, por no mencionar el interés particular con figura dolosa.

Es curioso, pero atribuyéndoselo a una madurez intelectual de su parte, es ahora que la aparición de un aparente inofensivo verbo “DIVORCIO”, en un evidente no inofensivo Foro Nro. 02 “La Seguridad Ciudadana como paradigma para la gestión policial”, de la Unidad Curricular Multi dimensionalidad de la Seguridad Ciudadana, Programa Nacional de Formación Avanzado, UNES – LARA, por ser despertador de ideas y opiniones, que ha logrado un stop en su avance de los análisis críticos para la búsqueda de soluciones a problemas, por estar seguro que en este verbo o cualquiera de sus sinónimos pueda encontrarse la clave de ampliar nuestra seguridad como secuela de una reducción considerable de los actos delictivos.

Por tal razón la consulta de los autores que se indican a continuación en la definición de “Divorcio”: según García, R, Pelayo y Gross (1964), Pequeño Larousse Ilustrado, “...(SINÓN. Separación, repudiación, repudio...”

Y su significado en el diccionario Google.com diccionario, (2021). “Divorcio: Separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas. Similar: separación”.

Entonces, para el concepto encajado en este contexto, estaríamos ante los resultados de las estrategias practicadas para reducir la delincuencia, con una separación de esfuerzos por parte de los organismos de seguridad que deberían estar unidos para el logro satisfactorio de los objetivos trazados. Y no son mentiras las afirmaciones que emite o las que pudiese hacer cualquier otra persona de opinión similar, que hay muchas, porque con sólo el ver procedimientos y omisiones realizadas por integrantes de estas instituciones lo confirman, sino que también nosotros como víctima directas o indirectas nos decimos, pasó así o se dejó de hacer por falta de comunicación entre un organismo y otro, favoreciéndose al o a los delincuentes.

Ejemplos de esta Separación:

- Cuando un organismo cuenta con la identificación plena de uno o más delincuentes y niega o suministra parcialmente ésta al organismo que lo requiere para el esclarecimiento de un hecho. Peor aún, cuando ocurre lo mismo con la ubicación de una persona solicitada.**
- Cuándo la víctima requiere de la unión de esfuerzos y recursos disponibles por parte de más de un organismo de seguridad, y surge la negativa de uno o más por no corresponderle directamente.**
- Cuando se emplea como justificación no válida “Evitar la fuga de información”**
- Cuando como ciudadano se nos es difícil ver, en el cumplimiento de su deber, por parte de los integrantes de distintos organismos de seguridad trabajar en conjunto.**
- Cuando en las pocas veces que se les obliga a los funcionarios de distintos organismos de seguridad ciudadana a un trabajo en conjunto y no pueda surgir entre ellos críticas que enseñen y construyan, sino que destruyan.**
- Cuando surge la duplicidad de esfuerzos**

- Cuando, para los ojos de cualquiera, sean expertos o no, observen y sufran las secuelas de un desempeño por SEPARADO de los integrantes de estas Dependencias.
- Esta posición puede ser respaldada con cualquier lectura al respecto, sea de este u otro país, como por ejemplo podemos leerlo en el informe **“PROGRAMA DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA PROMOVER LA COHESIÓN SOCIAL Y COMPETITIVIDAD, Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, (2013 – 2016) pp.24-25:**

...no sólo es importante la promoción de un enfoque integral que tenga presente la multiplicidad de factores implicados, sino también garantizar la efectiva coordinación que al efecto se logre hacer cumplir. ... la coordinación parte del supuesto central de que la producción conjunta de Seguridad Ciudadana implica la estrecha cooperación... ...comprende también el trabajo mancomunado y la coordinación vertical y horizontal de objetivos.... ... esta coordinación y complementariedad también involucra el ámbito de la cooperación público-privada y con la sociedad civil....

Ahora bien, sería irresponsable de parte del autor e incompleto su participación en este artículo, si luego de plantear el problema con la exposición de aquello que le respaldan, no dé su aporte como posible solución al problema, presto a ser modificado de cualquier forma con tal de ver la verdadera luz ante la situación.

Es entendible para todos, que la solución está en la impartición a los representantes de estos Organismos de Seguridad Ciudadana, de la importancia de la articulación y la cooperación entre ellos, para lo cual se está de acuerdo, en lo que no se concilia es en el momento y como se hace. Considera el autor que para los funcionarios ya activos hay que cambiar su forma de pensar, lo que no es fácil, pero con un verdadero liderazgo de quienes gerencian con su ejemplo se puede lograr, pero el fuerte está en la nueva generación, quienes deberían recibir estas instrucciones y reflexiones en la etapa de su formación, hasta aquí se explica el momento, en cuanto al cómo se hace, es porque nos equivocamos al no articular entre los organismos desde esas etapas, las aulas de clase, desde la formación del personal de relevo y no con palabra

solamente, sino también con encuentros e intercambios, los cuales estarían en constante monitoreo para evaluar que exista la flexibilidad de cambios adecuados y oportunos. En las aulas se les habla de lo que les corresponde a cada quien (Organismos de Seguridad), inclusive se siembra la supremacía ante cualquiera de manera ulterior, la automática negativa a trabajar en equipo.

Señores líderes, que van desde las altas esferas del gobierno, en las Universidades, jefes receptores del nuevo recurso humano y jefes de Despachos de estos organismos de seguridad, cambiemos verdaderamente nuestra manera de pensar al respecto, no les gustaría una desunión en el vecindario donde viven llevándolos a debilidades y a una vulnerabilidad, recuerden entonces que nuestro municipio, estado y nación, son vecindarios macros donde muchos vivimos.

Se espera que con la anterior lectura se haya logrado en los ejecutantes a detenerse y buscar en sus memorias con detenimiento, de cómo han y están trabajando los Órganos de Seguridad Ciudadana, si realmente hay articulación y cooperación entre ellos, según lo que constantemente se ha pregonado. Así estos receptores, cualquiera que sea su posición según condiciones que los regulen ante el tema, podrán responder las interrogantes que se formularon. Y se sabe sin peligro a equivocación alguna que sus respuestas, sean en voz alta o mentalmente, coincidirán en esencia con los últimos párrafos del presente artículo.

Es entonces que entre partes que se disputan, la fuerza será la triunfante, la división e individualidad lo único que podrá originar es debilidad y derrota, por lo que ante el delito para vencerlo todos debemos trabajar en equipo.

CONCLUSIONES

Se revisó el cuándo y cómo se imparte a quienes conforman estas instituciones acerca de la importancia y conveniencia de la articulación y cooperación. Concluyéndose que no debería ser en la etapa del ejercicio del servicio del funcionario, sino desde el comienzo de su formación para tal, sin menospreciar la necesidad del cambio de mentalidad al respecto

por parte de quienes ya son funcionarios activos: compañeros guías, jefes inmediatos y jefes gerenciales. Llegando el momento en que el ciclo permita la introducción del tema en su formación y sólo refuerzos en las etapas del desempeño de sus labores.

Confiando en haber despertado, aunque sea una inquietud por el tema, y seguro que contando con que de cualquier forma por lo menos un lector imitará al autor en detenerse a analizar esta situación y posiblemente en postular una mejor propuesta a la solución del problema, queda satisfecho la fuente de éste trabajo permitiéndole a su mente que continúe con el análisis crítico de otros nodos y pueda ser un colaborador más de la PAZ buscada por todos.

“La unidad lo hace todo y, por lo mismo, debemos conservar este precioso principio”.

Simón Bolívar

REFERENCIAS

- García, R, Pelayo y Gross. (1964) Pequeño Larousse Ilustrado, Ediciones Larousse, París, p. 369
- Google.com/diccionario. (2021). Recuperado el 20 de octubre 2022 de <http://WWW.google.com/diccionario>.
- “Programa de Innovación Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesión Social y Competitividad” bid - mdi Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 2016 República del Paraguay – Ministerio del Interior Diciembre 2014, pp. 24-25. Recuperado el 20 de octubre 2022 de <http://WWW.tbinternet.ohchr.org>
- Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana. Recuperado el 20 octubre 2021. pp. 1-12. Recuperado el 20 de octubre 2022 de [http://WWW.policehumanrightsresources.org./](http://WWW.policehumanrightsresources.org/)



CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

*Maximiliano Mauri Vidal**
Uruguay



NATURALEZA JURÍDICA

Se trata de un mecanismo de control de la Ley, tanto en su forma como en su contenido.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INSTITUTO EN EL URUGUAY
Aparece por vez primera en la Constitución de 1934, previéndose la “vía de excepción” y la “vía de oficio”. En la Constitución de 1952 se agrega la vía de “acción”. Así como que pueden ser objeto de declaración de inconstitucionalidad los decretos departamentales con fuerza de Ley en su jurisdicción. Antes de 1934, en las Constituciones de 1830 y 1918 puede decirse que se aplicaba la doctrina “MARSHALL”. Se trataba, en efecto, de constituciones semi-rígidas en tanto no preveían un mecanismo de control jurisdiccional (DR. RISSO FERRAND). Rige en estos casos, según este autor, los principios de temporalidad o jerarquía, según se tratare de normas de igual o distinto rango jurídico.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SISTEMA

Es un sistema de control jurídico NO POLÍTICO, que es posterior a la sanción de la Ley (diferencia con el sistema francés – el control se realiza en forma previa a la sanción de la Ley).

Sistema judicialista y concentrado (se centraliza en la Suprema Corte de Justicia quien tiene la competencia exclusiva y excluyente en la materia). En la antítesis se encuentra el “sistema difuso” en el cual cualquier órgano o diversos órganos del Poder Judicial pueden declarar

**Diplomado Internacional Especializado “La Prueba Penal y Prisión Preventiva en el Proceso Penal – Sistema Acusatorio” Facultad Interamericana de Litigación AC, Universidad de la Barra Interamericana de Abogados (BIA) (Ciudad de México – México). Diplomado en “Crímen Organizado y Delitos Complejos” Facultad Interamericana de Litigación AC, Universidad de la Barra de Abogados (BIA) (Ciudad de México – México). Escuela de Líderes de las Américas, Ciclo 2023: Cómo hacer del 2023 el mejor año de tu vida. Legado a las Américas.*

una ley inconstitucional (ej. de este sistema es el norteamericano en el que cualquier juez federal puede declarar la inconstitucionalidad siendo los efectos de tal declaración particulares y para el caso concreto pero en EEUU rige el precedente judicial obligatorio para casos iguales o similares). En Argentina es similar a EEUU pero no rige el precedente judicial obligatorio.

Sistema Kelseniano: se trata de un sistema concentrado en un órgano jurisdiccional que se encuentra fuera del Poder Judicial, y de la Administración, llamado Tribunal o Corte Constitucional, que tiene competencia exclusiva y originaria en la materia. Sus fallos tienen efectos generales y abstractos similares a la derogación. Este sistema creado por Kelsen en la Constitución austríaca de 1920 (la que organiza a los territorios germánicos y alpinos del desmembrado Imperio Austrohúngaro luego del Tratado de Saint Germain-en Laye de 1919). Dicho sistema se propaga por varios países europeos como España, Italia, Alemania, Portugal.

El art- 161 de la Constitución española de 1978 establece la competencia del Tribunal Constitucional: en el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de éstas entre sí.

El artículo 162 refiere a que se encuentran legitimados para accionar el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. Para el recurso de amparo lo puede interponer toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere y tiene el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación, no cabiendo recurso alguno. Hay que tener presente en este sistema y en este caso en

particular que una vez planteada la cuestión ante el Tribunal en ningún caso sus efectos serán suspensivos mientras se dirime el caso (no hay suspensión de la norma).

LEGITIMADOS ACTIVOS

Quienes pueden solicitar la declaración de inconstitucionalidad? “Todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo” (Art. 258 de la Carta). La locución “todo aquel” hace pensar que tienen legitimación activa para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una Ley, cualquier persona (**NO NECESARIAMENTE CIUDADANOS**) siempre que cumpla con el requisito antedicho.

INTERÉS

- I) DIRECTO:** Actual o inmediato.
- II) PERSONAL:** Que atañe a una persona determinada.
- III) LEGÍTIMO:** Que se encuentre tutelado por una norma jurídica.

DISTINTAS VÍAS (ART. 258 DE LA CONSTITUCIÓN)

ACCIÓN o DIRECTA: Se entabla una demanda ante la Suprema Corte de Justicia por “todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo” (Arts. 510 y 512 del C.G.P), en la cual se deberá explicitar en forma clara y concisa cuáles son los preceptos constitucionales (leyes o decretos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción) que se reputan inconstitucionales y cuáles son los principios o normas constitucionales que resultan transgredidas o violentadas (**IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: NO SOLO LAS NORMAS PUEDEN SER DECLARADAS INCONSTITUCIONALES, SINO TAMBIÉN LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO.**

ALCANCE DEL ART. 72 DE LA CARTA)

EXCEPCIÓN o DEFENSA

En el marco de un procedimiento judicial, el actor, el demandado o el tercerista, pueden plantear la excepción de inconstitucionalidad como mecanismo de defensa. Debe hacerse antes de que concluya la causa según la instancia (Arts. 510 a 512 y 514 y 516 del C.G.P.. Aquí la inconstitucionalidad constituye una cuestión previa ya

que el juez inferior suspende las actuaciones y eleva los autos a la SCJ, estando a las resultancias del fallo de ésta. Dicho fallo es vinculante para el juez inferior y para las partes de ese proceso (cuestión previa).

DISTINTAS VÍAS (ART. 258 DE LA CONSTITUCIÓN)

En caso de no ser admitida la excepción podrá plantearse “recurso de queja por denegación de inconstitucionalidad ante el mismo juez de la causa que denegó la excepción” conforme lo dispone el Art. 262 del C.G.P.-

OFICIO

Cualquier juez puede solicitar por sí mismo la declaración de inconstitucionalidad de una ley en el decurso de un proceso, desde su inicio y hasta que se dicte sentencia definitiva cuando advierte que la norma que va a aplicar para el dictado de sentencia interlocutoria o definitiva es inconstitucional. El procedimiento es igual a la vía de excepción y la inconstitucionalidad también constituye cuestión previa (Arts. 511 y 518 del C.G.P).-

Las acciones de inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio suspenden el procedimiento (Art. 514 del C.G.P).-

OBJETO

Pueden ser declaradas inconstitucionales las leyes y los decretos de los Gobiernos Departamentales con fuerza de Ley en su jurisdicción (Arts. 256 y 260 de la Constitución de la República). Ej. Tasa bromatológica o tasa general municipal a los cuales se los ha considerado un impuesto inconstitucional.-

MATERIA (POR RAZONES DE FORMA O DE CONTENIDO – ART. 256 DE LA CONSTITUCIÓN)

Por razón de forma; Cuando la Ley o Decreto con fuerza de Ley no fue elaborado conforme al procedimiento establecido en la Constitución (Arts. 133 y sgts.) o bien porque requiriéndose determinada mayoría la Ley fue sancionada por mayoría simple (Ej. Art. 189 – Creación de nuevos Entes Autónomos y supresión de los existentes se requiere al menos dos tercios del total de componentes de cada Cámara).-

MATERIA (POR RAZONES DE FORMA O DE CONTENIDO – ART. 256 DE LA CONSTITUCIÓN)

Por razón de contenido; Cuando la Ley o el Decreto con fuerza de Ley contravienen algún precepto constitucional (Ej. Una Ley que estableciera la pena de muerte o que el Estado sostiene alguna religión en particular. Estaría en contravención de lo establecido en los Arts. 26 y 5 de la Carta).-

Debe destacarse que cuando una norma es declarada inconstitucional por no haberse cumplido con el procedimiento establecido por la Constitución para la elaboración de las Leyes, se trata de una inconstitucional por razón de forma.

IMPORTANTE: La S.C.J no juzga el mérito de la norma sino su legitimidad. Es decir, no se trata de establecer si una Ley es “buena o mala” sino si es conforme a la Constitución o no.-

FINALIDAD

Mantener la cohesión del sistema normativo vigente. En definitiva mantener la vigencia del Estado de Derecho.

IMPORTANTE : Las “leyes constitucionales” son uno de los mecanismos de reforma de la Constitución (Art. 331, Lit. “D” de la Carta). No son leyes en sentido estricto (Arts. 133 y sgts de la Carta). Por tanto NO PUEDEN SER DECLARADAS INCONSTITUCIONALES.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS TAMBIÉN ESCAPAN AL CONTROL JURISDICCIONAL DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE REALIZA LA S.C.J, NO OBSTANTE ESTÁN SUJETOS AL CONTROL JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (T.C.A).

Sin perjuicio de lo cual los Jueces pueden no aplicar un acto administrativo cuando el mismo es contrario a la Ley, máxime si es contrario a la Constitución.

EFFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE “SEPARACIÓN DE PODERES” :

Alcance subjetivo: La declaración de inconstitucionalidad tiene efectos para el caso en concreto (Art. 259 de la Constitución de la República).

Sólo se aplica a aquellos que la solicitaron. Motivo? Se sostiene que el argumento radica en el “principio de separación de poderes”. Sólo el Poder Legislativo (único poder del Estado con competencia para crear o modificar una Ley) puede dejarla sin efecto mediante la derogación expresa o tácita de la misma. También se ha sostenido (como es el caso del DR. CASSINELLI MUÑOZ) que el efecto para el caso concreto radica en la garantía del “debido proceso”.-

Alcance temporal (dos posiciones):

I) Los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad son hacia el futuro (ex nunc), esto es, desde el dictado de la sentencia en adelante (no hay retroactividad).

EFFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE “SEPARACIÓN DE PODERES” :

Fundamento: Principio de “Seguridad Jurídica” (doctrina de los derechos adquiridos). Consolidación de una determinada situación jurídica al amparo de la Ley que fue declarada inconstitucional.

II) Los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad se retrotraen al pasado (ex tunc); Dos variantes de esta posición:

- Desde la interposición de la demanda (posición mayoritaria) – se considera que es desde este momento que el sujeto manifiesta la lesión en su interés.**
- Desde la vigencia de la Ley (la Ley que es declarada inconstitucional es una Ley “nula” o “inexistente” y por tanto no debe producir efectos jurídicos).**

PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD

Esta presunción tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los EE.UU.

Cierta parte de la Doctrina, al igual que la S.C.J, entienden que las normas se presumen constitucionales. Se trataría de una presunción relativa (admite prueba en contrario). Esto tiene una repercusión directa sobre la carga de la prueba, ya que al existir una presunción de

constitucionalidad el promotor de la acción deberá hacer caer dicha presunción probando que la norma no es constitucional, de lo contrario se aplicará la presunción. Otra parte de la Doctrina sostiene que este principio no existe y no tiene base normativa ninguna (DR. DURÁN MARTÍNEZ). Por otra parte (como lo plantea el DR. SAPOLINSKI) carecería de sentido que existieran mecanismos de control constitucional si no hubiera una probabilidad cierta de “afectación del orden constitucional”.

Por otra parte existe Jurisprudencia firme de la S.C.J en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad no procede en aquellos casos en que la norma haya sido cumplida en forma pacífica y constante.

Dr. Héctor Gros Espiell “ (...) Creo que no hay que inflar ni aceptar ciegamente el "mito" de la presunción de constitucionalidad de las leyes, lo que sería "innecesario y pernicioso", ni utilizar esta presunción como "una muletilla o lugar común para rechazar cuestionamientos serios a actos jurídicos (legales o administrativos). Hay que partir del reconocimiento de que se trataría de una presunción "iuris tantum", que cede ante la prueba de la incompatibilidad entre la ley y la Constitución. Hay que tener en cuenta a toda la Constitución, a la integralidad de su texto y, repetimos, a sus principios fundamentales, a los valores y a los objetivos constitucionales (...) ”.

“LEADING CASE” O CASO EMBLEMÁTICO: Sentencia del Juez John MARSHALL en el caso “MARBURY vs. MADISON” (el Juez, cuando se le presenta un caso en el cual resultan aplicables más de una Ley debe determinar cuál Ley es la aplicable. Si la oposición radica entre la Constitución y la Ley , debe aplicarse la primera, por ser la norma de mayor jerarquía. Sostener lo contrario importaría que los Jueces “cierren los ojos” frente a la Constitución). Otro fue el caso DRED SCOTT de 1858 (esclavo que reclamó a la viuda de su amo la manumisión la cual fue negada por la Justicia Federal bajo el argumento de que los esclavos no tienen derecho a comparecer ante ésta jurisdicción. Hay que tener en cuenta que eran los años previos a la guerra civil o de secesión en EEUU y que la esclavitud fue uno de los motivos de ella junto con la

JURISPRUDENCIA

Sentencia que declaró la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley 18.572 del 13/09/2009 (Ley de abreviación de los juicios laborales) y Sentencia que declaró la inconstitucionalidad del I.R.P.F a las pasividades). En los casos de la declaración de inconstitucionalidad se comunica al Poder Legislativo con fines informativos, en el caso del IRPF a las pasividades al existir casos en los que la ley fue declarada inconstitucional y casos en los que no lo fue, se procedió a una reforma legal a fin de su eliminación a las pasividades y su sustitución por el IASS.

ART. 330 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA : “ El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación”.

CONTROL DE REGULARIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

ART. 309 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder...”.

El T.C.A sólo juzga la legalidad del acto. En tanto que el mérito (oportunidad o conveniencia) del mismo puede y debe ser considerado por la Administración en forma previa a entablar la acción ante dicho órgano en la vía recursiva.-

YO: Personalmente soy partidario de un sistema kelseniano en virtud de los efectos de la sentencia (generales y abstractos similares a la derogación) como medio de uniformizar la jurisprudencia y de la conveniencia de que la inconstitucionalidad sea considerada y juzgada por un órgano especializado en la materia e independiente del PJ y del PE.

BIBLIOGRAFÍA

- **Dr. Martín Risso Ferrand - “DERECHO CONSTITUCIONAL” TOMO I, FCU, SEG. EDICIÓN, OCTUBRE 2006.-**
- **Dr. Horacio Casinelli Muñoz - “DERECHO PÚBLICO”, FCU, TERCERA ACTUALIZACIÓN, JULIO 2009.-**
- **“ESTUDIOS JURÍDICOS EN MEMORIA DE ALBERTO RAMÓN REAL”, FCU, 1ERA ED., OCTUBRE DE 1996.-**
- **“En torno a algunos temas de interpretación constitucional” - REVISTA “LA LEY” - AÑO 2009.-**
- **Base de Jurisprudencia del Poder Judicial (www.poderjudicial.gub.uy) y de la Revista “LA LEY”.-**



*Patricia A. Cozzo Villafañe**
Argentina



RESUMEN

Este trabajo trata acerca de las consecuencias del intercambio de información y el impacto tributario. Como surgieron estas políticas globales a partir del marco histórico. Definición de compliance. Leyes argentinas para evitar el fraude. Políticas globales. Surgimiento del cruzamiento de información. Modelo bilateral y Multilateral. Régimen penal tributario. Caso Falciani. Conclusión.

INTRODUCCIÓN

Debido al avance de muchas cuestiones que hoy día son trasnacionales y frente a las maniobras que erosionan las bases imponibles fue necesario que los Estados desde lo global establezcan políticas públicas a fin de evitar estas prácticas y de este modo resguardar los recursos que permiten financiar los derechos que contiene nuestra Constitución Nacional.

Fue con esa finalidad que los diferentes países y desde el punto de vista global abordaron esta cuestión y arribaron al acuerdo de dictar medidas de acción positiva a fin de eliminar las prácticas no deseadas o disfuncionales y así fue como se procuró a través de los órganos recaudadores regular estas cuestiones y establecer un intercambio y

***ABOGADA. POSGRADO EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBNACIONAL.DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO ESPECIALISTA EN TRIBUTACION LOCAL POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO. DIPLOMADA EN GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS PROVINCIAL POR EL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. POSGRADO EN DISCAPACIDAD Y DERECHOS POR UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.. DOCTORANDO EN CIENCIAS JURIDICAS CON TESIS EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DE MORON. SECRETARIA DEL INSTITUTO DE DERECHO TRIBUTARIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MORON. MIEMBRO DEL OBSERVATORIO DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FUNCIONARIA DE LA AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EX PROFESORA UNIVERSITARIA. CONFERENCISTA Y ORGANIZADORA DE EVENTOS. AUTORA DE ARTICULOS EN REVISTAS DIGITALES DE ARGENTINA Y DE OTROS PAISES DE LA REGION.**

cruzamiento de datos con la finalidad de evitar ciertas conductas fraudulentas.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y TRIBUTOS

Hoy día se reconocen los derechos humanos que se encuentran en nuestra Constitución Nacional. Estos derechos y garantías algunas veces y si lo analizamos desde lo que es la República Argentina un tanto difusas se ejercen conforme las normas que reglamentan su ejercicio. Es por eso que los Estados deben resguardar de no desvirtuar estos derechos a través de las normas de carácter procesal que reglamentan los derechos fundamentales que se encuentran garantizados en la Constitución. La ley de presupuesto también es una cuestión constitucional y es una herramienta con la que cuenta el estado y está reglada en el artículo 75 inciso 2 de ese plexo legal. Se aprueba todos los años y establece los recursos con que contara cada uno de los Ministerios para financiar las distintas políticas públicas.

Un modo también de resguardar estas cuestiones es cuidando la recaudación impositiva como bien jurídico protegido ya que es la herramienta con que cuenta los estados para poder redistribuir la riqueza.

Desde el punto de vista del legislador es hacer más explícitos los derechos implícitos y de esta manera que los derechos sean menos difusos. Esto surge de nuestra primera Constitución que es el texto constitucional de 1853 de donde surgen garantías como la igualdad del art. 15, la equidad del art. 16, el principio de legalidad o reserva del art. 18 de ese texto que incluye otros como el de no retroactividad, el de la ley penal más benigna establece en ese artículo de que forma el estado debe realizar sus pesquisas y obtención de las pruebas de los que intente valerse en el marco de los procesos ya sea contenciosos fiscales o judiciales. Ya que estos principios rigen tanto en el orden administrativo como en los procesos de índole judicial.

A mediados del siglo veinte y luego de intensas luchas gremiales y como consecuencia de otros procesos históricos que se desarrollaron surgieron nuevas disciplinas como lo fue el derecho laboral, el previsional y también

el derecho tributario y la constitución nacional se reformó nuevamente en el año 1956 y se incorporaron derechos sociales que se encuentran en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

También se debe ponderar que existen derechos implícitos que surgen del artículo 33 de la Constitución que están en el art. 33 que son aquellos que surgen de la forma republicana de gobierno.

Lamentablemente y durante el siglo pasado nuestro continente americano sufrió una serie de dictaduras y esto hizo que las personas lucharan contra ellas y contra los métodos utilizados por estos gobiernos como lo fue la desaparición de personas y otras violaciones de los derechos humanos. Estos derechos en el año 1994 fueron en Argentina incorporados a Nuestra Constitución Nacional en el art. 75 inciso 22 donde incorpora Pactos y Tratados Internacionales tanto de carácter global como regionales.

Se refirió a la recaudación de tributos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y también lo hizo la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 36 donde se habla de la obligación de todo ciudadano de bien de contribuir al sostenimiento del Estado. Acerca de estas cuestiones también hablo Juan Bautista Alberdi quien manifestaba que el estado debía estar sostenido porque aquel que no lo hiciere sería el peor gobierno. Esto es así porque los derechos fundamentales tienen un costo de financiamiento y esto es así si se analiza a la luz del derecho constitucional presupuestario como ya lo expresara Horacio Corti en este sentido en su obra “Financiar la Constitución”.

Con la finalidad de resguardar la recaudación se establecen diferentes políticas públicas orientadas a ese objetivo. En el presente trabajo abordare el cruzamiento de información referida a los contribuyentes y responsables entre los diferentes órganos recaudadores de los distintos niveles de gobierno. Esto ya sea el que se recaba por medio de las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes a la autoridad de aplicación que sería la administración tributaria y la que brindan los diferentes agentes de información.

En este orden debo manifestar que el Estado cuenta con los derechos de tercera o cuarta generación que son aquellos que surgen como consecuencia de hechos violentos que también sucedieron a fines del siglo pasado y principios del actual que hizo que se suscribieran tratados con la finalidad de terminar con el terrorismo y el crimen organizado que son los de Viena, Palermo, Budapest y Mérida, donde se habla acerca del delito de lavado de activos.

También como política criminal que busca dentro de un ámbito territorial dictar medidas de acción positiva para evitar el lavado de activos procedente de la evasión impositiva y el fraude por el abuso de convenio y conductas elusivas que tiendan a erosionar las bases imponibles, esto fue en el año 2009 en que se incorporó al artículo 323 del Código Penal la figura de la evasión impositiva.

MARCO HISTORICO

Si bien ya sabíamos que todo ciudadano de bien tiene obligación de contribuir al sostenimiento del Estado desde que Juan Bautista Alberdi así lo expusiera en su libro “ La Bases” que es una de las fuentes de nuestra Constitución Nacional. Así lo expresaron durante la Revolución Francesa y también los constituyentes de los Estados Unidos de Norteamérica y en la Constitución de Chile. Luego de concluida la segunda guerra mundial surge un ordenamiento de carácter trasnacional que tiende hacia lo que sería el establecimiento de determinado orden mundial en el concierto de las naciones. Es muy importante esta circunstancia histórica en nuestro país, ya que el derecho tributario surge como disciplina autónoma a mediados del siglo pasado. O sea que se podría afirmar que es contemporáneo a estos acontecimientos. Este proceso originó una modificación constitucional y que se introdujera el art. 14 bis a la Constitución Nacional en el año 1957 y de esta manera incorporar derechos sociales a la Constitución Nacional los que se encontraban en muchas normas jurídicas que se fueron dictando desde el año 1942 hasta 1955 durante el llamado estado de bienestar ¹.

1. CARRIO Genaro “Algunos Aspectos del Recurso de Amparo” Abeledo Perrot Buenos Aires Argentina-1959 p. 231.

Luego y como 20 años después se produjeron algunos acontecimientos internacionales como la invasión de Rusia a la ex República de Checoslovaquia, protestas en EEUU por la guerra de Vietnam movimientos de trabajadores y estudiantes en Europa (Mayo Francés) y en este contexto surgen dos posiciones doctrinarias diferentes: la del realismo encarnada por Genaro Carrio y la del positivismo jurídico que es la de Sebastián Soler, que si son analizadas desde el punto de vista filosófico podemos advertir que no son posiciones tan encontradas. Se trata de diferencias acerca de la interpretación de las leyes ².

En la década de 1970 surgió en los países del Caribe una suerte de violencia ligada a diversos grupos y este fue el origen del cruzamiento de información en un primer momento. Que fue la necesidad de las autoridades de desbaratar el accionar de estos grupos. En el año 1993 se produce la Conferencia Internacional de Derechos humanos que da lugar a la Convención Americana de Derechos humanos que en su artículo 36 establece la obligación de los ciudadanos a contribuir con el sostenimiento del Estado Luego en la República Argentina en el año 1994 se reformó la Constitución y se incorporaron a la misma diferentes tratados y convenciones referidos a diferentes derechos humanos al art. 75 inc, 22 de nuestra Constitución Nacional. Se trata de diversos instrumentos y convenciones tanto de carácter internacional como también de carácter regional. También Nuestro país asumió el compromiso internacional de dictar medidas de acción positiva para de esta manera hacer factible que estos derechos puedan ser cumplidos, lo que significa que debía dictar normas jurídicas que regulen el ejercicio de esos derechos. Mediante los tratados de Viena, Palermo, Mérida se dictamen medidas que establecen el cruzamiento de información para de esta manera evitar conductas que tiendan a evitar la evasión impositiva, elusión de tributos y otros delitos graves que ocasionan graves daños a los Estados. Estas conductas dentro del derecho tributario internacional son consideradas fraude según la legislación interna de cada uno de los países ³.

2. SABSAY Daniel “La Constitución Nacional Comentada y Anotada” Errepar 1999, p. 30-31

3. BARBERO Natalia, “Protección Internacional de los Derechos Humanos” Buenos Aires Argentina, tomo 2 , Rubinzal Culzoni.

COMPLIANCE

Significa colaboración para así minimizar los riesgos de fraude tanto dentro de la empresa privada como en la administración pública.

Esto es prepararse para así cumplir con las exigencias o sea que obliga a la Administración Tributaria a profesionalizarse y prepararse para poder estar a la altura de este cometido.

El fraude significa un problema para la empresa. Ya que un empleado desleal se apropia de activos de la empresa. Lo mismo sucede en el sector público.

Se busca prevenir el soborno (corrupción). O sea el fraude interno y el lavado de activos.

Esto se debe a una política llevada adelante desde los EEUU de norte américa con la finalidad de luchar contra el crimen organizado para lo cual necesita eliminar la corrupción ya que esta es un problema global.

Es un sheriff global ya que conforme a sus políticas públicas aquel que utiliza sus servicios pasa a ser tratado como ciudadano americano, por utilizar sus servicios de correo, sus bancos y por contar una empresa una filial en su territorio o porque sus acciones cotizan en la bolsa de Wall Street. En orden a ello quienes paguen sobornos serán multados, ya sea a título personal o en carácter de directores de la empresa de que se trate, lo que implica la apertura de un proceso. Como la simple apertura de un proceso trae como consecuencia el derrumbamiento de la cotización de las acciones de la firma dentro del mercado nacional de valores es que las empresas procuran no incurrir en estos actos. Es por ese motivo que se allanan en forma voluntaria a las pretensiones estatales y por ese motivo deciden abonar voluntariamente el monto al que acuerden con el Fiscal interviniente en carácter de multa. Lo que sería una especie de proceso de carácter abreviado donde se evitan los cargos o se negocian.

Con el ingreso de la República Argentina a la OCDE se establecen compromisos internacionales en este sentido y por ese motivo es que se sancionan leyes como por ejemplo la ley 27401.

LEYES PARA EVITAR EL FRAUDE EN LA ARGENTINA ⁴

LEY 22415 CODIGO ADUANERO. ART 876 INC. G Y E, ART. 888 Y ART 904.

LEY 19359 REGIMEN CAMBIARIO ART. 2 INC F.

LEY 20680 ABASTECIMIENTO ART. 8

LEY 27430- EVASION DE TRIBUTOS. ART. 14 RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS.

- 1. Evasión simple.**
- 2. Evasión agravada.**
- 3. Aprovechamiento de beneficios fiscales.**
- 4. Aprovechamiento indebido de recursos.**

ESTABLECER POLITICAS GLOBALES MEDIANTE LAS LEYES.

En la ley de ganancias se procura la repatriación de capitales. Con escaso éxito debido a la incertidumbre jurídica existente como consecuencia de los incentivos fiscales que deberán establecerse como producto de la pandemia debido a la gran velocidad de los cambios en materia comunicacional, que impacta en otra áreas, el uso de las fintech y otras variables que no se encuentran legisladas y muchas otras que inciden en la falta de certidumbre jurídica además de un exceso de voracidad de los fiscos debido a las necesidades y los grandes costos que implica el financiamiento del aparato estatal. Esto genera problemas de interpretación de las normas legales especialmente las de procedimiento en lo se refiere a las lagunas epistemológicas del juez en el marco de los procesos contenciosos. Esto sucede cuando se confrontan algunos principios del derecho penal nuclear con algunas cuestiones típicas del derecho administrativo sancionador.

La AFIP se informó a través de un convenio de intercambio de información luego del Convenio Multilateral de Asistencia Mutua en materia tributaria suscripto el 29/10/2014 en lo que se refiere a cuentas no declaradas en el exterior respecto de personas que registran domicilio en la República Argentina.

4. Régimen Penal Tributario- Ley 27430.

Nuestro país adhiere a este convenio suscrito en Berlín en el año 2014 y en el marco de la OCDE a partir del año 2017 comenzó a intercambiar este tipo de información en lo que se refiere a cuentas anteriores al año 2015 y a partir del año 2016.

Esto permite que la agencia de Ingresos Públicos pueda ajustar los tributos: Ganancias, bienes personales e IVA pero el límite a la determinación de oficio son los plazos de prescripción que surgen de la ley 11683. ⁵

Pero muchas veces existe quienes se preguntan si cuando se trata de una infracción al Régimen Penal Tributario la prescripción para la persecución de los delitos son los plazos o los que establece el Régimen Penal Tributario. O sea si las causas de extinción de las obligaciones dede el punto de vista del derecho sustantivo pueden ir más allá de FILCROSA.

En caso que exista un requerimiento del organismo recaudador es necesario constatar el fundamento del ajuste y ver como se compone la base imponible y si no hubo un corrimiento de la misma.

También hay que ver si el reclamo es por ser titular del tributo, apoderado o responsable.

Hay que cuidarse los trust irrevocables o de las llamadas fintech y del dinero digital sin regulación que provoca hasta impacto en el sistema bancario tradicional y en los llamados derechos del consumidor. ⁶

SURGIMIENTO DEL INTERCAMBIO DE INFORMACION

Existe un acuerdo de cooperación internacional en materia tributaria mediante el intercambio de información.

Este acuerdo se formalizó mediante el grupo de trabajo global de la OCDE. En el año 1998 porque se puede observar que no obstante la existencia de acuerdo de intercambio de información trasnacional esto en realidad no sucede.

6. PAREDES, Priscila Rossana “Evasión Tributaria vs. Mecanismos de Control Implementados” de fecha de Publicación de fecha 30/06/2016 en la revista RETOS de Guayaquil Republica de Ecuador, editor “Universidad Politécnica Salesiana”

Este acuerdo implica la obligación de informar aquellas prácticas que la OCDE considera perniciosas como por ejemplo la doble imposición.

Existen dos modelos que son los siguientes:

BILATERAL

Que es cuando un estado comparte información con otro que como por ejemplo lo que sucedió entre los Estados Unidos de América y Argentina en el año 2016.

MULTILATERAL

Que es cuando todos los estados suscriptores de un convenio se comprometen a intercambiar información tributaria entre sí.

- a) La información que exista en poder de los bancos.**
- b) Información respecto a las personas jurídicas y fideicomisos financieros existentes en la inspección general de justicia, fundaciones, acerca de sus fundadores, comisión directiva y sus miembros y los beneficiarios.**
- c) Órganos fiscales (AFIP y ARBA) que puede ser requerida por órganos judiciales mediante oficio pero no por medio de intercambio de información tributaria.**

No existe obligación de informar:

- a) De aquellos que brindan asesoramiento jurídico y financiero. 7**
- b) Para su utilización en un proceso abierto o previsto.**
- c) Si es contraria al orden público.**
- d) Si no existe reciprocidad entre los países.**

Esta información reviste carácter de confidencial.

En el marco del cruzamiento de información fiscal la agencia federal de ingresos públicos detectó mucha cantidad de fondos no declarados por argentinos en el exterior que oscilan entre los 2600 millones de dólares.

Esta información fue recibida por el gobierno argentino por un intercambio de información tributaria realizada en el año 2017 luego de adherir al convenio multilateral de asistencia mutua en materia tributaria

7. Acuerdo Sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria ver <https://www.oecd.org>.

suscripta en el año 2014. Esta información impacto internamente ya que internamente se modificó la ley de ganancias en procura de obtener la repatriación de capitales.

El fisco a partir de haber recibido esta información comenzó a realizar labores en el padrón de los contribuyentes y a corregir bases de datos para detectar aquellos que no cumplen con el deber formal de presentar declaraciones juradas, los que no declararon esos fondos existentes en el exterior y posteriores políticas de repatriación de capitales poco exitosas.

Se comenzó a partir del acuerdo multilateral suscripto entre autoridades competentes al intercambio de información financiera respecto a cuentas abiertas en otros países y las que se abrieron con posterioridad.

Se trata de información sensible respecto a activos financieros de argentinos con residencia en la república argentina y que no habían declarado estas cuentas y por eso fueron incluidos en el “Common reporter standard”.

En la actualidad informan y realizan este intercambio países como Uruguay, Suiza, Bahamas, Brasil, Mónaco, Santa Lucía, Hong Kong y Andorra entre otros.

Argentina además de haber adherido a este convenio cuenta con una red de tratados bilaterales con países que prevén el intercambio de información fiscal. Pero no obstante la información que pueda llegar a intercambiarse la AFIP está obligada a respetar los plazos de prescripción que surge de la ley 11683 como un límite al ejercicio de la potestad tributaria por parte del estado.

Puede realizar los siguientes ajustes como consecuencia del intercambio de información tributaria:

- 1. Ajuste de impuesto a las ganancias del 35 % además de la figura del crecimiento patrimonial no justificado (art. 18 de la ley 11683).**
- 2. Bienes personales por los saldos al 31 de diciembre de cada año calendario. Esto varía de acuerdo a la base imponible omitida (y esta base se compone de un monto fijo y otro variable.**

3. Ajuste al impuesto al valor agregado.

Puede existir intereses resarcitorios multas por defraudación conforme la ley 11683.

REGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Si como consecuencia de este ocultamiento de activos en el exterior se hubieren ocultado y omitido impuestos por sumas que excedan los pesos 1.500.000 podía ser denunciado por evasión simple. Y si excedía los 15.000.000o se hubieran utilizados estructuras societarias para ocultar la verdadera identidad de los titulares la figura será evasión agravada. Esto surge de la ley 27430. ⁸

Ahora si fuere cometido con antelación al 30 de julio de 2017 pueden formularse cargos por montos inferiores o sea que si excedieran las cifras de 400.000 y 4.000.000 ya que la AFIP dio instrucciones de negar la aplicación de la ley penal más benigna arguyendo que se trata de una actualización ya que los montos estaban desdibujados por la depreciación monetaria obstante ⁹ lo cual existe siempre la posibilidad de revisión judicial a lo resuelto por la instancia administrativa.

Se debe dejar sentado que por medio de este cruzamiento de información es posible corregir la base de datos.

Este cruzamiento de información también incluye el poder detectar los inmuebles que pagan como baldíos cuando tenían construcciones realizadas a través del cruzamiento de la información que surge de la base de datos de las empresas prestatarias de servicios. Ya que esto es lesivo para la equidad y la búsqueda de establecer políticas públicas que disminuyan la desigualdad refiriéndome en este párrafo a la tributación local (artículo 16 de la Constitución Nacional).

CASO FALCIANI

Desde el punto de vista tributario es menester desmenuzar un caso que fue muy resonante en el mundo de lo penal económico que es el caso Falciani y acerca de los pactos y tratados internacionales que existen con el fin de evitar la doble imposición y la evasión impositiva.

8. Ley 27430.

9. Caso Falciani no es lo mismo que la lista de colaboración entregada al Gobierno de Grecia.

En el Banco HSBC (existe una nómina) de más de 130000 personas que eran evasores fiscales: Esta información fue extraída en forma ilegal por un ex empleado que era de profesión ingeniero informático de apellido FALCIANI. Estas personas supuestamente habían cometido una evasión contra los países de la Unión Europea. Según dice Falciani al ser puesto en libertad luego de haber realizado tareas espionaje que el primeramente trato de poner estas circunstancias en conocimiento de las autoridades y luego y ante la falta de respuesta de estas huyo a Francia con la información.

En el año 2009, Falciani es allanado ya que Suiza había solicitado una orden de captura internacional en su contra Como resultado de la documentación secuestrada en el marco de esa orden surge lo que se conoce como la lista Falciani que son los archivos informáticos de los evasores fiscales. Como muchos habían delinquido contra países de la comunidad europea Francia decide informar a otros estados como España y Reino Unido. Para de esta forma colaborar en la lucha contra la evasión fiscal. Puesto en libertad Falciani se instala en España país este que no lo extradita pese a los requerimientos de Suiza a cambio de su colaboración con la justicia y por resolución de la Audiencia Nacional. En el año 2015 el contenido de la lista fue que salió a la luz gracias al trabajo del consorcio internacional de periodistas de investigación. Esta lista contiene los nombres de ricos y famosos que son evasores fiscales entre personas humanas y jurídicas y fue publicada por Le Monde.

Como resultado de esta colaboración de Falciani la Agencia Tributaria española lleva adelante un recupero de deuda intimando de pago a más de 500 deudores. Ellos de ser intimados regularizaron su situación. Dentro de esa nómina había empresas dedicadas al mercado inmobiliario si bien nunca se publicó su composición sin embargo realizaron tareas de investigación el diario El País. ¹¹

10. Las Sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales de Juan Manuel Álvarez Echague editorial Ad-Hoc

11. Jurisprudencia. Caso Falciani. “Prueba obtenida en forma ilegal”

Dentro de esta investigación surge la llamada lista Lagarde que no debe ser confundida con la lista del Banco de Grecia. Esto surge porque en el año 2010 el servicio de inteligencia de Francia le entrega una copia de esta lista al servicio de inteligencia griego ya que muchas personas que había en la misma eran de esta nacionalidad. Es por eso que las autoridades griegas se encuentran la ministra de economías Christine Lagarde. Esta información es colocada en manos del jefe de la policía fiscal de la unidad de crímenes financieros y económicos solicitando una investigación completa. No obstante lo cual las autoridades griegas no lo hicieron y no solo eso sino que también extraviaron el CD con todo su contenido. Luego y en las elecciones siguientes le sucede el partido social demócrata que dio inicio a una investigación, no obstante lo cual no se entabló denuncia penal quienes trataron de investigar fueron personas que aparecieron muertos generalmente de muerte dudosas o se suicidaron o fueron encarcelados, otras personas muertas en cuartos de hoteles o con suicidio en los sótanos de su propia vivienda de forma misteriosa. Estas listas destapaban el fraude llevado adelante solo con el objeto de evadir tributos.

En nuestro país las autoridades establecieron normas para que los bancos y entidades financieras fueran agentes de información y de esta manera tratar de evitar el fraude fiscal ya que el banco sería responsable solidario en forma conjunta con el infractor. Al modificar la norma en este sentido se dictan medidas de acción positivas con la finalidad de evitar la defraudación fiscal y otros ilícitos tributarios.

No obstante lo cual debo manifestar que existió la causa banco HSBC Bank Argentina SA y otros s/ ley 27469.

12 Según el banco el ingeniero informático FALCIANI robó información con el objeto de vender la misma Esta causa se inició por el convenio entre la República Argentina y la República Francesa que exige que se evite la doble imposición y la evasión fiscal de impuesto sobre la renta y el patrimonio. No obstante lo cual el juzgado interviniente y debido al

12 Las Sanciones tributarias frente a sus límites constitucionales de Juan Manuel Álvarez Echague editorial Ad-Hoc.

planteo de algunos defensores particulares consideran que las pruebas fueron obtenidas de forma espuria y que por lo tanto no debe ser tenida en cuenta porque proviene de un hecho ilícito cometido por Falciani (fruto del árbol envenenado) y esto nulifica todo lo actuado en consecuencia y se hace extensivo a las causas Charles Hnos, Florentino Montenegro entre otras. Otro motivo fue que el allanamiento fue excesivo ya que se colectaron datos de terceros que no estaban incluidos en la orden de allanamiento. ¹³

Incumplimiento de la AFIP de la regla de pacta sunt servanda que es un adagio romano que significa que los pactos deben cumplirse y que deben ser para las partes como la ley misma. Por lo tanto se violentó la convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto se debe a que el convenio entre Argentina y Francia para evitar ¹⁴ la doble imposición y evasión fiscal que se incumplía con el art. 25 de la ley 27010 que prohíbe a la AFIP las acciones de pesca”.

Además debe tenerse en cuenta que la ley 27010 como medida de acción positiva fue posterior a la suscripción del convenio.

Si se toma en cuenta que la ley 27010 fue posterior al informe que surgió de la llamada lista Falciani y por lo tanto violento la constitución. Existen muchos principios constitucionales que son aplicables en materia tributaria acerca de esto escribió un libro el Dr. Rodolfo Spisso y también lo hizo el doctor Enrique Bulit Goñi quien expreso que si el principio de no retroactividad se ve afectado se vulnera el principio de reserva que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional. Este principio que hoy día se aplica a todas las ramas del derecho nació con el derecho Canónico y surgió como un lógico entendimiento que una ley que se dicta es para proyectarse en el futuro de las naciones y por ese motivo no puede existir una proyección con miras al pasado. Este principio sirve para establecer la seguridad jurídica que garantiza el principio de certeza que debe existir en la relación Fisco o Estado contribuyentes. Este principio rige en todos los estados de derecho y en el marco de esa interrelación entre ambos lo

13. Ley 27010. Medidas de acción positiva adoptadas por la República Argentina.

14. Buenas prácticas aplicadas en países de américa latina. Ver hopos/repositorio.cepal.org.

que comprende deberes y obligaciones reciprocas que rigen a todos los sistemas normativos en los estados donde prima el derecho. Este principio cede solo en el caso que se establezca la fecha de entrada en vigor en la letra de la norma misma. Este principio rige en el derecho administrativo en el momento de aplicar sanciones o penal de tipo tributario.

15 Este principio muchos consideran que fue vulnerado en la “ley Orgánica e apoyo humanitario para el combate del covid 19” y se denunció que este proyecto vulnera este principio legal ya que muchas contribuciones que se pretenden instaurar serían retroactivas.

Esto lo manifiesto a modo de derecho comparado en la que se refiere a otros países de la región entre ellos a la República de Ecuador y trata acerca de las críticas que se alzaron en ese país respecto a la vinculación de estos principios Acá en Argentina y volviendo a la cuestión emergente de la causa que se derivara de la llamada lista Falciani que fuera entregada por la República de Francia. 16

Existen muchos casos en que se dictaron normas que se considera que vulneraron este principio. También existen en las Administraciones Tributarias como parámetro para la determinación de tributos la última declaración jurada presentada por el contribuyente y muchas veces en ese escenario como sucedió durante el transcurso del año 2020 se encuentra desdibujada de la realidad debido a este escenario de pandemia. Ya que existen muchas actividades que fueron golpeadas o sea que la aplicación de este criterio de cálculo podría afectar el patrimonio de las empresas quienes debieron solicitar incentivos a los efectos de continuar con sus actividades.

CONCLUSIÓN

El cruzamiento de información tributaria debe ser una herramienta que utilicen los estados para así poder lograr una mejor recaudación de tributos y evitar el fraude fiscal y de esta forma y a través de las penalidades impuestas lograr desalentar las conductas disruptivas en

16 BULIT GOÑI Enrique “Constitución Nacional y Tributación Local” Editorial Ad Hoc. Buenos Aires Argentina Tomo II.

materia de tributos.

No obstante lo cual la ley aplicable a estos casos fue la ley 24769 que fue derogada por la ley posterior 27430. En esta materia es muy difícil probar el delito y la mayor parte de las sentencias existentes fueron a través del proceso de juicio abreviado. En los casos tratados por los juzgados en lo penal económico fueron desestimados ya que la prueba fue obtenida de manera ilegal y además vulneraban el artículo 18 de la Constitución Nacional ya que el principio de legalidad exige que la “ley debe ser anterior al hecho del proceso” y en el caso tratado “Falciani” fue anterior a la ley 27010.

Propuestas lograr consenso para así regular mediante el dictado de normas de acción positiva las fintech y el comercio electrónico y digital con el objetivo de obtener más transparencia y evitar el ciber delito, ya que durante los meses de pandemia pudimos observar que existió un avance en lo que se refiere a la ciber criminalidad.

Otra propuesta es la búsqueda de un consenso mundial para lograr una misma definición global respecto a que delitos serán los precedentes en el delito de peligro de lavado de activos para así facilitar la lucha de los estados contra el crimen trasnacional y la lucha contra el terrorismo. Porque si bien los Estados se niegan a esto porque existen quienes lo consideran como una renuncia a una parte de su soberanía pero esto permitiría evitar lagunas en la interpretación de las normas jurídicas que muchas veces son utilizadas por las compañías trasnacionales para realizar maniobras elusivas que tienden a erosionar las bases impositivas.

Otra utilidad que debe surgir de este intercambio de información es el poder tomar datos de la realidad para procurar mejorar las bases de datos de las administraciones tributarias y así lograr una mayor de justicia y equidad en lo que a impuestos se refiere, también lograr una óptima recaudación para cumplir la ansiada redistribución de riqueza y lograr un sistema más justo.

BIBLIOGRAFIA

- **ALVAREZ ECHAGUE**, Juan Manuel, “Las Sanciones Tributarias Frente a sus Límites Constitucionales” Editorial Ad Hoc, año de publicación 2004 Buenos Aires, Argentina, 349 p.
- **BARBERO** Natalia, “Protección Internacional de los Derechos Humanos” Buenos Aires Argentina, tomo 2 , Rubinzal Culzoni.
- **BULIT GOÑI** Enrique “Constitución Nacional y Tributación Local” Editorial Ad Hoc. Buenos Aires Argentina Tomo II. <https://www.redalyc.org>
- **Ley 11683**
- **Ley 27430**
- **PAREDES**, Priscila Rossana “Evasión Tributaria vs. Mecanismos de Control Implementados” de fecha de Publicación de fecha 30/06/2016 en la revista RETOS de Guayaquil Republica de Ecuador, editor “Universidad Politécnica Salesiana”
- **SABSAY** Daniel “La Constitución Nacional Comentada y Anotada” Errepar 1999, p. 30-31
- **INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:**
- **Acuerdo Sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria** ver <https://www.oecd.org> .
- **Buenas prácticas aplicadas en países de américa latina.** Ver <https://repositorio.cepal.org> .

TIENDA EN LÍNEA



www.floreseditor.com

\$160

Precio

LEONARDO PEREIRA MELÉNDEZ

Leonardo Pereira Meléndez

**LAS PRUEBAS
ILÍCITAS
EN EL SISTEMA
PENAL MEXICANO**

Concordado con el *Código Nacional
de Procedimientos Penales*
y con la *Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos*

Prólogo
Dr. Hebert Benavente Charres



Flores Editor y Distribuidor
Editorial Flores

**CONTACTO PARA
PEDIDOS**



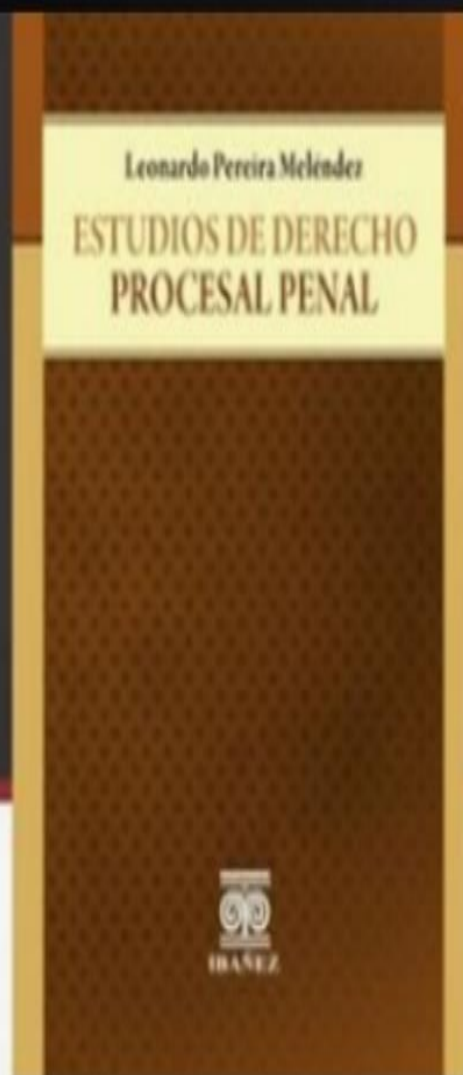
WhatsApp

55 3100 0800



**vadell
hermanos**

EDITORES



**ESTUDIOS DE DERECHO
PROCESAL PENAL**

Leonardo Pereira Meléndez



**CONTROL DE GARANTÍAS
EN EL PROCESO PENAL
LA SEGUNDA INSTANCIA
Y EL PRINCIPIO
DE LIMITACIÓN**

Yenny García Otálora



**TEORÍA
DEL DELITO**

Alfonso Zambrano Pasquel

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA